



Nit. 891.190.246-1

en alusión a mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y en relación con sus funciones en cabeza de la Administración Municipal de El Paujil, señaló:

a) **Era el encargado de dar cumplimiento los fines del Estado para reservar los recursos del municipio y adquirir bienes y servicios a precios del mercado evitando presuntos sobrecostos en la compra de los mismos**" (Auto de Imputación N°. 001, Página 19 de 36)

b) (...) **Que dentro de sus funciones se precisa la establecida en el numeral 9 del Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia: "Ordenar los Gastos municipales de acuerdo con el Plan de inversión y el presupuesto".** (Auto de Imputación N°. 001, Página 19 de 36)

c) (...) **Que incumplió con los deberes señalados por la Constitución y la ley Respecto a seguir sus actuaciones a la normativa vigente buscando un avalúo comercial que favoreciera las arcas de la entidad territorial que representaba**" (...) (Auto de Imputación No. 001, Página 20 de 36)

d) (...) **Podemos concluir en primer lugar que la gestión fiscal hace relación con las tareas funcionales concernientes a la administración directa del patrimonio público, administración que debe someterse al principio de legalidad así como a los postulados de la Función Pública en general y la función administrativa**" (...) (Auto de Imputación N°.01, Página 21 de 36)

e) **Citó apartado de la Sentencia C-549 DE 1993, en donde se preceptúa que: "... La vigilancia de la acción fiscal se endereza a establecer si las diferentes operaciones, transacciones y acciones jurídicas financieras y materiales en las que se traduce la gestión fiscal, se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades competentes ... y, finalmente los objetivos planes programas y proyectos que constituyen en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos de la administración"** (Auto de Imputación N.º001, Página 23 de 36)

f) **Que se evidencia que en su calidad de gestor fiscal indica que no asumió con la debida responsabilidad la disposición y control de los bienes del municipio sobre los cuales se canceló el pago que se efectuó por parte del municipio del paujil Caquetá al señor HERIBERTO ARCILA PUENTES**" (...) (Auto de Imputación N°. 001, Página 27 de 36)



Nit. 891.190.246-1

g) *Que no se evidencia el trámite realizado por parte del municipio ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el establecimiento de dicho avalúo y que a la postre una vez realizado por parte de este Instituto determina un avalúo sensiblemente muy elevado próximamente en un 40%, por tanto el señor Rodrigo Andrés Castro Betancourt en su condición de Alcalde del municipio de El Paujil, **debió conservar el debido cuidado y manejo dado los recursos de la Entidad territorial al momento de adquirir el lote con destino a la construcción de vivienda**, y es quien particularmente debía adoptar las medidas necesarias a efectos de asegurar la compra a precios del mercado, buscando el mejor precio que protegiera las finanzas de la entidad" (...) (Auto de Imputación N°. 001, Página 27 de 36)*

h) (...) *Que la conducta desplegada por el implicado generó una gestión inadecuada que conllevó a incurrir en las conductas determinadas en los artículos 3 y 6 de la ley 610 de 2000, que se refieren a la Gestión Fiscal y el Daño Patrimonial al Estado" (...) (Auto de Imputación No. 001, Página 28 de 36)*

i) *Que se quebrantó lo estableció en el artículo 23 "De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales" de la ley 80 de 1993, en punto de los principios de transparencia economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa" (Auto de Imputación N. 0001, Página 29 de 36)*

j) (...) *Que "En consecuencia no presentó el debido cuidado y la falta de diligencia en la compra del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 420-1109661, en desarrollo de la compraventa, generándose un presunto detrimento en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/CTE., y por cuanto se incurrió en una erogación antieconómica, ineficaz, inoportuna e injustificada, lo que conlleva la certeza del daño" (...) (Auto de Imputación N. 0001, Página 30 de 36)*

k) (...) *fue una conducta que omitió el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, al no acudir en primera instancia al Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el fin de establecer el valor comercial del predio que finalmente compró el municipio de El Paujil, conforme a la normatividad y procedimiento, pudiendo haber evitado que se generara el detrimento patrimonial en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/CTE. (Auto de Imputación N. 0001, Página 30 de 36)*



Nit. 891.190.246-1

También, haciendo énfasis en la compra realizada, la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, entre otros:

a) Indicó que dicha compra presenta presunto detrimento patrimonial al municipio toda vez que por parte de la administración vigente para la época de los hechos no se buscó un avalúo comercial del inmueble que favoreciera los intereses del municipio y preservara los recursos institucionales **y optó por solicitar un evaluador privado con persona presuntamente no facultado para hacerlo con certificación no vigente de evaluador (folio 35) y no acudió a un avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por tanto prefirió realizarlo ante un evaluador privado, el cual presenta sobrevaloración del precio del valor comercial, además de que presuntamente para la época el avalúo no se encontraba certificado por FEDELONJAS según certificación obrante a folio 35. (Auto de Imputación N°. 001, Página 21 de 36)**

b) Plasmó que se tiene el presunto sobre costo producto del pago el bien inmueble indicado con matrícula inmobiliaria número 420-109661 comprado por el municipio del Paujil Caquetá, **sin acudir ni solicitar avalúo comercial ante el Instituto geográfico Agustín Codazzi, y en cambio optar por la compra del mencionado bien, producto de un avalúo comercial privado, con quien presuntamente para la época del avalúo no estaba certificado para realizarlo, como tampoco se evidencia la solicitud por parte del señor Alcalde realizar solicitud ante FEDELONJAS, condujeron a determinarse detrimento patrimonial al municipio de El Paujil, Caquetá" (Auto de Imputación No. 001, Página 25 de 36)**

Y, es que, **a partir de todo lo anterior, cuya sustento jurídico de base fue el ya referido en consideración a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales y en punto del artículo 15 de la ley 9 de 1984 y sus modificaciones hasta las contenidas en el Artículo 2o del Decreto 4117 de 2006, es que la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, teniéndolo como base, motiva su Auto de imputación N°. 001, en el cual, desde la página 22 de 36 páginas en las que se encuentra contenido, se avizora la procedencia de la IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD en contra de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía número 17.681.291 de Florencia – Caquetá, a TÍTULO DE CULPA GRAVE como así**



Nit. 891.190.246-1

lo expresó el DESPACHO en la página 27 del mismo y que finalmente se RESUELVE en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/Cte. COP.

El problema, es que incide lamentablemente la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, en un yerro, equivocación por supuesto que se advierte, por cuanto para la fecha de los hechos que motivaron la Denuncia D-003-16, allegada por persona anónima a la Oficina de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL el 21 de agosto de 2014 y a partir de cuyo trámite se arribó a la conclusión de las "presuntas irregularidades ocasionadas por la compra el bien inmueble Lote No. 1, ubicado en el en el municipio del Paujil, Caquetá; el cual consta de 6 hectáreas, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661 del Círculo Notarial de Florencia, Caquetá; el cual fue adquirido por el representante legal del municipio de El Paujil, al realizarle la compra al señor Heriberto Arcila Puentes, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.681 291", conclusión a la que hace referencia el DESPACHO en su Auto de Imputación N°. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, la normatividad vigente que amparaba y contenía los parámetros legales a los cuales debía apegarse y a las cuales se sujetó MI DEFENDIDO en sus actuaciones y para el cumplimiento de sus funciones, es en efecto normatividad diferente a la referida por la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ.

Yerra el recurrente al repetir que su prohijado se ajustó a la normatividad vigente para la época de la compra del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 420-109661, toda vez que procesalmente se ha probado por parte de este Despacho, que el investigado infringió lo establecido en el artículo 2 del Decreto 4117 de 2006, que modificó el artículo 15 del Decreto No. 855 de 1994, el cual quedó así:

Artículo 2°. El artículo 15 del Decreto 855 de 1994 quedará así:

"Artículo 15. Avalúo de bienes inmuebles. Para efectos de la venta o adquisición de bienes inmuebles, los avalúos que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.



Nit. 891.190.246-1

Parágrafo. Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles". (Subrayado y negrilla de fuera de texto). Hecho que no ha sido probado por al defensa que el Municipio en cabeza del señor Alcalde RODRIGO ANDRÉS CASTRO recurrió a la Lonja de Propiedad Raíz del lugar donde se encuentra el bien inmueble comprado, para que realizara el respectivo avalúo comercial. De igual manera realiza una compra con base en el avalúo comercial realizado por el perito Fernando Gustavo Martínez Bravo, el día 10 de mayo de 2012, compra que se materializa el día 26 de diciembre de 2013, es decir cuando el avalúo comercial realizado había perdido vigencia, con lo cual viola el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998, el cual preceptúa:

"Artículo 19.- Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o impugnación." (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Debe advertirse, para encontrar el acierto de tal afirmación, EL DESARROLLO NORMATIVO CORRESPONDIENTE y que se sigue a continuación, por cuanto es de suma importancia señalar que el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, encontró que:
"En referencia a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales, y con sustento en el artículo 15o de la ley 9 de 1989, reglamentada parcialmente por el Decreto 855 de 1994 y modificado por el artículo 2o del Decreto 4117 de 2006, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá, motivó las consideraciones y argumentos para IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL, a TÍTULO DE CULPA GRAVE, en cuantía ya referida, contra mi PROHIJADO".

En punto de dicho contenido legal y el normativo de carácter reglamentario, tomado como sustento para la IMPUTACIÓN de mi DEFENDIDO, (pues así consta y obra en Auto de Imputación N°. 001 de fecha 26 de febrero de 2024), se tiene entonces que:

La Ley 9 de 1989, que establecía en su:

"Artículo 15: El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad que cumpla sus funciones de conformidad con el artículo 18 de la presente ley...



Nit. 891.190.246-1

Dicha Ley, como en efecto lo señala el DESPACHO, fue parcialmente modificada por el Decreto 855 de 1994, de tal suerte que, en dicho Decreto, respecto del articulado anterior, se expresó:

Artículo 15. Para efectos de la venta o adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo, que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo será efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, previa solicitud de la entidad.

Si pasados quince días hábiles contados a partir de la solicitud, ésta no fuere atendida, o el Instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, la entidad contratará, con tal fin, una persona natural o jurídica experta en la materia.

Se acota, no obstante, **que la Ley 388 de 1997, ya había introducido modificación sustancial, por cuanto ésta, modificó la ley 9 de 1989, en donde a tenor de lo expresado en su artículo 138, las disposiciones de la misma, sustituyeron expresamente las disposiciones contenidas entre otros, en el Inciso 1 del Artículo 15 de la ley 9 de 1989. En la ley 388 de 1997, que ha sufrido adiciones hasta la fecha, se encuentra contenido el Artículo 61, a partir del cual se introdujeron modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9 de 1989 y contenido en su Capítulo III. Así las cosas, destaca en dicho articulado:**

L. 388 de 1997/ARTÍCULO 61.- Modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9 de 1989: " El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno"...

Luego, dicho articulado así contenido en el Decreto 855 de 1994, fue modificado por el Artículo 2a del DECRETO 4117 DE 2006. En dicho DECRETO, se expresó:

Artículo 2º. El artículo 15 del Decreto 855 de 1994 quedará así:

"Artículo 15. Avalúo de bienes inmuebles. Para efectos de la venta o adquisición de bienes inmuebles, los avalúos que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín



Nit. 891.190.246-1

Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.

Parágrafo. Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles".

Recordemos que es hasta aquí, el sustento legal a que hizo mención el Ente Acusador "En referencia a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales", esto es, el artículo 15o de la ley 9 de 1989, reglamentada parcialmente por el Decreto 855 de 1994 y modificado por el artículo 2o del Decreto 4117 de 2006, para reprochar la conducta de mi PROHIJADO, quien debía, según el CRITERIO del DESPACHO que hace la IMPUTACIÓN, seguir las reglas que se establecían en su contenido. Sin embargo, debe tener en cuenta el fallador, que la norma preexistente al hecho que se le imputa a mi defendido, no es ésta, pues, como se verá a continuación:

El DECRETO 4117 de noviembre de 2006, fue DEROGADO expresamente por el Artículo 83 del Decreto Nacional 066 de 2008, en los siguientes términos:

"Artículo 83. Derogatoria y vigencias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación **y deroga expresamente** el artículo 25 del Decreto 679 de 1994, **los Decretos 855 de 1994, 1898 de 1994,** 329 de 1995, 1275 de 1995, 287 de 1996 salvo sus artículos 3o y 4o, 2964 de 1997, 1436 de 1998, 2334 de 1999, 2170 de 2002 salvo sus artículos 6o, 9o y 24; 3740 de 2004, 2503 de 2005, 219 de 2006, 959 de 2006, 2434 de 2006, **4117 de 2006,** 4375 de 2006 y 499 de 2007 y las demás normas que le sean contrarias.

Por su parte, el Decreto Nacional 066 de 2008, "Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, y se dictan otras disposiciones", contempló en su Artículo 82 "Arrendamiento y adquisición de inmuebles":

Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de reforma urbana y reforma agraria, las entidades estatales podrán adquirir, previas las autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa.



Nit. 891.190.246-1

Para efectos de la adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo comercial que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo será efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, previa solicitud de la entidad.

Si pasados quince días hábiles contados a partir de la solicitud, ésta no fuere atendida, o el Instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, **la entidad contratará, con el fin, un experto avalado por el Registro Nacional de Avaluadores.** El estudio previo se pronunciará sobre la posibilidad o no de obtener varias ofertas según la necesidad que la entidad deba atender, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la adquisición deba tener lugar. Así mismo y en el evento de concluir la posibilidad de obtenerlas, determinará la manera de compararlas.

A pesar de lo anterior, **salvo el Artículo 83, todo lo contenido en el Decreto 066 de 2008, fue DEROGADO en su integridad, por el Artículo 92 del Decreto 2474 de 2008.** En dicho DECRETO, se encuentra contenido el Artículo 83, que fuera posteriormente modificado por el Artículo 4o del DECRETO NACIONAL 3576 de 2009, así:

Artículo 4º. Modifíquese el artículo 83 del Decreto 2474 de 2008, el cual quedará así:

"Artículo 83. Arrendamiento y adquisición de inmuebles. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de reforma urbana y reforma agraria, las entidades estatales podrán adquirir, previas las autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa.

Para efectos de la adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo comercial que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo podrá ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi **o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores. (...)**

Obsérvese que hasta éste punto los decretos anteriores y que fueran tenidos en cuenta por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá como Sustento jurídico para su argumentación y a partir de las cuales se hacía el Reproche correspondiente a la Administración Municipal en cabeza de mi Prohijado por no acatar lo que éstos contenían y para arribar con ello, finalmente a la IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL a título de CULPA GRAVE, en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos



Nit. 891.190.246-1

(\$96.032.548) M/Cte. COP. en su contra, ya se encontraban derogados por la entrada en vigencia del **Decreto Nacional 066 de enero de 2008**.

Pues bien, con la entrada en vigencia del DECRETO NACIONAL 734 de 2012, a partir de su publicación en el diario oficial 48400 de abril 13 de 2012, y a partir de lo contenido en su Artículo 9.2, que derogó en su integridad las disposiciones vigentes de un gran compendio de Decretos, entre los que se cuentan: El Decreto 066 de 2008, Decreto 2474 de 2008 y se daría también, la derogación del decreto 3576 de 2009.

Argumentación jurídica esbozada por al defensa que se acepta por parte de este Despacho, en el entendido que la normatividad vigente para el momento de la realización del avalúo comercial por parte del perito evaluador Fernando Gustavo Martínez Bravo, el día 10 de mayo de 2012, era el Decreto 734 de fecha 13 de abril de 2012, en el cual se establece lo manifestado por el defensor de oficio, pero olvida que el contenido del artículo 3.7.3.2 del Decreto 734 de fecha 13 de abril de 2012, estableció:

“Artículo 3.7.3.1. Avalúo comercial. Para efectos de determinar el precio mínimo de venta de los bienes inmuebles de las entidades públicas, la entidad deberá obtener el avalúo comercial de los mismos, el cual podrá ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, bancas de inversión o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores.

El avalúo deberá tener una vigencia máxima de un año contado a partir de su expedición y encontrarse vigente al momento de determinar el precio mínimo de venta.” (Subrayado y negrilla fuera de texto). Hecho que está plenamente demostrado que la compra se realizó cuando la vigencia del avalúo estaba sin vigencia, por la, cuanto al compra del bien inmueble avaluado se realizó el día 26 de diciembre de 2013 y la fecha de realización del avalúo fue el día 10 de mayo de 2012; por tanto realizó una compra sin llevar a cabo las formalidades legales imperantes al momento de realizarse la compra por parte del Municipio de El Paujil, Caquetá; siendo Alcalde el señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURTH, hecho que ha sido evidenciado para este Despacho en la rendición de la prueba testimonial solicitada por el señor defensor de oficio, testimonio rendido por el propio perito evaluador Fernando Gustavo Martínez Bravo, en la rendición de la prueba testimonial solicitada por el señor defensor de oficio, en la cual manifestó el perito evaluador Fernando Gustavo Martínez Bravo, que la vigencia del avalúo comercial es de un año (folio 450).

Téngase en cuenta, que El Decreto Nacional 734 de 2012, era en efecto el compendio normativo y reglamentario vigente para la época de los hechos, esto es, la vigencia del año 2012. Recuérdesse que el Avalúo realizado por el PERITO AVALUADOR, Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO, a quien acudiera mi PROHIJADO, como Alcalde y



Nit. 891.190.246-1

Representante Legal del municipio de El Paujil, **elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DEL PREDIO** al que se ha hecho mención - y, que fuera adquirido posteriormente por parte del Municipio- **el día 10 de mayo de 2012.**

De hecho, el Decreto Nacional 734, **"Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones"**, vigente desde el día 13 de abril de 2012 hasta antes del 17 de julio de 2013, fecha en la cual entró en vigor el Decreto 1510 de 2013, señalaba en la Subsección VI "Del Arrendamiento y la adquisición de inmuebles":

Artículo 3.4.2.6.1. Arrendamiento y adquisición de inmuebles. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de reforma urbana y reforma agraria, **las entidades estatales podrán adquirir, previas las autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa.**

Argumentación jurídica que no acepta este Despacho, toda vez que en vigencia del Decreto 734 de fecha 13 de abril de 2012, se realizó el avalúo comercial del bien inmueble comprado, por el Municipio de El Paujil, Caquetá y en el mismo se estableció en el artículo 3.7.3.1 lo siguiente: **"Artículo 3.7.3.1. Avalúo comercial.** Para efectos de determinar el precio mínimo de venta de los bienes inmuebles de las entidades públicas, la entidad deberá obtener el avalúo comercial de los mismos, el cual podrá ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, bancas de inversión o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores.

El avalúo deberá tener una vigencia máxima de un año contado a partir de su expedición y encontrarse vigente al momento de determinar el precio mínimo de venta." (Subrayado y negrilla fuera de texto). Por tanto, era imperioso contar con el avalúo comercial vigente por parte de las entidades territoriales al momento de realizar la compra, hecho que no sucedió con el bien objeto de investigación para la época de los hechos.

Para efectos de la adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo comercial que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo podrá ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores.

En contraste con lo argüido por el DESPACHO que hiciera la IMPUTACIÓN, se colige de la normatividad vigente para la época en la cual se realizó el avalúo (12 de



Nit. 891.190.246-1

mayo de 2012), esto es, la precitada en el Artículo 3.4.2.6.1. del Decreto Nacional 734 y no la referida por la Honorable Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en punto de las reglas contenidas en los Decretos 855 de 1994 y 4117 de 2006, por encontrarse Derogados desde el año 2008, que:

Ya se ha determinado por este Despacho que si bien le asiste razón al defensor de oficio en los argumentos expresados anteriormente, también se ha precisado por parte de este Despacho en acápites anteriores que con base en el testimonio rendido por parte del perito evaluador ingeniero civil Fernando Gustavo Martínez Bravo, manifestó que el termino de vigencia del avalúo comercial es de un (1) año, hecho que denota este Despacho que al momento de la compra del bien inmueble con Matrícula inmobiliaria No. 420- 109661, el mismo carecía de validez, y por tanto con base en el avalúo determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC., realizado para el mes de diciembre de 2013, fecha en al cual se realizó la compra del bien inmueble por parte del Municipio de El Paujil, Caquetá; se avizora que se compró el bien inmueble sin avalúo comercial vigente y por tanto deviene el reproche fiscal por parte de este Despacho.

a) Para efectos de la adquisición del inmueble el municipio debía solicitar un avalúo comercial, el cual serviría como base para la negociación. Cosa que, en efecto, así se hizo.

Efectivamente se realizó el avalúo comercial, pero al momento de la compra no estaba vigente, por tanto se infringió la normatividad.

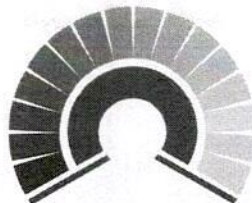
b) Dicho Avalúo podría ser adelantado bien sea por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado.

Efectivamente, mi Prohijado acudió, con la debida sujeción y apego a lo así establecido, optando por la Persona Natural de Carácter Privado, se insiste, porque así lo permite la norma.

Argumento que ha sido aceptado reiterativamente por este Despacho, pero que también se insiste en que al momento de la compra el día 26 de diciembre de 2013, el avalúo estaba sin vigencia, toda vez que el mismo se realizó el día 10 de mayo de 2012.

b) La persona natural o jurídica de carácter privado encargada de adelantar el Avalúo, debía estar o encontrarse registrada en el Registro Nacional de

612



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

Avaluadores. Cosa que efectivamente se comprobó y se demostró con suficiencia en el Apartado Segundo, Respecto de **"La Idoneidad del PERITO AVALUADOR"**, de quien se corroboró, como así obra en las Capturas de Imagen N.º11 y 12, incorporadas en el presente Escrito, respecto de Certificación Contenida en el Expediente del Proceso de la Referencia y de la Cual se cuestiona el SUSCRITO, no se haya realizado la valoración debida por parte del DESPACHO que hiciera la IMPUTACIÓN, pues, en la misma se aprecia, que el Señor INGENIERO CIVIL **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.541.581 de Popayán, para la época en la que elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, esto es, el día 10 de mayo de 2012, "sí contaba con APROBACIÓN COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA" y contaba con Registro en el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A., con Matrícula R.N.A/C.C-25-1885, con vigencia hasta el día 31 de julio de 2012. Registro cuya existencia fue corroborada y Certificada por el CONSEJO DE AVALUADORES DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", de la cual, además, era miembro activo desde el año 2004. Razones, todas éstas, para desvirtuar las presunciones manifestadas por el DESPACHO, quien, para IMPUTAR, realizó ponderaciones sin sustento bajo la expresión "PRESUNTAMENTE NO CONTABA", pudiendo con ello, inducir al error y restar el mérito que le corresponde y que debe ser observado, se solicita de manera reiterativa y respetuosa, por el FALLADOR, en punto de la ya ACREDITADA IDONEIDAD del Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO, quien, también, acorde con los criterios de contenido reglamentario así contenidos en el Artículo 3.4.2.6.1. del Decreto Nacional 734, "se encontraba facultado y habilitado para "avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general, a nivel Nacional" (Véanse Capturas N.º. 11 y 12).

Argumento que también ha aceptado este Despacho, en el entendido que en el Auto de Imputación No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, no se dejó claro por parte de este Despacho, que no es que el perito no fuera idóneo, sino que el avalúo había perdido vigencia, toda vez que el mismo se realizó el día 10 de mayo de 2012, y la compra real se realizó el día 26 de diciembre de 2013, postura que entra a ser corregida por este Despacho.

613



Nit. 891.190.246-1

Por tanto, no se hacían necesarias para la Administración Municipal, en cabeza de mi Defendido, como tampoco podía exigírsele a éste, por parte de la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA de RESPONSABILIDAD FISCAL, que obrara de conformidad con los parámetros legales establecidos en norma DEROGADA.

Argumentación que le asiste razón al defensor de oficio, la cual ha sido aceptada en acápites anteriores.

Se tiene, en virtud de lo contenido en el expediente del proceso de la referencia, que mi Defendido, obró con apego a lo establecido en el Decreto Nacional 734 de 2012, vigente para la época de los hechos. Ello, toda vez que acudió a persona natural de carácter privado, esto es, El Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO, persona registrada en el Registro Nacional de Avaluadores, quien, como ya se dijo, contaba con APROBACIÓN COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA. Aprobación certificada por el CONSEJO DE AVALUADORES DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", de la cual, además, era miembro activo desde el año 2004.

Argumentos que no son de recibo por parte de este Despacho, toda vez que si bien acudió a perito avaluador particular permitido por la norma, no obró con apego a la normatividad vigente invocada por el defensor de oficio en cuanto a la vigencia del avalúo comercial, toda vez que de conformidad con el Decreto 734 de fecha 13 de abril de 2012, se violó lo establecido en el artículo 3.7.3.1 del Decreto 734 de 2012, que preceptúa: "**Artículo 3.7.3.1. Avalúo comercial.** Para efectos de determinar el precio mínimo de venta de los bienes inmuebles de las entidades públicas, la entidad deberá obtener el avalúo comercial de los mismos, el cual podrá ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, bancas de inversión o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores.

El avalúo deberá tener una vigencia máxima de un año contado a partir de su expedición y encontrarse vigente al momento de determinar el precio mínimo de venta." (Subrayado y negrilla fuera de texto). Tal como reiterativamente se ha dicho el avalúo comercial se realizó el día 10 de mayo de 2012, su vigencia iba hasta el 10 de mayo de 2013, y el predio se compró el día 26 de diciembre de 2013, es decir que el Municipio de El Paujil, Caquetá; recurrió a una compra del bien inmueble sin avalúo comercial existente y vigente, lo que denota una infracción a lo preceptuado en la normatividad citada anteriormente; es por ello que al estar vigente el avalúo comercial por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en la fecha de diciembre de 2013, para este Despacho no cabe duda que es el avalúo referencia para inferir que se presentó un



Nit. 891.190.246-1

detrimento patrimonial al Municipio de El Paujil, Caquetá; y por tanto será hallado responsable fiscalmente el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, quien en su calidad de Alcalde procedió a realizar al compra, sin reconocimiento de la normatividad precitada.

Nótese que, CONTRARIO A LAS MANIFESTACIONES Y ARGUMENTOS esgrimidos por el DESPACHO en su Auto de Imputación del 26 de febrero de 2024, el Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO, para la fecha en que elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DEL PREDIO al que se ha hecho mención y que fuera adquirido posteriormente por parte del Municipio, contaba con Registro en el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES: R.N.A/C.C-25-1885, con vigencia hasta el día 31 de julio de 2012.

*De lo anterior se colige, como ya fue referido en apartado anterior: i) LA IDONEIDAD del Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO, ii) que el mismo se encontraba facultado para "avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional", pues su registro se encontraba vigente (Véase la Captura No. 11), iii) que contrario a lo manifestado en Auto de Imputación No. 001, mi Representado, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, obró con estricto apego a lo contenido en Decreto Reglamentario, expedido por el Señor Presidente de la República, en ejercicio de las facultades legales que a éste se le confieren por virtud del numeral 11 del artículo 189 superior y con vigencia en la época en que ocurrieron los hechos. iv) No puede desconocerse entonces, que mi PROHIJADO, **si cumplió con los deberes señalados por la Constitución y la ley Respecto a seguir sus actuaciones con apego a la normativa vigente.** Es de allí que se predica que el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, "asumió con la debida responsabilidad la disposición y control de los bienes del municipio", por cuanto, es con apego a la Ley y no de otra forma, como se garantiza el cumplimiento de las funciones encomendadas, incluso, en el ejercicio de la función fiscal. No olvidemos también, que es en la Ley, en donde se prevén, además, los principios que rigen tales actuaciones. Si el honorable DESPACHO consideró la presunta existencia del Daño, debió advertir también, que mi PROHIJADO actuó de conformidad con lo establecido en el contenido de carácter reglamentario que se encontraba Vigente al acto que se le imputa. Lamentablemente, tal IMPUTACIÓN, como se ha visto, no obró de conformidad con las leyes preexistentes y en cambio encontró sustento, en norma DEROGADA, distinta a la que se encontraba vigente para la fecha 10 de mayo de 2012, cuando se realizó el avalúo y la cual se sujetó con apego irrestricto mi Prohijado.*



Nit. 891.190.246-1

Todas las anteriores, son razones suficientes que desvirtúan lo argumentado por la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá, quien, en desacierto lamentable, imputó responsabilidad fiscal a mi Prohijado, con sustento en las reglas establecidas en contenido normativo que no podía aplicarse, por cuanto se encontraba DEROGADO.

En síntesis: i) Mi prohijado no estaba obligado a acudir exclusivamente ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que previa solicitud a éste, el mismo, realizara el avalúo. ii) Tampoco le era exigible que agotara los términos establecidos de 15 días hábiles en caso de no obtener respuesta por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o esperar pronunciamiento alguno del Instituto, que diera cuenta de la imposibilidad del mismo para hacer dicho avalúo, para poder, en dicho caso, acudir ante persona natural o jurídica de carácter privado y así, adelantar el avalúo requerido. iii) Tampoco se requería que la persona en cuestión, debiera encontrarse registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde se encuentra ubicado el bien para adelantar dichos avalúos, por cuanto sólo bastaba que la persona encargada de hacer el avalúo, se encontrara registrada en el Registro Nacional de Avaluadores. iv) No se requería elevar solicitud alguna a FEDELONJAS, como tampoco, autorización por parte de esta o que la misma, delegara a dicha persona. Todo lo anterior, se insiste, por encontrarse contenido en los decretos 855 de 1994 y 4117 de 2006, derogados desde 2008, que no eran aplicables y por cuanto los criterios que acogió la administración municipal, en cabeza de mi Defendido y que debían ser acatados, corresponden a los establecidos en el Decreto Nacional 734 de 2012, vigente para la época de los hechos.

Al respecto y en punto del reproche que se le hace a mi Prohijado y por el cual se le imputa RESPONSABILIDAD FISCAL a TÍTULO DE CULPA GRAVE, con sustento en compendio normativo DEROGADO, como en efecto ya fue argumentado, se advierte vulneración del Debido Proceso, derecho de carácter fundamental, establecido en el Artículo 29, superior y cuyo tenor señala:

"El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Argumentación repetitiva que ya se han desatado en acápites anteriores. Respecto de la idoneidad del perito evaluador, este Despacho ha sido categórico en que su idoneidad no está

676



Nit. 891.190.246-1

en entredicho, lo que se ha sostenido por parte de este Despacho es la vigencia del peritaje realizado al bien inmueble objeto de compra, el cual al momento material de la misma se encontraba sin vigencia, hecho que constituye el reproche fiscal que realizada en esta providencia por parte de este Despacho. Se ha demostrado también hasta la saciedad en esta orilla, que con base en la manifestación testimonial rendida por el perito evaluador, en cuyo testimonio aseveró que la vigencia de un peritaje de avalúo comercial es de un (1) año a partir de su realización, de conformidad con la norma referida por parte de la defensa el cual consistía en el Decreto el Decreto 734 de 2012, vigente para la época de la realización del avalúo comercial, el mismo establece en el artículo 3.7.3.1 del Decreto 734 de 2012, que: **“Artículo 3.7.3.1. Avalúo comercial. Para efectos de determinar el precio mínimo de venta de los bienes inmuebles de las entidades públicas, la entidad deberá obtener el avalúo comercial de los mismos, el cual podrá ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, bancas de inversión o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores.**

El avalúo deberá tener una vigencia máxima de un año contado a partir de su expedición y encontrarse vigente al momento de determinar el precio mínimo de venta.” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Sin embargo, ante tanta insistencia por parte de la defensa en hacer creer que el investigado RODRIGO ANDRÉS CASTO BETANCOURT en su condición de Alcalde y quien ejerció la compra del bien inmueble objeto de investigación, es evidente para este Despacho que no actuó con apego a la Ley, y bien puede decirse que compró un bien que no tenía avalúo comercial vigente como lo establecía la normatividad vigente, hecho que la defensa procura desconocer o esconder.

En consecuencia, La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica), advierte en su Artículo 25 “que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante jueces o tribunales que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”

Con relación al derecho al debido proceso, derecho fundamental extensible y con aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, en sentencia C-341 de 2014, la honorable Corte Constitucional, ha sido enfática en señalar:

5.3. El derecho al debido proceso:



Nit. 891.190.246-1

5.3.1. El debido proceso como derecho fundamental, se encuentra consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, y como primer elemento cabe resaltar su aplicación no solo para los juicios y procedimientos judiciales, sino también para todas las actuaciones administrativas, cuando establece que: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas" ...

5.3.2. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

En dicha sentencia, también precisó la Honorable Corte:

"Hacen parte de las garantías del debido proceso:

(i) El derecho a la jurisdicción, ... **a obtener decisiones motivadas** (...)

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, **conforme a los imperativos del orden jurídico**, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

Así mismo, es oportuno considerar que, de conformidad con lo Establecido **Sentencia C-710/01, respecto del principio constitucional de legalidad, la honorable Corte Constitucional indicó que dicho principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas.** Señaló, además, que la consagración constitucional del principio de legalidad define la relación entre el individuo y el Estado al prescribir que el uso del poder de coerción será legítimo solamente si está previamente autorizado por la ley. **De allí que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa.**

El solo hecho de haberse imputado Responsabilidad Fiscal en contra de mi Prohijado por parte de la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, con sustento en normatividad cuya aplicación no era exigible al momento de la ocurrencia de los hechos que ésta señala para determinarla, motivando sus decisiones para IMPUTAR en procedimientos y reglas que se encontraban derogadas y que NO tenían por qué haber sido observadas por mi REPRESENTADO, IMPLICA, advierte el SUSCRITO



Nit. 891.190.246-1

*DEFENSOR DE OFICIO, una clara vulneración al principio de Legalidad contenido en el Artículo 29 superior, por cuanto **Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa.***

Imputación que ha sido corregida por este Despacho en la presente providencia, con base en el testimonio solicitado por al defensa del investigado, y quien realizó el avalúo comercia del bien inmueble con Matrícula Inmobiliaria No. 420-109661 en la fecha 10 de mayo de 2012, siendo realizada la compra el día 26 de diciembre de 2013, fecha en la cual el avalúo comercial realizado por el ingeniero civil Fernando Gustavo Martínez Bravo y quien en el testimonio rendido ante este Despacho manifestó a folio que la vigencia del avalúo comercia es de un (1) año, concomitante con al norma manifestada por el defensor de oficio vigente al momento del avalúo y compra realizada, esto es el Decreto 734 de fecha 13 de abril de 2012.

*No en vano, lo contenido en el **Artículo 2° de la ley 610 de 2000, “Principios orientadores de la acción fiscal”**, en cuyo contenido se advierte que “En el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal se garantizará el debido proceso y su trámite se adelantará con sujeción a los principios establecidos, entre otros, en el artículo 29 Superior”*

*No puede perderse de vista que, al respecto, la **Honorable Corte Constitucional en sentencia C-428 de 2019**, advierte que:*

“El principio de legalidad como principio rector del ejercicio del poder estatal para restringir derechos se deriva de los artículos 6°, 29 y 122 de la Constitución e implica que los servidores públicos solo pueden hacer lo prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en el ordenamiento jurídico. De este modo, (i) se protege la dignidad humana, al reconocer la capacidad de las personas para ajustar su conducta a las prescripciones de las normas; (ii) se evita la arbitrariedad, tan ajena a la noción de Estado de derecho; (iii) se asegura la igualdad en la aplicación de las normas y, por esta vía, se refuerza la legitimidad del Estado; y (iv) se fortalece la idea de que en un Estado de derecho el principio general es la libertad”

*Contrario al reproche que hiciera la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá, el Señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, Alcalde y Ordenador del Gasto del Municipio de El Paujil Caquetá, obró con apego estricto al contenido de carácter reglamentario que sí estaba vigente y al cual debía sujetarse para el cumplimiento de las funciones respecto del acto que hoy, sin sustento jurídico y, por tanto, faltando al principio de legalidad se le imputa.*



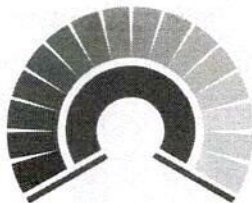
Nit. 891.190.246-1

Respecto al debido proceso, la defensa no puede manifestar que el mismo se ha violado, siempre se han dado todas las garantías procesales para que el investigado pueda tener acceso a su defensa, lo cual se ha realizado por parte de la defensoría de oficio, por cuanto el mismo se ha rehusado a comparecer al proceso y sin embargo ha sido notificado y comunicado de todas y cada una de las decisiones adoptada por este Despacho, tampoco puede la defensa manifestar que se ha violado el debido proceso, toda vez que este Despacho se caracteriza con brindar plenas garantías tanto al investigado como a la defensa, a quien también se han notificado y comunicado todas y cada una de las decisiones administrativas que en desarrollo del proceso se han tomado. Se precisa que en el devenir de la investigación se han reconocido a la defensa argumentos jurídicos pasados por alto por este Despacho, pero también se deja de presente que en la presente investigación en sus diferentes etapas, afloran conceptos jurídicos y testimonial que hacen necesario por parte de este Despacho modificar su postura inicial, pero siempre conservando que con apego a la Ley, el investigado infringió la normatividad vigente al momento de comprar el bien inmueble y por tanto su gestión fiscal continua siendo generadora de detrimento patrimonial para el Municipio de El Paujil, Caquetá.

Es preciso señalar que en virtud de lo consagrado en el numeral 1 del Artículo 315 Superior. Corresponde al alcalde "Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo". Mi Prohijado, desplegó sus actuaciones, entre ellas, las contenidas también en el Numeral 3 Ibidem, respecto de la dirección de la acción administrativa del municipio, del cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios a su cargo, con apego a lo establecido en la norma vigente y no tenía por qué sujetarse a los procedimientos establecidos en aquellas que no lo estaban, como así pretende hacerlo ver el Despacho de la Contraloría Departamental en su Imputación.

Nótese que mi Prohijado ordenó los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto, que, para ello, contó con la aprobación conferida por parte del Concejo municipal a través de acuerdo aprobado en dos debates, con consecutivo N.º 11 de fecha 22 de junio de 2012, "Por medio del cual se autorizó al Alcalde del municipio de El Paujil, Departamento del Caquetá, para adquirir un inmueble destinado al desarrollo de un proyecto de vivienda".

Es imperativo traer a colación, que, si bien la Compra se realizó en el año 2013, tanto el Avalúo comercial, así como las actuaciones que permitieron la aprobación para la compra del bien inmueble, respecto de las cuales hizo reproche el DESPACHO, se surtieron en vigencia del año 2012, de ello, obra constancia suficiente en el



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

expediente del proceso de la referencia, como a continuación se expone a partir de apartes extraídos de los documentos "INFORME AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES y ACUERDO N°. 011, de fecha 22 de junio de 2012: (Ver capturas 22 y 23)

Captura N° 22

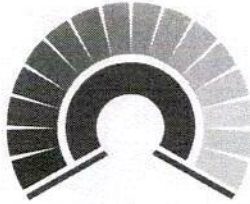
FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO
INGENIERA CIVIL

Avalúos en general, interventorias, acueductos, vías, vivienda.

INFORME DE AVALÚOS DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES

1. INFORMACIÓN BÁSICA			
DOCUMENTO SOLICITUD DE AVALÚO		OFICINA	SOLICITANTE
Solicitud de servicio		FLORENCIA	ALCALDIA DE PAUJIL
NOMBRE DEL PREDIO			ESCRITURA No.
LA BONANZA			450
NOTARIA No.	No. CATASTRAL	FECHA DE ESCRITURA	MATRÍCULA INMOB.
Segunda del Circulo de Florencia	(X) 01 00031 0004 (XX)	19 de Marzo de 2010	440 88285
VEREDA:		MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
El Borugo		El Paujil	Caquetá
NOMBRE DEL PROPIETARIO		NIT DEL SOLICITANTE	TELÉFONO
LUIS FERNANDO LEE DIAZ		800095763 0	984314080
DIRECCIÓN DEL PREDIO:			
Dentro de la cabecera Municipal de El Paujil, se toma la vía lleva al barrio 1 de Mayo, carrera 4E, hasta llegar al limite del perímetro urbano, en la zona que colinda con la vereda El Borugo.			
DOCUMENTOS REVISADOS PARA EL AVALÚO			
Escritura Publica No 450 del 19 de marzo de 2010, Notaria Segunda Florencia.			
FECHA DE VISITA		FECHA INFORME	
5 de Mayo de 2012		10 de Mayo de 2012	
2. INFORMACIÓN DEL SECTOR			
2.1 DESARROLLO			
El sector donde se ubica el predio objeto de avalúo se caracteriza por poseer viviendas dispersas construidas en un solo nivel con techos de Zinc, paredes y piso en maderas cortadas en el mismo sector. Los terrenos con			

Captura No. 23



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

ACUERDO N° 011
(22 de Junio de 2012)

Por medio del cual se autoriza al Alcalde de el municipio de El Paujil, departamento del Caquetá, para adquirir un inmueble destinado al desarrollo de un proyecto de vivienda”.

El Concejo Municipal de El Paujil

En ejercicio de sus facultades que le otorga la ley 136 de 1994, la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y el Decreto 13333 de 1986

ACUERDA


Artículo Primero: Autorizar al alcalde municipal de el Paujil, Departamento del Caquetá, para que con el lleno de todos los requisitos legales, presupuestales y técnicos, adquiera a nombre del Municipio un terreno, previos estudios técnicos adelantados por la Secretaría de Planeación Municipal, para ejecutar los programas de Vivienda de Interés Social y/o interés prioritario, consignados en el plan de desarrollo

Artículo Segundo: El presente acuerdo rige a partir de su fecha de sanción y publicación.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Presentado al Honorable Concejo de El Paujil, Caquetá a los 22 días del mes de Junio del 2012.


ANGÉLICA MARÍA HENAO TORRES
Presidenta Concejo Municipal


MARY ROMERO PERLA
Secretaria Concejo Municipal

Reproche que a hoy este Despacho se ratifica, toda vez que la compra se realizó sin el cabal cumplimiento del Decreto 734 de fecha 13 de abril de 2012, toda vez que el mismo se preceptuaba en el artículo 3.7.3.1 del Decreto 734 de 2012, que: **“Artículo 3.7.3.1. Avalúo comercial.** Para efectos de determinar el precio mínimo de venta de los bienes inmuebles de las entidades públicas, la entidad deberá obtener el avalúo comercial de los mismos, el cual podrá ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, bancas de inversión o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores.

El avalúo deberá tener una vigencia máxima de un año contado a partir de su expedición y encontrarse vigente al momento de determinar el precio mínimo de venta.” (Subrayado y negrilla fuera de texto). Compra que se realizó con el avalúo comercial sin vigencia, violando así flagrantemente la normatividad vigente al momento de la realización de la compra y por

622

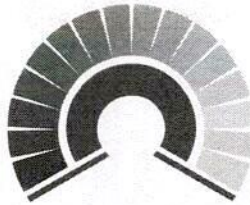


Nit. 891.190.246-1

tanto deviene el reproche fiscal soportado y sustentado por este Despacho, en el cual queda de manifiesto que se presentó detrimento patrimonial al Municipio de El Paujil, Caquetá; teniendo en cuenta que el avalúo comercial realizado por el ingeniero civil Fernando Gustavo Martínez Bravo, no tenía vigencia y que al confrontarse con el realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el mes de diciembre de 2013, desencadena lo aseverado por este Ente de Control en lo relacionado con el detrimento patrimonial que se generó en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, que no ha podido desvirtuar la defensa. Bien debió la defensa en lo acucioso que ha sido con la mención de la normatividad vigente al momento de realizarse el avalúo comercial, haberse percatado y determinado que se violó la normatividad vigente en cuanto a la vigencia que debía tener dicho avalúo al momento de realizarse la compra, hecho que deliberadamente ha omitido. Igualmente, este Despacho ya manifestó que causa extrañeza que inexplicablemente el señor Alcalde para la época de ellos hechos solicitó un avalúo comercial, al perito, **sin que en la fecha de ser rendido, es decir el día 10 de mayo de 2012,** el Concejo Municipal lo hubiese facultado para la compra del bien inmueble, toda vez que **la autorización del cuerpo colegiado municipal se presenta mediante el Acuerdo No. 011 de fecha 22 de junio de 2012.**

También, que mi PROHIJADO, obrando de conformidad con dicha autorización, acompañado por la supervisión de la Secretaría de Planeación Municipal, estipulando además, "la obligación al vendedor para que permitiera la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a estas la información y documentación que solicitaran en relación con el contrato que se suscribía y su ejecución, procedió a realizar los actos que materializaron la compra venta del bien inmueble tantas veces referido. De la autorización emitida por parte del Concejo municipal, así como de la Supervisión ejercida por el señor EDINSON CUESTA MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.322.202 de Puerto Wilches, Secretario de Planeación Municipal y de la estipulación contenida en la Cláusula Décimo Cuarta respecto de la vigilancia de las veedurías ciudadanas, obra constancia en apartes de los documentos contrato de Promesa de Compraventa N.º 001 y Escritura Pública N.º. 3078 del 26 de diciembre de 2013, que se exhiben a continuación (Ver capturas 24, 25 y 26):

Captura No. 24 y 25



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1


aplicación a lo dispuesto por el artículo 9° de la misma ley.

DECIMA TERCERA. – INDEMNIDAD: EL VENDEDOR mantendrá indemne al COMPRADOR de cualquier daño o perjuicio originado de reclamaciones de terceros que tengan como causa toda acción u omisión del VENDEDOR, subcontratista, proveedores o dependientes a su cargo y que con ellas haya ocasionado daños, lesiones y/o perjuicios materiales y/o morales en la integridad personal y/o patrimonial de los mencionados terceros durante la ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 5.1.6. del Decreto 734 de 2012.

DECIMA CUARTA. – VEEDURÍA CIUDADANA: El VENDEDOR se obliga a permitir la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a éstas la información y documentación que soliciten en relación con el presente contrato y su ejecución.

DÉCIMA QUINTA. – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El COMPRADOR pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al RUBRO: Código: 020204050201020103, Denominado: "Planes y proyectos para la adquisición de vivienda" del presupuesto de gastos correspondiente a la vigencia fiscal del año 2013, de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 02 de Mayo de 2013.

Captura N.º 24

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.055.763-0	CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA
		Página 4 de 4
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA No. 001		FECHA: DICIEMBRE 26 DE 2013

Notificación de Supervisor del Contrato:

Mediante mi firma en el presente documento me doy por notificado en la fecha, de mi designación como Supervisor del presente Contrato de Arrendamiento, por parte del señor Alcalde Municipal, por lo cual declaro estar en el deber de asumir las funciones señaladas en el inciso segundo del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Nombre:

Firma:

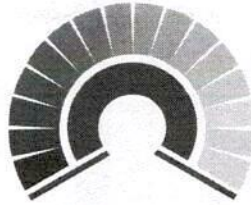
Cargo:

C.C.

Fecha:

Roberto Cerato Leja
Roberto Cerato Leja
Secretario
01/12/2013 De 10:15 am
26 de Diciembre del 2013.

Se precisa que respecto a los mecanismos de control administrativo y ciudadano invocados por la defensa, que no existe procesalmente evidencia de las acciones desarrolladas por el supervisor del contrato de Compraventa, pues no se evidencia informes de supervisión parcial o total, que demuestren su cabal cumplimiento de sus funciones. De igual manera no se evidencia la conformación de veedurías ciudadanas o populares que ejercieran la vigilancia que por Ley debe contener la ejecución contractual de todo contrato estatal, con lo cual también se viola estos preceptos legales invocados por la defensa. Con lo cual se quedó en letra muerta el



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

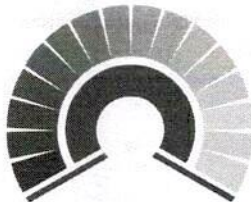
Nit. 891.190.246-1

control administrativo y ciudadano que profesa la defensa que tuvo como soporte el investigado para llevar a acabo la compra.

Captura N°. 26

SEGUNDO - Venta Parcial: Que actuando en su condición de Vendedor(a) y debidamente autorizado según Resolución No. 019 del 17 de diciembre de 2013, emanada de Secretaría de Planeación Municipal de El Paujil - Caquetá, Autorización de Fraccionamiento emanada de la Dirección Territorial de Caquetá del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural "INCODER", documentos que se agregan al protocolo del presente instrumento, transfiere a título de compraventa Parcial a favor del MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETÁ, identificado con NIT: 800.095.763-0, representado en éste acto por el señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT, mayor de edad, domiciliado(a) en el municipio de El Paujil y de paso por ésta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.691.533 expedida en Florencia, en su condición de Alcalde Popular y Representante Legal del Municipio de El Paujil - Caquetá, lo cual acredita con certificación expedida por la Gobernación del Caquetá y debidamente facultado mediante Acuerdo No. 11 del 22 de junio de 2012 emanado del concejo municipal de El Paujil - Caquetá, documentos que se protocolizan junto

Captura N°. 27



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

PROTÓCOLO

Se presentan para agregar al protocolo: _____

1. Comprobantes requeridos (Art. 44 del Decreto 960 de 1970): - Paz y Salvo Predial del 26 de diciembre de 2013, expedido por la Oficina de Recaudo Municipal de El Paujil - Caquetá, a favor de LUIS FERNANDO LEE DIAZ identificado con cc: 96.332.390, sobre el predio identificado con Ficha Catastral No. 00-01-0003-0004-000, avaluado en 35.900.000 por el año 2013, válido hasta el 31 de diciembre de 2013. NOTA: No se cobra Valorización. _____

2. Fotocopias de cédulas de ciudadanía de los comparecientes. _____

3. Certificación expedida el 26 de diciembre de 2013 por la Gobernación del Caquetá, en la cual se hace constar que el señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT, se desempeña actualmente como Alcalde Popular del Municipio de El Paujil - Caquetá. _____

4. Copia del Rut del municipio de El Paujil - Caquetá. _____

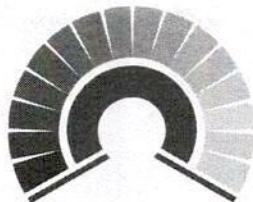
5. Resolución No. 019 del 17 de diciembre de 2013, emanada de Secretaría de Planeación Municipal de El Paujil - Caquetá. _____

6. Autorización de Fraccionamiento emanada de la Dirección Territorial de Caquetá del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural "INCODER". 7. Constancia de Reparto. 8. Acuerdo municipal No. 11 del 2012, por el cual se faculta al Alcalde Municipal para firmar el presente Instrumento. 9. Certificado de Libertad y Tradición. _____

Esta escritura se hizo conforme a datos suministrados por los comparecientes, se autoriza y firma en las hojas de papel Notarial números: _____

Papel notarial _____

626



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

Que la compra realizada, fue elevada a instrumento público, de conformidad con la normatividad vigente para la época y que **medió la correspondiente autorización por parte del INCODER, así como de la Oficina de Planeación a través de Resolución 019 del 17 de Diciembre de 2013**, como consta en los apartes de los documentos Escritura Pública N°. 3078 del 26 de diciembre de 2013, Formulario de Calificación CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN F.M.I 420-109661 que se exhiben a continuación (**Ver capturas 27 y 28**):

Captura28:

Nro Matricula: 420-109661

OFICIO DE REGISTRO 420 FLORENCIA
MUNICIPIO EL PAUL DEPARTAMENTO CAQUETA VEREDA EL BORUGO TIPO PREDIO RURAL

DIRECCION DEL INMUEBLE
1ª LOTE

ANOTACION Nro 3 Fecha 27/12/2013 Radicación 2013-420-6-9583

DOC ESCRITURA 3078 DEL 26/12/2013 NOTARIA SEGUNDA DE FLORENCIA VALOR ACTO: \$ 240.000.000

ESPECIFICACION MODO DE ADQUISICION : 0126 COMPRAVENTA PARCIAL - 6 HAS CONFORME A LA RESOL.019
DEL 17-12-2013 EMANADA DE PLANEACION MPAL Y AUTORIZACION DEL INCODER

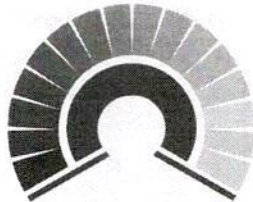
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE AROLA FUENTES MERIBERTO CC# 6681291

MUNICIPIO DE EL PAUL NIT# 8000957630

FOLOS DERIVADOS DE LA ANOTACION

627



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

Que para el pago de la Obligación por concepto de Compra-venta del bien inmueble adquirido al señor ARCILA PUENTES, la administración destinó los recursos correspondientes para el pago y de ello obra constancia en comprobante de pago N°. 3783, el cual fue firmado también por el señor TESORERO MUNICIPAL, el REVISOR CONTABLE y el beneficiario del pago. Así obra constancia en el documento que se exhibe a continuación (Ver Capturas N°. 29 y 30):

Captura N°. 29

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE EL PAUJIL
TESORERÍA MUNICIPAL
NIT: 800,095,783-0

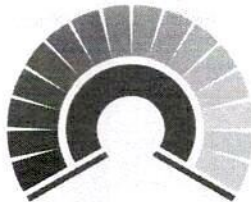
COMPROBANTE DE PAGO No. 3783

FECHA:	2013/12/30	BANCO:	CTA 1336-6 BIAGRARIO
BENEFICIARIO:	ARCILA PUENTES HERIBERTO	CHEQUE:	1296
IDENTIFICACION:	6,681,291	DEPENDENCIA:	Administración Central
DIRECCIÓN			
TELÉFONO		VALOR DEL GIRO:	\$ 237,600,000.00

LA SUMA DE:	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESO M/CTE
-------------	--

	POR CONCEPTO DE:	VALOR
2401010100	CANCELA FACTURA No.	240,000,000.00
2436120000	Enajenación de propiedades, pl	(2,400,000.00)
CONCEPTO:		
PAGO COMPRAVENTA TERRENO MATRICULA INMOBILIARIA No 420-109661, CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA, SEGUN RECURSOS DE REGALIAS		

628



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

Captura N°. 30

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE EL PAUJIL
TESORERÍA MUNICIPAL
NIT: 800.095.783-0

COMPROBANTE DE PAGO No. 3783

FECHA: 2013/12/30	BANCO: CTA 1336-6 BIAGRANIO
BENEFICIARIO: ARCILA PUEENTES HERIBERTO	CHEQUE: 1296
IDENTIFICACION: 6.681.291	DEPENDENCIA: Administracion Central
DIRECCION	VALOR DEL GIRO: \$ 237,600,000.00
TELEFONO	
LA SUMA DE: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESO M/CTE	
POR CONCEPTO DE:	
2401010100 CANCELA FACTURA No.	240,000,000.00
2436120000 Enajenación de propiedades, pl	(2,400,000.00)
CONCEPTO:	
PAGO COMPRAVENTA TERRENO MATRICULA INMOBILIARIA No 420-109661, CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA, SEGUN RECURSOS DE REGALIAS	
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.783-0	
FIEL COPIA TOMADO DEL ORIGINAL	
FECHE: 09 SEP 2014	
FIRMA: [Firma]	
SECRETARIO DE GOBIERNO	
RODRIGO A. CASTRO ELTANCOURT ALCALDE MUNICIPAL Ordenador	JOSE DAIME SANCHEZ TORRES TESORERO MUNICIPAL Elabora
EFREN DIAZ GARCIA ASESOR CONTABLE Revisa	

Aquí, se hace pertinente señalar, que en consideración de lo precitado en punto de las Atribuciones del Alcalde, contenidas en el Artículo 315 Superior, también, en virtud de lo establecido en el artículo 23 "De los principios en las actuaciones contractuales de las

629



Nit. 891.190.246-1

entidades estatales” de la ley 80 de 1993, así como en lo reglamentado en el Decreto **Nacional 734 de 2012**, se logra establecer que el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, en el cumplimiento de sus funciones y su gestión como Alcalde del Municipio de El Paujil, y respecto de los señalamientos realizados por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá:

PRIMERO: Respaldó su gestión en los conocimientos del **INGENIERO CIVIL FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, persona idónea que reunía los requisitos legales exigidos en el Decreto Nacional 734 de 2012, por cuanto **para la fecha en la cual fuera realizado el avalúo, esto es, el 10 de mayo de 2012:**

a) Se encontraba debidamente registrado en el Registro Nacional de Avaluadores con **MATRÍCULA R.N.A/C.C-25-1885 VIGENTE para la fecha y habilitado para “avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional”, como así consta en CERTIFICACIÓN expedida por la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS “CORPOLONJAS DE COLOMBIA”, de la cual era miembro activo desde el año 2004, y en la cual, además, consta que se comprobó su idoneidad como PERITO AVALUADOR PROFESIONAL”**

b) A través de éste **PERITO AVALUADOR PROFESIONAL**, se obtuvo el respectivo informe de **AVALÚO COMERCIAL** del bien inmueble con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-88285**, el cual consta de 6 hectáreas, ubicado en la vereda el Borugo del municipio de El Paujil y del cual, posterior a la celebración de la Compra-venta, realizada al señor Heriberto Arcila Puentes, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.681 291, contando con la debida autorización por parte de la Secretaría de Planeación, así como la de Fraccionamiento emitida por el INCODER, se desprendería la **MATRÍCULA INMOBILIARIA N°. 420-109661 como así obra en la Oficina de Instrumentos Públicos.**

c) A diferencia del Avalúo realizado por el IGAC, cuya investigación de mercado se hizo de manera indirecta, a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de **INTERNET”, El avalúo realizado por el PERITO AVALUADOR PROFESIONAL requerido por la Administración Municipal, cuenta con una investigación económica comparativa de mercados realizada de manera directa en el lugar en donde se encuentra ubicado el predio adquirido, en la cual, “Para efectos de establecer el valor del terreno se tuvieron en cuenta las características propias del mismo, las vías de acceso, estado de aprovechamiento del predio, la consulta de conocedores del sector, con conocedores del mercado inmobiliario. Se trabajó con 3**

630



Nit. 891.190.246-1

variables estadísticas una de medida de tendencia central y dos de dispersión que son: Media aritmética, desviación Standard y coeficiente de variación, el cual se acepta en la toma de decisiones por ser inferior a 7.5%".

d) El Avalúo elaborado y suscrito por el PERITO AVALUADOR PROFESIONAL, requerido por la Administración Municipal, fue realizado con apego al criterio definido en el Artículo 2o del Decreto Reglamentario 1420 de 1998.

SEGUNDO: No obró a su voluntad y desplegó su gestión con la aprobación, acompañamiento y supervisión del Concejo Municipal y de la Secretaría de Planeación, por cuanto:

a) Contó con autorización respectiva, emanada del **CONCEJO MUNICIPAL, quien a través de Acuerdo** aprobado en dos debates, con consecutivo N.º 11 de fecha 22 de junio de 2012, "Por medio del cual se autorizó al Alcalde del municipio de El Paujil, Departamento del Caquetá, para adquirir un inmueble destinado al desarrollo de un proyecto de vivienda"

b) Contó con la Supervisión y la aprobación de funcionarios de la Administración Municipal, como, por ejemplo, la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO, ejercida por el señor EDINSON CUESTA MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.322.202 de Puerto Wilches, quien acompañó y supervisó el proceso de adquisición del mismo.**

c) Como así consta en la cláusula DÉCIMA CUARTA del contrato de promesa de compra venta No. 001 de fecha diciembre 26 de 2013, estipuló la obligación al vendedor para que permitiera la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a estas la información y documentación que solicitaran en relación con el contrato que se suscribía y su ejecución.

d) La Compra Venta, cuenta, además, con autorización para el Fraccionamiento del predio por parte del INCODER, así como de la Oficina de Planeación a través de Resolución 019 del 17 de diciembre de 2013.

Argumentos repetitivos a lo largo del contenido del escrito de defensa que ya fueron desatados por este Despacho, y sobre los cuales no volverá a manifestarse, toda vez que ya fueron desatados.

631



Nit. 891.190.246-1

TERCERO: Resulta oportuno observar también, los fines esenciales y relativos al ESTADO SOCIAL DE DERECHO que persiguió la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, por intermedio de mi Defendido, en aras de la concreción de lo estructurado en el plan de desarrollo, en materia de proyectos de vivienda de interés prioritario.

Fines del Estado que estaban sujetos al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente al momento de la compra. No puede invocarse el cumplimiento de los fines del Estado, en este caso la construcción de vivienda de interés prioritario con apego a la violación de la normatividad vigente.

En punto de lo referido, hay razones para desvirtuar los señalamientos realizados por el ENTE ACUSADOR, pues es claro que mi Prohijado, observó en buena forma una gestión eficiente, responsable y transparente, no sólo actuó con apego a la legalidad como fue referido, también, basó sus actuaciones en la buena fe. Mi DEFENDIDO, obró de conformidad a los postulados de buena fé, por cuanto como así lo consideró la Sala de Consulta del Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil en Concepto C.E. 811 de 1996: "El principio general del derecho engendra una apreciación jurídica de contenido más amplio tendiente a que toda persona en razón de su actividad ejecute actos jurídicos lo haga motivado por una actitud honesta, leal desprovista de cualquier intención dolosa o culposa; lo que jurídicamente implica la honradez de toda relación jurídica manifestada en su doble dirección: el ejercicio del derecho de buena fe o el cumplimiento de la prestación derivada de la obligación que la causa, lo que debe también ejecutarse de buena fe" Nótese, que respecto de las actuaciones adelantadas por mi prohijado, no obra en el expediente prueba que demuestre un obrar contrario a dichos postulados o elementos contrarios a esa actitud honesta, leal al Municipio y desprovista de cualquier asomo de intenciones dolosas o culposas en el ejercicio de sus funciones.

Respecto al principio de buena fe manifestado por la defensa, es pertinente traer a colación lo establecido en el artículo 83 de las Constitución Política de Colombia que establece: "**ARTICULO 83.** Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas." Entiéndase que la buena fe se predica de los particulares frente a las actuaciones que los particulares deben hacer ante el Estado, en la actuación administrativa desplegada por el investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT en su condición e Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; en la realización en la compra del bien inmueble actuaba en calidad de Estado y no de particular. Además se ha repetido hasta la saciedad por parte de este Despacho que no obró de manera transparente, toda vez que la

632



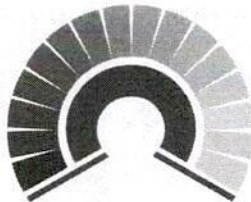
Nit. 891.190.246-1

compra del bien la realizó sin el debido cuidado al no tener un valúo comercial vigente, hecho que denota la violación de la norma jurídica vigente para la fecha de la compra del bien inmueble, pues actuó de manera poco diligente, ineficiente irresponsable, de manera antieconómica para el Municipio, y sin ningún apego a la legalidad, por tanto al adquirir el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, sin avalúo comercial vigente como lo determinaba la norma vigente para la época de los hechos, actuó de manera arbitraria y con su arbitrariedad condujo a la causación del detrimento patrimonial en contra de la entidad que dirigía, y por tanto este Despacho lo declarará responsable fiscal.

*Se destaca en sus actuaciones como Alcalde del Municipio de El Paujil, que buscó, además, garantizar, el principio de economía. Tal afirmación, a contrario sensu a lo argumentado por la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, se evidencia a través del informe de Avalúo que presentara el **INGENIERO CIVIL FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, en quien, por contar con la idoneidad y la acreditación requerida, depositó mi prohijado una confianza legítima y quien, con su informe, aportó a ese ánimo e interés de la administración municipal en evitar una gestión antieconómica, la cual es manifiesta y palpable, precisamente, en virtud de la **investigación económica comparativa de mercados realizada de manera directa en el lugar en donde se encuentra ubicado el predio adquirido, para establecer el valor real**, esto es, el avalúo exacto del predio, que habría de comprar la Administración y que, conforme a los postulados y principios referidos, mi Prohijado, en su calidad de Ordenador del Gasto, así lo hizo.*

Apreciación que no comparte este Despacho, en el sentido que actuó con base en el principio de economía, toda vez que la compra se del inmueble se realizó siete (7) meses y dieciséis (16) días después de vencido el plazo determinado por el decreto No. 734 de fecha 13 de abril de 2012, en su artículo 3.7.3.1, como vigencia del avalúo comercia; el realizado por el perito avaluador ingeniero Fernando Gustavo Martínez Bravo venció el día 10 de mayo de 2013, pues en el tiempo mencionado pudieron haber cambiado las circunstancias de modo, tiempo y lugar que condujeron al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC., a determinar un avalúo comercial muy por debajo del realizado por el perito contratado por el investigado. Este último al momento de la comprar debió percatarse que el avalúo comercial estaba sin vigencia y por tanto debió solicitar un nuevo avalúo comercial, acción que no realizó y en consecuencia se presenta el reproche sancionatorio por parte de este operador administrativo, estimado en la cuantía correspondiente a la diferencia entre la compra ordenada por el investigado y lo determinado por el IGAC., en su avalúo comercial.

633



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

*Es claro, a partir de lo señalado, que el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, no buscó, **NI CAUSÓ**, ningún detrimento al patrimonio del **ESTADO**, **NI AFECTÓ al MUNICIPIO DE EL PAUJIL**. No infringió la Constitución ni las leyes, ni tampoco omitió o se extralimitó en el ejercicio de sus funciones.*

Es posible que el investigado no hubiese buscado un detrimento patrimonial para el Municipio de dirigía, sin embargo, con su actuar indiligente y negligente en su condición de Alcalde infringió la norma vigente para la época de los hechos en lo relacionado con la vigencia del avalúo comercial presentándose así el detrimento patrimonial para el Municipio de El Paujil, Caquetá.

Que, en virtud de las actuaciones desplegadas por éste, el sustento legal y probatorio al que se ha hecho referencia en el presente escrito, como así se evidencia en las imágenes (CAPTURAS) incorporadas en el mismo y que advierten de la existencia de medios de prueba suficientes para corroborar la idoneidad del Avaluador, la transparencia de lo actuado, en cuya constatación, emerge notoria un gestión económica favorable a los intereses del Estado y del Municipio, que no constituye daño y de la cual, por el apego que se evidencia en su actuación y en la forma como fue llevado a cabo cada procedimiento con estricta sujeción al contenido normativo de carácter reglamentario preexistente al momento de la ocurrencia de los hechos señalados por el ente acusador, permiten colegir que no se puede imputar la responsabilidad fiscal, como así lo expuso en sus consideraciones la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá. Huelga decir, que corresponde al DESPACHO que hizo la IMPUTACIÓN, "observar en sus decisiones y motivaciones, pleno apego al principio de legalidad, cuyo orden es Constitucional y constituye garantía verdadera en la actuación procesal y en el ejercicio de la acción fiscal, de cara a las prerrogativas que le asisten a mi Prohijado".

*Nótese que, de conformidad con el desarrollo normativo expuesto, se corrobora en primera instancia, que no hay lugar a la IMPUTACIÓN de mi DEFENDIDO. Que el mismo, contrario a lo referido por el DESPACHO, **cumplió con los deberes señalados por la Constitución y la ley Respecto a seguir sus actuaciones a la normativa vigente. El punto es que mi PROHIJADO así lo hizo.** En segundo lugar, se corrobora que no se actuó por parte del Titular de la Acción Fiscal, de conformidad con los postulados de Legalidad, necesarios en sus actuaciones. **Es por ello y no por otra razón, que Corresponde al DESPACHO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL**, en ejercicio de la titularidad de la Responsabilidad Fiscal, por cuanto se han aportado en el presente*

634



Nit. 891.190.246-1

escrito, los argumentos de Defensa con rigor jurídico suficiente y que desvirtúan las imputaciones formuladas por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá en su Auto de Imputación N°. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, obrar consecuentemente como en efecto se solicitará, para que se remedien los actos contrarios a la dignidad de la Justicia, la lealtad, probidad y buena fé, que no fueron observados por parte del Despacho que realizó la IMPUTACIÓN.

En tal sentido, Fundado en la argumentación esgrimida, cuyo sustento jurídico, alcance y efecto, no se puede desconocer, solicitará el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, se prevea por parte del funcionario Competente, en los términos de lo así estipulado en el **Artículo 25. Protección Judicial de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS**, los artículos 29, 122, 230 y 315, de orden Constitucional, los artículos 26, 32 de la ley 610 de 2000, también, del artículo 23 ibidem, por cuanto se requiere de Prueba para responsabilizar que conduzca a la certeza del daño patrimonial y de la responsabilidad del investigado, habida cuenta que, demostrándose un obrar recto por parte de mi Defendido, con apego a la Constitución y a la ley, que desvirtúa los elementos Constitutivos de Responsabilidad Fiscal como así se establece en el **Artículo 5° de la Ley 610 de 2000, invocando la necesidad urgente para que en su obrar, el ente acusador observe los principios orientadores de la acción Fiscal, preceptuados en el Artículo 2°, especialmente, los referentes al principio de legalidad implícito en el Debido Proceso**, derecho de carácter fundamental que exige a la Contraloría Departamental del Caquetá, a instancias del Proceso de Responsabilidad Fiscal que se adelanta contra mi Prohijado, "le juzgue de conformidad a leyes preexistentes al acto que se le imputa" y como ha sido ampliamente demostrado en el presente escrito, que la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá se apartó de dichos postulados y que con sustento en norma derogada motivó las decisiones que le llevaron a IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL contra el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, "proceda a corregir de manera inmediata y aplique, en virtud de la Remisión Normativa contenida en el Artículo 66 de la ley 610 de 2000, lo contenido en el Numeral 3 del Artículo 42 del Código General del Proceso, para que se remedien los actos contrarios a la dignidad de la Justicia, la lealtad, probidad y buena fé, que no fueron observados por parte del Ente Acusador y que invocan la real necesidad de subsanar la falta de legalidad en las motivaciones y cargos enrostrados en contra de mi Representado.

635



Nit. 891.190.246-1

Subsanación y remedio, que encuentra su materialización en lo establecido en los artículos 47 y 54 de la Ley 610 de 2000 y por el cual, el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, de manera respetuosa, se permite allegar las siguientes:

Frente a estos argumentos, este Despacho se permite precisar que no le asiste razón a la defensa, toda vez que con las pruebas testimoniales y escritas presentadas por al defensa se evidencia que existe plena contundencia para responsabilizar fiscalmente al investigado, toda vez que no fue transparente su actuar al compra un bien inmueble con el avalúo comercial sin vigencia, desplegó una gestión antieconómica al pagar por encima del avalúo comercial vigente en la fecha de la compra del bien inmueble, avalúo realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC., no se sujetó a la normatividad vigente al momento de comprar el bien, y por tanto se realiza variación de la postura establecida en el Auto No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, con base en el devenir procesal que evidencia que se infringió la normatividad establecida en el artículo 3.7.3.1, del Decreto No. 734 de fecha 13 de abril de 2013, que conlleva a este Despacho inequívocamente a hallar responsable fiscal al investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, en su condición de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá.

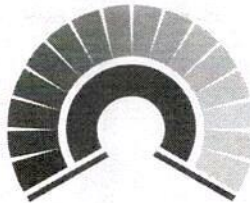
V. SOLICITUDES

PRIMERA: CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL por cuanto, en virtud de lo que se advierte a partir de lo contenido en las TREINTA (30) Capturas de imagen incorporadas en el presente documento y de los argumentos con rigor jurídico suficiente que han sido aportados y que las acompañan, se ha probado que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial y en tal sentido, ***SE PROFIERA el AUTO DE ARCHIVO del proceso de la Referencia, con sujeción a lo consagrado en los términos del Artículo 47 de la ley 610 de 2000.***

Petición a al que no accederá este Despacho, por las razones contenidas en el desate de los argumentos esgrimidos por al defensa y en los cuales se evidencia que el hecho de detrimento patrimonial existió y por tanto se procederá a fallar con responsabilidad en contra del investigado.

SEGUNDA: Como petición subsidiaria, en caso de despachar desfavorable la petición anterior, le ruego en consecuencia, ***Se PROFIERA FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL, en favor del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.691.533 de Florencia, por obrar elementos de prueba y argumentación jurídica suficiente, que demuestran que no existe prueba que conduzca a***

636



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal y, principalmente, la inobservancia del principio de Legalidad por cuanto no se juzgó a mi DEFENDIDO conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y a partir de las cuales se desvirtúan por sí solas, las imputaciones formuladas con sustento en contenido normativo DEROGADO, por parte de la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en contra de mi DEFENDIDO.

Petición a la que tampoco accederá este Despacho, toda vez que existen pruebas que se presentaron y afloraron en el devenir procesal que conducen a determinar que la prueba reina para determinar fallo fiscal está contenida en el artículo 3.7.3.1, del Decreto 734 de fecha 13 de abril de 2013, vigente para la época de los hechos.

TERCERA: *En virtud del Derecho de Defensa y Contradicción contenido en el Artículo 29 Constitucional, también en consideración del Artículo 32 de la ley 610 de 2000, SEAN VALORADOS, en su conjunto, para su decisión, conforme a lo preceptuado en el artículo 26 ibidem, todas las capturas de imagen incorporadas en el presente escrito y los argumentos y consideraciones aportados en el mismo, con los cuales se busca la defensa real de las garantías, prerrogativas y derechos de orden constitucional que le son inherentes al señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, mi defendido y que han sido vulnerados por el DESPACHO que profirió la IMPUTACIÓN, a instancias del Proceso de Responsabilidad Fiscal N.º1148 que se adelanta en su contra.*

Solicitud que acepta este Despacho y en consecuencia se ha dado desate a cada uno de los argumentos de defensa presentado por la defensa del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, en su condición de defensor de oficio debidamente designado por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la Amazonía.

VI. PRUEBAS:

Documentales:

Los documentos mencionados, cuyas capturas de imagen, desde la Captura N.º1 hasta la N.º. 30, en total treinta (30) capturas, fueron incorporadas en el presente escrito De Argumentos de Defensa cuya valoración se solicita, más no su práctica, pues fueron tomadas del expediente que reposa en el Despacho de la Contraloría Departamental y se encuentran por tanto dichos documentos, contenidos en el EXPEDIENTE del PROCESO de la Referencia PRF-1148, razón por la cual, los mismos, no se adjuntan en el presente apartado.

Testimoniales:

Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 10.541.581 de Popayán. Su testimonio es conducente, pertinente y útil, toda vez que esta persona fue quien elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y se hace indispensable que exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué presuntamente estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC y además, se le interrogará por las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido. Todas las demás preguntas e incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.

De dicha persona a partir del Informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales entregado a la Administración y del cual se encuentra copia contenida en el expediente del Proceso de la Referencia, se advierte que éste relaciona Dirección de Oficina en la Carrera 30 bis N.º. 2E-38 de Florencia – Caquetá y número de Celular con Abonado N.º. 312 312 73 02.

Pruebas que han sido tenidas en cuenta por este Despacho, en especial la rendición del testimonio solicitado por al defensa, y el cual rendido por el perito evaluador del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 420- 109661, el ingeniero civil Fernando Gustavo Martínez Bravo.

10. MOTIVACIÓN JURÍDICO FISCAL

De acuerdo con las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el proceso, este Despacho procede a decidir sobre la responsabilidad fiscal del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, identificado con cedula de ciudadanía 17.691.533, expedida en Florencia, Caquetá; quien se desempeñó como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; de conformidad con la certificación laboral obrante a folio 106, en la cual se manifiesta: “Que el señor RODRIGO ANDRÉS CASTO BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.691.533 expedida en Florencia Caquetá, fue elegido por voto popular como Alcalde Municipal de El Paujil Caquetá, para el período 2012-2015...”

La Constitución Política de 1991, reconoce expresamente la función de control fiscal, como una actividad independiente y autónoma, diferenciada de la que corresponde a las clásicas funciones estatales, lo cual obedece no sólo a un criterio de división y especialización de las



Nit. 891.190.246-1

tareas públicas, sino a la necesidad político-jurídica de controlar, vigilar y asegurar la correcta utilización, inversión y disposición de los fondos y bienes públicos que pertenecen a la Nación.

La Responsabilidad Fiscal, debe estar soportada en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, a fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de los investigados, como derechos fundamentales consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

Los principios de la prueba se refieren a los conceptos básicos que iluminan al operador en este caso, administrativo al momento de admitir, decretar, practicar y valorar los diversos tipos de pruebas que soportan el fallo. Estos principios son: necesidad, unidad, comunidad, intermediación, publicidad, contradicción, evaluación, oportunidad, pertinencia, conducencia, igualdad, eficacia, equidad y el principio inquisitivo, entre otros.

Apreciar la prueba *"es la actividad intelectual que lleva a cabo el juez para medir la fuerza probatoria de un medio de prueba"*. Por lo tanto, fuerza o valor probatorio es la aptitud que tiene un hecho (solo o en concurrencia con otros) para demostrar judicialmente otro hecho o para que el mismo hecho quede demostrado, para adoptar su decisión con fundamento en la prueba, es indispensable que el juez se considere convencido por ella, o, dicho de otra manera, que se encuentre en estado de certeza sobre los hechos que declara.

Una indebida valoración del acervo probatorio puede generar una nulidad, que será la falta de motivación como irregularidad sustancial por violación de las formas propias de cada juicio, consistente en este caso, en no fijar el alcance de las pruebas en las cuales se fundamenta el juicio de responsabilidad (tipicidad - antijuridicidad y culpabilidad).

El Proceso de Responsabilidad Fiscal, tiene por imperativo legal y procedimental, estar fundado en pruebas que conduzcan a establecer la posible existencia de un detrimento al erario y los presuntos autores del mismo, es decir, con pruebas necesarias, conducentes, pertinentes y útiles, al menos sumariamente, en aras de que se emita un juicio razonable, en el marco de la sana crítica y bajo la necesidad del análisis integral de las mismas.

Para declarar responsable a un implicado en un proceso de Responsabilidad Fiscal, las pruebas existentes en el expediente deben, primero, haber sido allegadas al plenario de manera legal, es decir, conforme al ordenamiento jurídico, segundo, deben conducir sin lugar a equívocos a la certeza del daño al erario y el grado de responsabilidad de los implicados, tercero, que dichos soportes probatorios deben ser analizados y apreciados por el investigador en conjunto, en otros términos de manera integral y, para ello debe el órgano fiscalizador aplicar las reglas de la sana crítica y la persuasión racional.



Nit. 891.190.246-1

En el trámite procesal es necesario probar, es decir, aportar al proceso los motivos o razones, por los medios y procedimientos aceptados por la ley, para llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos y la responsabilidad de las personas.

Esta garantía constitucional implica: el derecho a buscar la prueba, el derecho a postular la prueba, el derecho a que se le decrete la prueba, el derecho a que se le practique la prueba, el derecho a que se le niegue la prueba, el derecho a que se le valore la prueba. La cual se puede definir como las razones, argumentos o elementos de convicción que se sacan del medio probatorio, para llevar al convencimiento del Juez o Instructor, sobre el acaecimiento de los hechos que se debaten en el proceso. La carga probatoria es una facultad discrecional de ofrecer y solicitar pruebas y de intervenir en su práctica. Para que los hechos, cosas y actos que se plantean en el proceso estén debidamente probados, se recurre a la práctica de pruebas. En materia de responsabilidad fiscal le corresponde al Estado, en cabeza del órgano de control fiscal correspondiente, probar los hechos investigados.

La Prueba ha sido definida como: *"Todo lo que sirve para darnos la certeza acerca de la verdad de una proposición. La Certeza está en nosotros, la verdad en los hechos. Aquella nace cuando uno cree que conoce ésta; más por la facilidad humana, puede haber certeza donde haya verdad y viceversa"*. Es necesario llevar a cabo las acciones tendientes a obtener la finalidad procesal de la prueba, siendo ésta *"la de producir la certeza sobre la existencia o inexistencia del elemento típico de la responsabilidad (gestión fiscal) y los estructurales de la misma"*, a través de los diferentes medios de prueba.

Los conceptos de conducencia y pertinencia son conceptos diversos; mientras el primero alude a la idoneidad de la prueba para demostrar lo que se pretende probar, (...) el concepto de pertinencia cubre la relación lógica entre el medio de prueba y lo que se pretende probar, o la relación que el hecho por probar puede tener con el litigio o la materia del proceso.

Al momento de llevar a cabo un análisis jurídico-fiscal en los hechos materia de investigación, el mismo se debe realizar de manera integral, apreciando cada una de las pruebas que reposan en el plenario, tanto las documentales, testimoniales, periciales o cualquier otro medio probatorio que se haya practicado dentro de los parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Lo anterior con base en lo normado en el artículo 26 de la Ley 610 de 2000 que determina: **"APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional"**.

La Contraloría Departamental del Caquetá llevó a cabo el trámite de la Denuncia interpuesta por ciudadano anónimo en la fecha 21 de agosto de 2014, con radicado interno No. 3416, de cuyo trámite se concluyó por parte del área de Participación Ciudadana de la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, que se presentaba un presunto detrimento patrimonial en contra del



Nit. 891.190.246-1

Municipio de El Paujil, Caquetá, en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, como consecuencia de la compra de un lote de terreno de seis (6) hectáreas compradas por el Municipio de El Paujil al señor Heriberto Arcial Puentes, producto del avalúo comercial realizado por el perito evaluador ingeniero civil Fernando Gustavo Martínez Bravo el día 10 de mayo de 2012.

Igualmente estableció en el trámite de la Denuncia No. D-003-16 realizada por el área de Participación Ciudadana de la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, que con base en el artículo 3 del Decreto 1420 de 1998 la compra del bien inmueble debía realizarse con forme a su precepto:

"Artículo 3°.- La determinación del valor comercial de los inmuebles la harán, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar donde se ubiquen los bienes objetos de valoración."

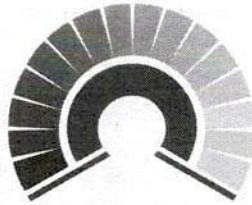
De igual manera precisó: *"Lo anterior es determinante e indica que el Municipio de El Paujil debió acudir en primera instancia al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que mediante avalúo, estableciera el valor comercial del predio a adquirir, sin embargo, el representante legal de la época, sin agotar este procedimiento, acoge el valor comercial del posible vendedor, conforme avalúo comercial realizado por un perito privado inscrito en la lonja y procede a la suscripción del contrato de compraventa ante mencionado."*

Efectivamente con base en estas premisas, este Despacho procedió a dar apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148, mediante Auto No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2019, y posteriormente en la fecha 26 de febrero de 2024, procedió a realizar imputación a través del Auto de Imputación Mixta No. 001 de la misma fecha, en el cual se decidió archivar para el señor Heriberto Arcila Puentes.

En escrito de descargos y argumentos de defensa presentado por el estudiante de Derecho Jhon Edwin Ortiz Cuéllar debidamente designado por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la Amazonía y en el cual se puede referenciar como los más importantes: la idoneidad del perito, la buena fe con que actuó su defendido, no se presenta detrimento patrimonial en la compra, el que actuó con base en el principio de economía, cumplió con su deber como Alcalde **y sobre todo la manifestación más sobresaliente es que la imputación se realizó con una norma jurídica derogada**, en el mismo escrito solicita la práctica de pruebas para que en el recibimiento de testimonio del perito evaluador del bien inmueble que dio origen a la compra por parte del perito evaluador ingeniero civil Fernando Gustavo Martínez Bravo, prueba decretada y llevada a cabo el día 29 de abril de 2024, siendo las 8:22 am.

Producto del devenir procesal tanto en la presentación de los descargos y argumentos de defensa como en la rendición del testimonio, este Despacho observa y evidencia que la norma con la cual se actuó dentro del presente proceso realmente estaba derogada, pero no por ello

641



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

tal como lo manifestó el defensor de oficio el proceso debe archivar o fallarse sin responsabilidad fiscal, por cuanto la norma invocada por la defensa como el testimonio rendido por el perito evaluador dan cuenta que efectivamente el detrimento patrimonial en contra del Municipio de El Paujil, Caquetá; se mantiene, habida cuenta que la compra del bien inmueble objeto de investigación se realiza con el quebrantamiento de la norma invocada por el defensor de oficio del investigado específicamente el Decreto 734 de fecha 13 de abril de 2014 artículo 3.7.3.1, el cual preceptúa:

“Artículo 3.7.3.1. Avalúo comercial. Para efectos de determinar el precio mínimo de venta de los bienes inmuebles de las entidades públicas, la entidad deberá obtener el avalúo comercial de los mismos, el cual podrá ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, bancas de inversión o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores.

El avalúo deberá tener una vigencia máxima de un año contado a partir de su expedición y encontrarse vigente al momento de determinar el precio mínimo de venta. (Subrayado y negrilla fuera de texto). Hecho que confirmó el perito evaluador en el testimonio rendido.

Teniendo en cuenta que el avalúo presentado por el perito evaluador del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 420-109661, se realizó el día 10 de mayo de 2012, su vigencia se establecía hasta el día 10 de mayo de 2013. Al presentarse la compra el día 26 de diciembre de 2013, es evidente para este Despacho, que la compra se realizó sin el avalúo comercial vigente solicitado por el señor Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; lo que constituye flagrante violación de la normatividad mencionada. Así mismo se precisa por parte de este Despacho que al estar el avalúo comercial indexado realizado a diciembre de 2013, por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC., vigente para la fecha de la compra, se constituye en el referente que conduce a confirmar que ciertamente se presentó detrimento patrimonial al municipio de El Paujil, Caquetá; como bien se dijo ya, en la diferencia existente entre el valor de la compra y el valor comercial determinado por el IGAC., esto la cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINEINTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

Una vez valorado el material probatorio obrantes en el expediente y los argumentos de defensa presentados por la defensa del investigado; este Despacho advierte la existencia de detrimento patrimonial endilgado en la Conclusión de la Denuncia D-003-16. Toda vez que se evidencia el incumplimiento de la normatividad vigente para la compra de los bienes inmuebles por parte del Estado, al momento de realizar la compra el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, hecho generador que da origen al detrimento patrimonial endilgado al investigado por parte de este Despacho, toda vez que al momento de la compra del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 420-109661, se realizó sin avalúo comercial vigente, lo que equivale a decir que no se tenía avalúo comercial por parte del municipio de El Paujil para realizar la compra, y por tanto no podía realizarla.

642



Nit. 891.190.246-1

En consecuencia, este Despacho procederá a endilgar responsabilidad fiscal al implicado **JOSÉ RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, en calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá para la época de los hechos, por al compra del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 420-109661, incumpléndose así la normatividad vigente para la fecha de la compra del inmueble, toda vez que no acreditó avalúo comercial vigente para dicha transacción comercial, incumpliendo así las funciones administrativas encomendadas en su respectivo cargo para la época de los hechos, por tanto se configura el hecho generador del detrimento patrimonial en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

Finalmente se precisa detrimento al patrimonio en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, tal como se dispuso en el Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 febrero de 2024, con base en la violación de la normatividad vigente al momento de la compra del bien inmueble.

Ahora bien, de acuerdo con los medios de prueba documentales y testimoniales allegados a este proceso se puede determinar la existencia de responsabilidad de carácter fiscal por el detrimento originado al Municipio de El Paujil, Caquetá; por concepto de la compra del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 420-109661, en cabeza del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, en calidad de Alcalde del Municipio del Paujil, Caquetá; tal como se desprende de la certificación laboral (folio 106), en la cual se manifiesta que para la época de los hechos el investigado se desempeñaba como Alcalde del municipio de El Paujil, Caquetá.

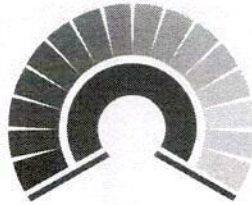
Ahora bien, dentro de las funciones que debía cumplir el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, en su condición de Alcalde, están contempladas en el artículo 315 de la Constitución política de Colombia, entre la cual se encuentra:

"9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto."

Hecho y acción que lo relacionan de manera directa con la materia de investigación y con su conducta contribuye al daño patrimonial al municipio de El Paujil, Caquetá; por la omisión de sus deberes como servidor público y por violación de la normatividad vigente para la época de los hechos.

Teniendo en cuenta los hechos configurados en el presente proceso, se puede determinar que se materializa una gestión antieconómica, ineficiente, ineficaz e inoportuna en los términos prescritos en la Ley 610 de 2000, toda vez que el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, según certificación laboral (folio 106), se desempeñó en el cargo de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; están relacionado de manera directa con los hechos materia de investigación y con su conducta contribuyó al daño ocasionado al patrimonio del Municipio de El

643



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

Paujil, Caquetá, toda vez que ostentó la calidad de gestor fiscal descrita en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000, que prescribe:

"(...) *Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales (...)*" (Negrillas y subrayado por fuera del texto original).

Así las cosas, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, incumplió con los deberes señalados por la Constitución y la Ley respecto a ceñir sus actuaciones a la normatividad vigente, toda vez que, con su actuar infringió entre otros, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 610 de 2000, el Decreto 734 de 2012, y especialmente las funciones asignadas mediante el artículo 315, numeral 9 de la Constitución Política de Colombia.

Con lo anterior, se evidencia que el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, quien fungía como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; contribuyó con la causación del daño, ya que debió cumplir fielmente lo determinado en el ordenamiento jurídico vigente para la época de los hechos, con lo cual se hubiese preservado los recursos públicos a lo cual se comprometió cuando se posesionó en su respectivo cargo jurando cumplir fielmente la Constitución, la Ley, las ordenanzas, y los acuerdos, que de haberse cumplido se habría alcanzado los fines del Estado propuestos por parte del Municipio, toda vez que el excedente que pudo haberse ahorrado, bien podría haber sido utilizado para satisfacer otras necesidades de la población paujileña.

En la misma medida se debe dejar presente que el investigado con su actuar desconoció abiertamente el fin de la función administrativa que estaban desarrollando, por cuanto no encaminaron su accionar a la consecución de los fines esenciales del Estado aplicando los principios especialmente de moralidad, eficacia y economía, violentando los principios constitucionales, los cuales están contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991, al señalar que:

"Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública,

644



Nit. 891.190.246-1

en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley". (Subrayado fuera de texto).

De igual manera, se tiene que el objetivo principal o fin esencial de la Contraloría es determinar la existencia de la obligación reparadora por la conducta antijurídica de un agente público o de un particular, en el marco del circuito de la gestión fiscal, característica que se observa en el campo de acción laboral del implicado, por cuanto el universo fiscal dentro del cual transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales.

Por lo anterior, es manifiesta la omisión que se configura sobre las funciones que por competencia y determinación legal debió cumplir el Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; quien actuó como gestor fiscal del Municipio mencionado, lo cual se genera en una conducta de falta de seguimiento, control y cumplimiento a la norma vigente al momento de actuar, que deben efectuar los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones para lograr los fines del Estado.

Así las cosas, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal determina que la acción desplegada por el implicado alude a la realización de actividades administrativas y funcionales encaminadas a la omisión de ejercer control, seguimiento y cumplimiento sobre el objeto contractual de la promesa de Compraventa No. 001 de fecha 26 de diciembre de 2013, tal como sucedió en la compra del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 420-109661, por lo anterior se causó detrimento patrimonial al municipio de El Paujil, Caquetá, en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

Finalmente, para lograr establecer la responsabilidad del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, durante la vigencia 2013, en desarrollo de la ejecución del Contrato Compraventa No. 001 de fecha 26 de diciembre de 2023, cuyo objeto consistía en: "COMPRVENTA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE VIVIENDA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE EL PAUJIL CAQUETA", se procederá a llevar a cabo la acreditación de los elementos constitutivos de la Responsabilidad Fiscal conforme lo señala la Ley 610 de 2000.

11.1. DE LA ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

El artículo 5 de la Ley 610 de 2000, señala los elementos que constituyen Responsabilidad Fiscal, entendidos estos como:

1. *Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal,*

645

2. Un daño patrimonial al Estado.
3. Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

11.1.1 Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.

Artículo 3 Ley 610 de 2000 (...) *Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales (...).*

Respecto a este tema, la Corte Constitucional en Sentencia C - 549 de 1993 señaló: "... el concepto de gestión fiscal alude a la administración o manejo de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas etapas de recaudo o percepción, conservación, adquisición, enajenación, gasto, inversión y disposición. Consiguientemente, la vigilancia de la gestión fiscal se endereza a establecer si las diferentes operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se traduce la gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades competentes, los principios de contabilidad universalmente aceptados o señalados por el Contador General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos de la administración (Ley 42 de 1993, artículos 8 a 13)".

Bajo tales connotaciones resulta propio inferir que la esfera de la gestión fiscal constituye el elemento vinculante y determinante de las responsabilidades inherentes al manejo de fondos y bienes del Estado por parte de los servidores públicos y de los particulares. Siendo por tanto indiferente la condición pública o privada del respectivo responsable, cuando de establecer responsabilidades fiscales se trata.

Manejar los bienes públicos dentro de un marco normativo, consiste en la ejecución detallada y sistemática de los fondos de la entidad estatal, para la prestación de servicios públicos, la satisfacción de necesidades colectivas. Pero, el término manejar o administrar, no se refiere solamente al gasto público, de la norma se desprenden diferentes actividades como de adquisición, planeación, conservación, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, inversión, disposición y recaudación.

Así, los gestores públicos deben manejar los recursos de tal forma que su inversión produzca la maximización de resultados, obtener en igualdad de condiciones los bienes y servicios al menor costo posible logrando los objetivos y metas trazados teniendo en cuenta que la ordenación del gasto está sujeta a las normas presupuestales vigentes.



Nit. 891.190.246-1

Tal y como se desprende de la lectura del artículo 3 de la Ley 610 de 2000 al definirse la gestión fiscal se establecieron algunos elementos que la distinguen de aquellas actividades no relacionadas directamente con el ejercicio de la gestión fiscal; así tenemos:

1. El sujeto activo calificado, que son los servidores públicos o personas de derecho privado, que tengan a su disposición, manejo y administración bienes del Estado, entendidos estos cualquiera sea su naturaleza (muebles, inmuebles, fungibles, etc.)
2. Estos sujetos pueden desarrollar actividades jurídicas, económicas y tecnológicas.
3. Las anteriores actividades deben ser tendientes a la adecuada adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas, éstas dos últimas relacionadas directamente con el proceso de recaudo y disposición de los impuestos tanto municipales como nacionales.

Luego, si un servidor público o una persona de derecho privado, no ostenta las anteriores características no podrá ser acreedor del título de Gestor Fiscal.

En este sentido, es necesario acreditar la calidad de gestor fiscal del implicado, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, en su calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá, según certificación laboral obrante a folio 106, y suscrita el día 01 de marzo de 2016, por el Secretario de Gobierno y Jefe de Personal que establece: *"Que el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.691.533 expedida en Florencia Caquetá, fue elegido por voto popular como Alcalde Municipal de El Paujil Caquetá, para el período 2012-2015, según credencial Expedida por la Comisión Escrutadora del 30 de octubre de 2011 y acta de posesión número 008 de 31 de diciembre de 2011 de la notaría Única del Circulo de Doncello, cargo quien desempeñó desde 01 de Enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015 ..."*

En consecuencia, puede entenderse entonces que era directa la responsabilidad del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, en calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; toda vez que la naturaleza de su cargo y sus obligaciones, tiene relación directa con la disposición, manejo e inversión de los recursos asignados e invertidos por la Administración Municipal de El Paujil, Caquetá; y en su calidad de sujeto activo, en ejercicio de gestión fiscal debía procurar que su actuar estuviera direccionado a la protección, guarda, cuidado y adecuada administración de los recursos públicos que se invierten en el Municipio, con lo cual se alcanzaría los fines del Estado.

Ahora bien, establecido como está el primer elemento de la responsabilidad fiscal, procede el Despacho a enmarcar la conducta desplegada por el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, en el rango de dolo o culpa grave. Para abundar en definiciones es importante recordar la que trae a este propósito el Código Civil:



Nit. 891.190.246-1

"Culpa Grave: La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios. Esta culpa en materia civiles equivale al dolo" (Artículo 63 del Código Civil).

Aunado a lo anterior, retomamos algunas de las funciones, competencias y obligaciones que conexas el vínculo como gestor fiscal a los hechos acontecidos, pertinentes al implicado de la siguiente manera:

RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETENCOURT, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.691.533, quien se desempeñó como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá de conformidad la certificación laboral (folio 106), cuyas funciones determinadas por el Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, entre las cuales se puede precisar el numeral 9 del artículo mencionado que establece:

"9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto."

Entonces, le correspondía al Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; ejercer control, seguimiento y verificar la normatividad vigente al momento de realizar la inversión consistente en la compra del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 420-109661 del presupuesto del Municipio, con el fin de no quebrantar al normatividad vigente para la época de los hechos, pues sobre él recaía de manera directa la obligación de determinar, administrar y controlar los recursos del Municipio, acción que no realizó en debida forma durante la ejecución compra, realizándola la misma sin el avalúo comercial vigente al momento de ejecutarse la compra.

11.1.2 Un daño patrimonial al Estado.

La Ley 610 del 2000, establece en su artículo 6, "(...) *daño patrimonial al Estado la lesión al patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo (...)*". En el presente caso porque se adquirió un bien inmueble, sin el debido avalúo comercial vigente para la fecha de la compra, con ocasión de la ejecución del Contrato de Compraventa No. 001 de fecha 26 de diciembre de 2013, suscrita entre el Municipio de El Paujil, Caquetá y el señor Heriberto Arcila Puentes, desconociéndose la normatividad vigente para este tipo de negocios jurídicos, producida por una gestión fiscal inoportuna, ineficiente, ineficaz y antieconómica por parte del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.,**

648



Nit. 891.190.246-1

como consecuencia de la diferencia encontrada por este Despacho entre el valor que se pagó por la compra del bien Inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 420-109661, producto del avalúo comercial realizado por el perito evaluador Fernando Gustavo Martínez Bravo en cuantía de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/CTE.**, el cual se realizó el día 10 de mayo de 2013, produciéndose la compra el día 26 de diciembre de 2013, es decir cuando estaba sin vigencia el avalúo comercial y el valor establecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC., en cuantía de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$143.967.452) M/CTE.**

11.1.3 Certeza del daño:

Desde los principios generales de la Responsabilidad Fiscal es necesario destacar que el daño debe ser cierto. El daño cierto supone la certidumbre sobre su existencia, con independencia de su actualidad o monto. En el caso de responsabilidad fiscal, el daño debe reunir tal exigencia de certeza, y mientras esto no esté demostrado no es posible iniciar el respectivo proceso, por la ausencia de uno de los elementos configuradores de la acción.

De esta definición inmediatamente se destaca que el daño cierto puede ser pasado que ya ocurrió, o futuro que va a suceder.

La Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en Sentencia del 04 de abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO HINESTROSA, sostuvo sobre este requisito lo siguiente:

"Dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se de responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquél, cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizadora."

De acuerdo con el anterior razonamiento jurídico y con base en las pruebas recaudadas en el presente proceso, se termina se produjo daño al Estado así:

El señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.691533**, en calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, quien con su gestión fiscal ineficiente, ineficaz y antieconómica, al ostentar la calidad de gestor fiscal y consecuentemente responsable fiscal, no cumplió con lo establecido en el artículo 3.7.3.1 del Decreto 734 de fecha 13 de abril de 2012, al igual que incumplió también con el numeral 9 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, el cual preceptúa entre las funciones que tenía como Alcalde:

"9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto."

649



Nit. 891.190.246-1

Por lo que su conducta es gravemente culposa debido a que vulneró el ordenamiento jurídico y omitió el cumplimiento de sus funciones asignadas como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá, Caquetá; en desarrollo de la ejecución del negocio jurídico Promesa de Compraventa No. 001 de fecha 26 de diciembre de 2013, generando con su actuar un daño al patrimonio del Municipio de El Paujil, Caquetá, tal como se estableció anteriormente, esto en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.,**

11.1.4. Un nexo causal entre los dos elementos anteriores:

Establecido de esta manera el hecho gravemente culposo y el daño que se le ha ocasionado al erario público del Municipio de El Paujil, Caquetá; se deduce que se produjo con ocasión de la conducta del responsable del detrimento patrimonial el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.691.533, en calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; durante la vigencia 2013, afectando con su actuar el patrimonio del Municipio que dirigía para la fecha de los hechos materia de investigación por cuanto omitió su responsabilidad, por faltar al deber que estatuye el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, acerca de la finalidad de la función administrativa, las funciones asignadas al Alcalde de conformidad con el artículo 315 numeral 9 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3.7.3.1 del Decreto 734 de fecha 13 de abril de 2012; toda vez que tenía la facultad de supervisar, controlar e invertir en las actividades relacionadas con el manejo de los recursos de la administración municipal y omitió las funciones arriba mencionadas, por cuanto no actuó de manera diligente en la inversión e los recursos del Municipio, faltando al debido cuidado que demandaba su cargo y con su acción de omisión conllevó a que se originara el detrimento patrimonial generando la causación del daño.

12. DAÑO PATRIMONIAL Y SU CUANTIFICACIÓN

Conforme a lo establecido en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, el cual preceptúa: **"ARTÍCULO 53. FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL.** *<Aparte tachado INEXEQUIBLE>* El funcionario competente proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable.

Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes.



Nit. 891.190.246-1

Ahora bien, la indexación que da lugar al deterioro del valor adquisitivo de la moneda que para el caso en concreto debe contabilizarse a partir del momento que se perdieron los recursos del Estado hasta el momento en que estos se restituyen o a la fecha del fallo, para lo cual se ha tomado la siguiente fórmula: $VP = VH \times IF / II$.

Teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor se debe actualizar a valor presente el detrimento ocasionado por el investigado, para lo cual el Despacho procederá a efectuarlo así:

En la persona del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETENCOURT**, identificado con cedula de ciudadanía 17.691.533, expedida en Florencia, Caquetá; quien para la época de los hechos fungió en calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; en la ejecución del Contrato de Compraventa No. 001 de fecha 26 de diciembre de 2013; es el responsable fiscal del detrimento patrimonial al Municipio de El Paujil, Caquetá, en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, por concepto de la compra del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 420-109661, en desarrollo del Contrato de Compraventa No. 001 de fecha 26 de diciembre de 2013.

Por tal razón, la cuantía **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, desde el 26 de diciembre de 2013 hasta el día 20 de junio de 2024, equivalen a la suma de:

$$VP = VH \times IF / II$$

Dónde: VP es igual a Valor Presente

VH es Valor Histórico = \$ 96.032.548

IF es Índice Final, en este caso corresponde al factor 142.92

II es índice Inicial, en este caso corresponde al factor 79.56

VP= \$96.032.548 del 26 de diciembre de 2013 a la fecha es:

$$VP = \$96.032.548 \times 142.92 / 79.56 = \$172.510.957$$

VP= \$172.510.957

En razón a lo anterior, se debe Fallar Con Responsabilidad Fiscal en la cuantía de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$172.510.957) M/CTE.**, de acuerdo con los artículos 3, 4, 5, 6 y 53 de la Ley 610 de 2000, en contra del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, basado en la gestión fiscal ineficiente, ineficaz y antieconómica que en términos generales no se aplicó a los cometidos y fines esenciales del Estado, al manejar los recursos del municipio de El Paujil, Caquetá, en su condición e Alcalde.

651



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

En virtud de lo anterior, se establece como valor indexado a resarcir por el hecho generador del reproche fiscal, en el presente proceso la cuantía de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$172.510.957) M/CTE.**, con fundamento en los artículos 3, 4, 5, 6 y 53 de la Ley 610 de 2000, en contra de del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETNACOURT**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.691.533, expedida Florencia, Caquetá; en calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; para la época de los hechos, de igual manera con fundamento en los artículos 3, 4, 5, 6 y 53 de la Ley 610 de 2000, y en contra del Tercero Civilmente Responsable Compañía de Seguros Solidaria de Colombia Nit:860.524.654-6, en razón a la afectación de la garantía No. Seguro Póliza Multirriesgos No. 630-73-994000000032, vigente desde el 01 de noviembre de 2013 hasta el 01 de marzo de 2014, respecto del amparo Manejo Global del Sector Oficial por valor de \$100.000.000 M/Cte., con deducible del 10% del valor de la pérdida, mínimo 5 SMMLV, constituidas a favor del Municipio de El Paujil, Caquetá; a quien le corresponde responder por la cuantía de **NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$90.000.000) M/CTE.**, sobre el valor total del daño patrimonial indexado que determinó el presente fallo.

En mérito de lo anterior, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en uso de sus facultades, legales, y reglamentarias,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fallar Con Responsabilidad Fiscal de conformidad con el Artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en la cuantía de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$172.510.957) M/CTE.**, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal de Unica Instancia No. 1148, conforme se expresa en la parte motiva de la presente providencia, distribuido de la siguiente manera:

- En contra del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.691.533 en calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; en cuantía de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$172.510.957) M/CTE.**, sobre el valor total del daño.
- En contra del tercero civilmente responsable la compañía de seguros **SOLIDARIA DE COLOMBIA** en cuantía de **NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$90.000.000) M/CTE.**, sobre el valor total del daño patrimonial indexado que determinó el presente fallo, que afectará la póliza de Seguro Póliza Multirriesgos No. 630-73-994000000032, sobre el valor total del daño.



Nit. 891.190.246-1

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente del presente Auto conforme al artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, haciendo entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita de esta decisión, así:

- 1) Al señor **Rodrigo Andrés Castro Betancourt**, a través de su correo electrónico rodrigoandrescastro@hotmail.com, y a través de su defensora de oficio la estudiante de Derecho Luz Marina Moreno Sanabria, al correo electrónico luzm.moreno@udla.edu.co (folio 470).

ARTÍCULO TERCERO: Cítese a la compañía de seguros Solidaria de Colombia para ser notificado del presente Fallo con responsabilidad Fiscal al correo electrónico notificaciones@solidaria.com.co

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante la Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, por tratarse de ser un proceso de única instancia (Art. 110 Ley 1474 de 2011) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 610 de 2000.

ARTÍCULO CUARTO: Remítase al Contralor Departamental del Caquetá, para que se surta el Grado de Consulta de que trata el artículo 18 de la Ley 610 de 2000.

ARTÍCULO QUINTO: Las sumas de los dineros fallados con responsabilidad fiscal con ocasión al daño patrimonial determinado por este órgano de control fiscal, se deberá consignar en la cuenta de depósitos judiciales No. 180019196155, del Banco Agrario de Colombia, Oficina Florencia, a nombre de la Contraloría Departamental del Caquetá.

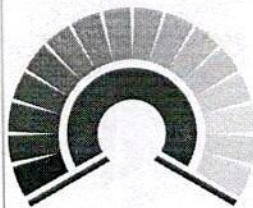
ARTÍCULO SEXTO: En firme y ejecutoriada la presente providencia, a través de la secretaría de la Dependencia Técnica de Responsabilidad Fiscal, súrtase los siguientes traslados y comunicaciones:

Numeral 1: Solicitar a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, incluir en el Boletín de Responsables Fiscales a la persona a quien se le falló con Responsabilidad Fiscal, dando cumplimiento con lo preceptuado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

Numeral 2: Remitir copia íntegra del presente proveído a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el numeral 57 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Numeral 3: Remitir copia íntegra del presente proveído a la entidad afectada, para que se surtan los registros contables correspondientes.

Numeral 4: Comuníquese el presente proveído al Profesional Universitario con funciones de Tesorería de la Contraloría Departamental del Caquetá, para que se realicen los registros contables correspondientes



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

ARTICULO SÉPTIMO: Por Secretaría Común de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, cúmplase lo ordenado en la presente providencia, librese los oficios y despachos comisorios a que haya lugar y efectúese las anotaciones en los registros de control que se llevan en la dependencia.

NOTIFÍQUESE, CÍTESE Y CÚMPLASE

JORGE TADEO OYOLA PRIETO
Director Técnico de Responsabilidad Fiscal

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Elaboró:	Edgar Medina Pérez	Profesional Universitario	20-06-24	
Revisó:	Jorge Tadeo Oyola Prieto	DTRF	20-06-24	
Aprobó:	Jorge Tadeo Oyola Prieto	DTRF	20-06-24	

654



Total Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme
2003 - 2024

Mes	Base Diciembre de 2018 = 100.00																							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Enero	50.42	53.54	56.45	59.02	61.80	64.57	70.21	73.69	74.12	76.75	78.28	79.95	83.00	89.19	94.07	97.53	100.00	104.24	105.91	113.26	128.27	136.98		
Febrero	50.98	54.18	57.02	59.41	62.53	66.50	70.80	72.28	74.57	77.22	78.63	80.45	83.96	90.33	95.01	98.22	101.18	104.94	106.58	115.11	130.40	140.49		
Marzo	51.51	54.71	57.46	59.83	63.29	67.04	71.15	72.46	74.77	77.31	78.79	80.77	84.45	91.18	95.46	98.45	101.62	105.53	107.12	116.26	131.77	141.48		
Abril	52.10	54.96	57.72	60.09	63.85	67.51	71.38	72.79	74.86	77.42	78.99	81.14	84.90	91.63	95.91	98.91	102.12	105.70	107.76	117.71	132.80	142.32		
Mayo	52.36	55.17	57.95	60.29	64.05	68.14	71.39	72.87	75.07	77.66	79.21	81.53	85.12	92.10	96.12	99.16	102.44	105.36	108.84	118.70	133.38	142.92		
Junio	52.33	55.51	58.18	60.48	64.12	68.73	71.35	72.95	75.31	77.72	79.39	81.61	85.21	92.54	96.23	99.31	102.71	104.97	108.78	119.31	133.78			
Julio	52.26	55.49	58.21	60.73	64.23	69.06	71.32	72.92	75.42	77.70	79.43	81.73	85.37	93.02	96.18	99.18	102.94	104.97	109.14	120.27	134.45			
Agosto	52.42	55.51	58.21	60.96	64.14	69.19	71.35	73.00	75.39	77.73	79.50	81.90	85.78	92.73	96.32	99.30	103.03	104.96	109.62	121.50	135.39			
Septiembre	52.53	55.67	58.46	61.14	64.20	69.06	71.28	72.90	75.62	77.96	79.73	82.01	86.39	92.68	96.36	99.47	103.26	105.29	110.04	122.63	136.11			
Octubre	52.56	55.66	58.60	61.05	64.20	69.30	71.19	72.84	75.77	78.08	79.52	82.14	86.98	92.62	96.37	99.59	103.43	105.23	110.06	123.51	136.45			
Noviembre	52.75	55.82	58.66	61.19	64.51	69.49	71.14	72.98	75.87	77.98	79.35	82.25	87.51	92.73	96.55	99.70	103.54	105.08	110.60	124.46	137.09			
Diciembre	53.07	55.99	58.70	61.33	64.82	69.80	71.20	73.45	76.19	78.05	79.56	82.47	88.05	93.11	96.92	100.00	103.60	105.46	111.41	126.03	137.72			

Fuente: DANE

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.

Actualizado el 11 de junio de 2024

PF-1226

Florencia, 20 de junio del 2024

Señores:
COMPañÍA DE SEGUROS SOLIDARIA DE COLOMBIA
Email: notificaciones@solidaria.com.co
Ciudad

ASUNTO: Citación a Notificarse
Fallo Fiscal N° 004
Proceso de Responsabilidad Fiscal No.1148

Sírvase presentarse a éste despacho ubicado en la carrera 13 No.15-00 piso 3° del Edificio de la Gobernación, en horario habilitado por la Contraloría Departamental del Caquetá de 8:00 am a 12:00pm y de 2:00pm a 6:00pm, de Lunes a jueves y de 7:00pm a 3:00pm el día viernes o en caso de no poder trasladarse puede enviar correo electrónico a info@contraloriadelcaqueta.gov.co Autorizando el Correo al cual desea que sea enviada la providencia con el objeto de notificarse el Fallo Fiscal No.004 de fecha 20 de junio del 2024 proferido por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal dentro del proceso expuesto en el asunto.

Transcurridos cinco (5) días hábiles de la fecha de envío de la presente citación, se procederá a realizar la notificación por aviso, si para esa fecha no se ha podido surtir la notificación personal.

Cordialmente



LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO
Secretaria
Area de Responsabilidad Fiscal

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS**

656

Florencia Caquetá, 24 de junio del 2024

Doctor:

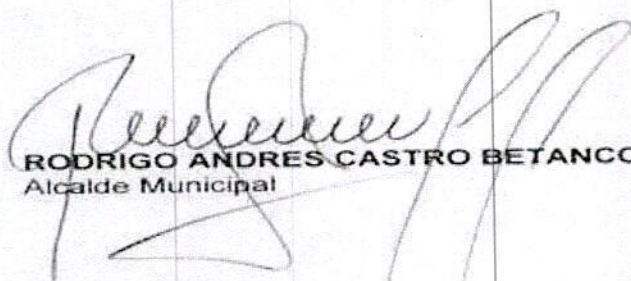
HERMES TORRES NUÑEZ
Contralor Departamental del
Caquetá
E.S.D.

Asunto: Solicitud aplazamiento citación versión libre proceso fiscal
No.1148.

RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURTH, mayor edad, identificado con cedula de ciudadana número 17.691.533 de Florencia, Caquetá, en mi calidad de investigado, dentro del proceso de la referencia, respetuosamente **AUTORIZO** a la señora **CLAUDIA LORENA RICO MORALES**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.116.919.816, para que revise y solicite copia del expediente digital del proceso de responsabilidad fiscal No. 1148, donde soy investigado.

De antemano agradezco su atención.

Cordialmente,



RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT
Alcalde Municipal

24/6/24, 14:42

Gmail - AUTORIZACIÓN PRF 1148

657



CLAUDIA LORENA RICO MORALES <claudiaricoabogada@gmail.com>

AUTORIZACIÓN PRF 1148

1 mensaje

Andres Castro <rodrigoandrescastro@hotmail.com>

24 de junio de 2024, 14:41

Para: "claudiaricoabogada@gmail.com" <claudiaricoabogada@gmail.com>

Buenas tardes abogada CLAUDIA RICO, mediante correo envío AUTORIZACION con el fin de que solicite revisión y copia del expediente digital del PRF nO. 1148 tramitado en la Contraloría Departamental del Caquetá.

Atentamente,

RODRIGO ANDRES CASTRO B.
17.691.533



SOLICITUD REVISION Y COPIA EXPEDIENTE 1148.pdf
87K

Florencia, Capital, 24 de junio de 2024

CLAUDIA LORONDO LEO MORAN, c.c. 1116 919816,
manifiesto que en la tarde del día 24 de
junio de 2024 tuvo acceso al expediente
Físico PRF 1148, quedando pendiente la
revisión de la totalidad del expediente.

Atentamente.

Claudia Lemos Leo Morán
1116 919816.

En la fecha 25 de junio de 2024
terminé de revisar proceso en su
totalidad.

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de ideas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así

660

como sus archivos adjuntos en la fecha y hora indicadas anteriormente.

Importante: En el aparte Acuse de Recibo, en los casos en que aparece la frase "Queued mail for delivery" se debe a las características del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, en estos casos, si el mensaje no pudo ser entregado dicho servidor enviará una segunda respuesta indicando que no fue exitosa la entrega del mensaje, si no hay una segunda respuesta del servidor de correo electrónico, quiere decir que tu mensaje fue entregado satisfactoriamente por lo que este documento pasa a constituir acuse de recibo

✉ Contenido del Mensaje

Asunto: NOTIFICACION DEL FALLO FISCAL DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148

Cuerpo del mensaje:

Señores;

RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURTH

LUZ MARINA MORENA SANABRIA

En la presente fecha se procede a notificar el Fallo con Responsabilidad del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148 del 20 de junio del 2024, en donde se procede al Auto a fallar de conformidad con lo establecido en los artículos 53 de la ley 610 de 2000.

Es preciso indicar que contra el presente Fallo para que los sujetos procesales, presente dentro de los Cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación del proceso procede el recurso de reposición.

Adjunto copia íntegra del Acto Administrativo en (152) Hojas

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

DAR CLIC EN EL SIGUIENTE LINK- DECARGA EL FALLO FISCAL N 1148

<https://drive.google.com/drive/folders/1P5F8Bmg1C584t78vOMl4WKy3qShX54sl?usp=sharing>



El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos

LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO

SECRETARIA

Correo: lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co

661



Adjuntos

--



Descargas

--

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 527 de 1999, la presente notificación electrónica como los documentos adjuntos a esta, son documentos íntegros, ya que es posible determinar que los mismos no han sido modificados ni alterados desde el momento en que fue enviado el mensaje de datos por parte del emisor del mensaje, por lo tanto dichos documentos tienen plena validez jurídica y probatoria.

www.4-72.com.co

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S Certifica que ha realizado por encargo de CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA identificado(a) con NIT 891190246 el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id mensaje: 1483
Emisor: contraloriadelcaqueta@contraloriadelcaqueta.gov.co (no-reply@contraloriadelcaqueta.gov.co)
Destinatario: luzm.moreno@udla.edu.co - LUZ MARINA SANABRIA
Asunto: NOTIFICACION DEL FALLO FISCAL DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148
Fecha envío: 2024-06-20 14:54
Estado actual: Lectura del mensaje


Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
<p>● Estampa de tiempo al envío de la notificación</p> <p>El mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste - Artículo 23 Ley 527 de 1999.</p>	<p>Fecha: 2024/06/20 Hora: 14:58:07</p>	<p>Tiempo de firmado: Jun 20 19:58:07 2024 GMT Política: 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.6.0.</p>
<p>● Acuse de recibo</p> <p>Con la recepción del presente mensaje de datos en la bandeja de entrada del receptor, se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos legales de acuerdo con las normas aplicables vigentes, especialmente el Artículo 24 de la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.</p>	<p>Fecha: 2024/06/20 Hora: 14:58:10</p>	<p>Jun 20 14:58:10 cl-t205-282cl postfix/smtp[18007]: E71841248804: to=<luzm.moreno@udla.edu.co>, relay=udla-edu-co.mail.protection.outlook.com[52.101.9.17]:25, delay=2.1, delays=0.11/0.0/1.8, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 <80f78d5619d3b76117cf9a3790bd996d7f2ad2fb2e5e109bc8efd712a9588367@correocertificado4-72.com.co> [InternalId=73014468855, Hostname=LV3P220MB1558.NAMP220.PROD. OUTL O OK.COM] 27511 bytes in 0.082, 326.072 KB/sec Queued mail for delivery)</p>
<p>● Lectura del mensaje</p>	<p>Fecha: 2024/06/20 Hora: 14:59:25</p>	<p>Dirección IP: 181.57.16.36 Colombia - Caqueta - Florencia Agente de usuario: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36</p>

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de ideas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así como sus archivos adjuntos en la fecha y hora indicadas anteriormente.

Importante: En el aparte Acuse de Recibo, en los casos en que aparece la frase "Queued mail for delivery" se debe a las características del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, en estos casos, si el mensaje no pudo ser entregado dicho servidor enviará una segunda respuesta indicando que no fue exitosa la entrega del mensaje, si no hay una segunda respuesta del servidor de correo electrónico, quiere decir que tu mensaje fue entregado satisfactoriamente por lo que este documento pasa a constituir acuse de recibo

✉ Contenido del Mensaje

 Cuerpo del mensaje:

Señores;

RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURTH

LUZ MARINA MORENA SANABRIA

En la presente fecha se procede a notificar el Fallo con Responsabilidad del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148 del 20 de junio del 2024, en donde se procede al Auto a fallar de conformidad con lo establecido en los artículos 53 de la ley 610 de 2000.

Es preciso indicar que contra el presente Fallo para que los sujetos procesales, presente dentro de los Cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación del proceso procede el recurso de reposición.

Adjunto copia íntegra del Acto Administrativo en (152) Hojas

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

DAR CLIC EN EL SIGUIENTE LINK- DECARGA EL FALLO FISCAL N 1148

<https://drive.google.com/drive/folders/1P5F8Bmg1C584t78vOMl4WKy3qShX54sl?usp=sharing>




El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos


LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO

SECRETARIA

Correo:lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co

 Adjuntos

664

--
 Descargas
--

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 527 de 1999, la presente notificación electrónica como los documentos adjuntos a esta, son documentos íntegros, ya que es posible determinar que los mismos no han sido modificados ni alterados desde el momento en que fue enviado el mensaje de datos por parte del emisor del mensaje, por lo tanto dichos documentos tienen plena validez jurídica y probatoria.

www.4-72.com.co

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S Certifica que ha realizado por encargo de **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA** identificado(a) con **NIT 891190246** el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id mensaje:	1484
Emisor:	contraloriadelcaqueta@contraloriadelcaqueta.gov.co (no-reply@contraloriadelcaqueta.gov.co)
Destinatario:	notificaciones@solidaria.com.co - COMPAÑIA DE SEGUROS SOLIDARIA DE COLOMBIA
Asunto:	PF-1226 CITACION A NOTIFICARSE DEL FALLO FISCAL DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148
Fecha envío:	2024-06-20 14:58
Estado actual:	Lectura del mensaje

Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
<div> <div>Estampa de tiempo al envío de la notificacion</div> <div> <p>El mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste - Artículo 23 Ley 527 de 1999.</p> </div> </div>	<div> <div>Fecha: 2024/06/20</div> <div>Hora: 15:02:40</div> </div>	<div> <div>Tiempo de firmado: Jun 20 20:02:40 2024 GMT</div> <div>Política: 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.8.0.</div> </div>
<div> <div>Acuse de recibo</div> <div> <p>Con la recepción del presente mensaje de datos en la bandeja de entrada del receptor, se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos legales de acuerdo con las normas aplicables vigentes, especialmente el Artículo 24 de la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.</p> </div> </div>	<div> <div>Fecha: 2024/06/20</div> <div>Hora: 15:02:41</div> </div>	<div> <div>Jun 20 15:02:41 cl-t205-282cl postfix/smtp[26703]: 3F1F3124881B: to=<notificaciones@solidaria.com.co>g t ; relay=solidaria-com-co.mail.protection.o u tlook.com[52.101.9.12]:25, delay=1.3, delays=0.11/0.2/0.99, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 <fa6aa12956d3b4f923106ca5c2a4e45d01a2 6 cb23a281a3426e5c86167774a69@correocerti f cado4-72.com.co> [InternalId=6601364735682, Hostname=SA6PR17MB7339.namprd17.prod.out look.com] 27721 bytes in 0.184, 146.701 KB/sec Queued mail for delivery)</div> </div>
<div> <div>El destinatario abrio la notificacion</div> </div>	<div> <div>Fecha: 2024/06/20</div> <div>Hora: 15:28:23</div> </div>	<div> <div>Dirección IP: 161.69.60.36</div> <div>Agente de usuario: Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)</div> </div>
<div> <div>Lectura del mensaje</div> </div>	<div> <div>Fecha: 2024/06/20</div> <div>Hora: 16:39:18</div> </div>	<div> <div>Dirección IP: 161.69.60.36 Colombia - Distrito Capital de Bogota - Bogota</div> <div>Agente de usuario: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.0.0</div> </div>

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de ideas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así como sus archivos adjuntos en la fecha y hora indicadas anteriormente.

666

Importante: En el aparte Acuse de Recibo, en los casos en que aparece la frase "Queued mail for delivery" se debe a las características del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, en estos casos, si el mensaje no pudo ser entregado dicho servidor enviará una segunda respuesta indicando que no fue exitosa la entrega del mensaje, si no hay una segunda respuesta del servidor de correo electrónico, quiere decir que tu mensaje fue entregado satisfactoriamente por lo que este documento pasa a constituir acuse de recibo

✉ **Contenido del Mensaje**

Asunto: PF-1226 CITACION A NOTIFICARSE DEL FALLO FISCAL DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148

📄 Cuerpo del mensaje:

Señores:

COMPAÑÍA DE SEGUROS SOLIDARIA DE COLOMBIA

Email: notificaciones@solidaria.com.co

Ciudad

ASUNTO: Citación a Notificarse

Fallo Fiscal N° 004

Proceso de Responsabilidad Fiscal No.1148

Sírvase presentarse a éste despacho ubicado en la carrera 13 No.15-00 piso 3° del Edificio de la Gobernación, en horario habilitado por la Contraloría Departamental del Caquetá de 8:00 am a 12:00pm y de 2:00pm a 6:00pm, de Lunes a jueves y de 7:00pm a 3:00pm el día viernes o en caso de no poder trasladarse puede enviar correo electrónico a info@contraloriadelcaqueta.gov.co Autorizando el Correo al cual desea que sea enviada la providencia con el objeto de notificarse el Fallo Fiscal No.004 de fecha 20 de junio del 2024 proferido por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal dentro del proceso expuesto en el asunto.

Transcurridos cinco (5) días hábiles de la fecha de envío de la presente citación, se procederá a realizar la notificación por aviso, si para esa fecha no se ha podido surtir la notificación personal.

Cordialmente




El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos


LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO

SECRETARIA

Correo: lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co

 Adjuntos

Nombre	Suma de Verificación (SHA-256)
PF-1226_CITACION_A_NOTIFICARSE_DEL_FALLO_FISCAL_DEL_PRF_1148_0001.pdf	10acb858ab5cedc576b1cfb7d3ad97b855976b65b4f291410e9cd527b995a592

 Descargas

Archivo: PF-1226_CITACION_A_NOTIFICARSE_DEL_FALLO_FISCAL_DEL_PRF_1148_0001.pdf **desde:** 161.69.60.36 **el día:** 2024-06-20 16:39:32

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 527 de 1999, la presente notificación electrónica como los documentos adjuntos a esta, son documentos íntegros, ya que es posible determinar que los mismos no han sido modificados ni alterados desde el momento en que fue enviado el mensaje de datos por parte del emisor del mensaje, por lo tanto dichos documentos tienen plena validez jurídica y probatoria.

www.4-72.com.co

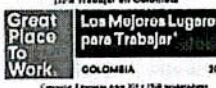


Aseguradora Solidaria
de Colombia

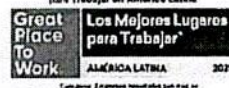
¡ Siempre junto a ti !

Bogotá D.C., 18 de junio de 2024
ISG-01166 - PRF5910

Forma la Décima Segunda Mejor Empresa
para Trabajar en Colombia



Forma la Novena Mejor Empresa
para Trabajar en América Latina



Compañía de Seguros

Señores
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
E. S. D.

PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL
RADICADO: 1148
ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE EL PAUJIL
TERCERO VINCULADO: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

JOSÉ IVÁN BONILLA PÉREZ, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.520.827 obrando como representante legal judicial de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, sociedad comercial legalmente constituida, identificada con NIT 860.524.654-6, domiciliada en Bogotá D.C., sometida al control y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera, tal como consta en el certificado anexo, por medio del presente confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente los intereses de la compañía dentro del proceso de la referencia.

El doctor **HERRERA ÁVILA**, queda investido con la facultad de notificarse, pronunciarse, contestar, interponer los recursos que fueren procedentes, solicitar pruebas, recibir, desistir, sustituir y reasumir el presente mandato, solicitar copias de las actuaciones surtidas y de cualquier pieza que obre en el expediente, y demás facultades necesarias para el cabal cumplimiento de los fines del presente mandato.

Atentamente,

JOSE IVAN

Firmado digitalmente por
JOSE IVAN BONILLA PEREZ

BONILLA PEREZ

Fecha: 2024.06.18

JOSÉ IVÁN BONILLA PÉREZ

Representante Legal

C.C. No. 79.520.827

Acepto,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C.S.J.

notificaciones@gha.com.co

Oficina Principal Calle 100 No. 9A - 45 Piso 12 Bogotá, Colombia • Línea Solidaria: 018000 512 021 • #789
WhatsApp Business - Cami a través de www.aseguradorasolidaria.com.co

Defensor del Consumidor Financiero Manuel Guillermo Rueda Serrano • Carrera 13 A # 28-38 oficina 221, Bogotá
Teléfono: (601) 7919180 • Fax: (601) 7919180 • Celular: 312 342 6229 • Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.



V-08-2023



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE AGENCIA
Fecha expedición: 11/06/2024 01:36:39 pm

Recibo No. 9525488, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824FKR181

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA

Nombre:	CALI NORTE
Matrícula No.:	327821
Fecha de matrícula en esta	27 de noviembre de 1992
Cámara :	
Último año renovado:	2024
Fecha de renovación:	07 de febrero de 2024
Activos Vinculados:	\$1,312,239,396

UBICACIÓN

Dirección comercial:	CL 21 NORTE # 4 - 30
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	notificaciones@solidaria.com.co
Teléfono comercial 1:	6607801
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	No reportó

PROPIETARIO

Nombre:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
NIT:	860524654 - 6
Matrícula No.:	734662
Domicilio:	Bogotá
Dirección:	CL 100 NO. 9 A -45 P 12
Teléfono:	6464330

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR

Por documento privado del 19 de mayo de 2017, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de junio de 2017 con el No. 1248 del Libro VI, se designó a:

CARGO
ADMINISTRADOR

NOMBRE
JUAN CARLOS LENIS COBO

IDENTIFICACIÓN
C.C.94384774

Recibo No. 9525488, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824FKR181

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PODERES

Por Escritura Pública No. 1556 del 24 de julio de 2006 Notaria Cuarenta Y Tres de Bogota ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de agosto de 2006 con el No. 103 del Libro V CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE AL DOCTOR LUIS EDUARDO OSPINA ZAMORA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE CALI, DE NACIONALIDAD COLOMBIANO, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 16.278.340 DE PALMIRA VALLE Y TARJETA PROFESIONAL NUMERO 86093 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, PARA QUE REPRESENTEN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVAMENTE A LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA, ENTIDAD COOPERATIVA, SIN LIMITE EN RELACION CON LA CUANTIA, EN LOS SIGUIENTES ACTOS: A) ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION DE QUE TRATA EL ARTICULO CIENTO UNO (101) DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL O CUALQUIER OTRA QUE LO SUSTITUYA DE LA JURISDICCION CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE CALI Y LOS DEMAS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE, CON LAS FACULTADES DE CONCILIACION DE QUE TRATA LA CITADA DISPOSICION LEGAL. B) ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION QUE SE ADELANTE COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, DE ACUERDO CON EL ARTICULO TREINTA Y CINCO (35) DE LA LEY SEISCIENTOS CUARENTA (640) DE DOS MIL UNO (2001) Y NORMAS QUE LA SUSTITUYAN, ANTE LA JURISDICCION CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE CALI Y LOS DEMAS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE CON LAS FACULTADES DE CONCILIACION DE QUE TRATAN LAS CITADAS DISPOSICIONES. C) ABSOLUCION DE LOS INTERROGATORIOS DE PARTE A LOS QUE FUERE CITADO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, EN LOS PROCESOS QUE EN LA CIUDAD DE CALI Y LOS DEMAS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE SE ADELANTEN ANTE LA JURISDICCION CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA, O, QUE ANTE ESTAS FUERE CITADO, COMO INTERROGATORIOS EXTRAPROCESALES.

PARAGRAFO: LOS PARAMETROS DE CONCILIACION ADOPTADOS DEBERAN OBEDECER A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR ESCRITO PARA EL EFECTO POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA. SEGUNDO: CUALQUIER EXTRALIMITACION DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL PRESENTE PODER SOLO OBLIGARA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS (1266) DEL CODIGO DE COMERCIO.

Por Escritura Pública No. 2763 del 20 de octubre de 2009 Notaria Cuarenta Y Tres de Bogota ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2010 con el No. 11 del Libro V CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE AL DOCTOR GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE CALI, DE NACIONALIDAD COLOMBIANO, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 19.395.114 DE BOGOTÁ Y TARJETA PROFESIONAL NÚMERO 39.116 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , PARA QUE REPRESENTE JUDICIAL Y ADMINISTRATIVAMENTE A LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, SIN LÍMITE EN RELACIÓN CON LA CUANTÍA, EN LOS SIGUIENTES ACTOS: A) ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN DE QUE TRATA EL ARTÍCULO CIENTO UNO (101) DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL O CUALQUIER OTRA QUE LO SUSTITUYA DE LA JURISDICCION CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON LAS FACULTADES DE CONCILIACIÓN DE QUE TRATA LA CITADA DISPOSICIÓN LEGAL. B) ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN QUE SE ADELANTE COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, DE ACUERDO CON EL

Recibo No. 9525488, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824FKR181

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO TREINTA Y CINCO (35) DE LA LEY SEISCIENTOS CUARENTA (640) DE DOS MIL UNO (2001) Y NORMAS QUE LA SUSTITUYAN, ANTE LA JURISDICCIÓN CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CON LAS FACULTADES DE CONCILIACIÓN DE QUE TRATAN LAS CITADAS DISPOSICIONES. C) ABSOLUCIÓN DE LOS INTERROGATORIOS DE PARTE A LOS QUE FUERE CITADO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, EN LOS PROCESOS QUE EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SE ADELANTEN ANTE LA JURISDICCIÓN CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA, O, QUE ANTE ÉSTAS FUERE CITADO, COMO INTERROGATORIOS EXTRA PROCESALES. PARÁGRAFO: LOS PARÁMETROS DE CONCILIACIÓN ADOPTADOS DEBERÁN OBEDECER A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR ESCRITO PARA EL EFECTO POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA. SEGUNDO: CUALQUIER EXTRALIMITACIÓN DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL PRESENTE PODER SOLO OBLIGARÁ A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS (1266) DEL CÓDIGO DE COMERCIO. VIGENCIA : LA VIGENCIA DEL PRESENTE PODER ES INDEFINIDA, CONTADOS A PARTIR DEL MOMENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO.

Por Escritura Pública No. 1764 del 23 de mayo de 2015 Notaria Cuarenta Y Cuatro de Bogota , inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de agosto de 2015 con el No. 247 del Libro V COMPARECIO: RAMIRO ALBERTO RUIZ CLAVIJO, CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 1.3,360.922 DE OCAÑA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PERSONA JURÍDICA DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO, Y SUFICIENTE AL DOCTOR GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD COLOMBIANO, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 19.395.114 DE BOGOTÁ Y TARJETA PROFESIONAL NÚMERO-39.116 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, PARA QUE, ACTUANDO EN NOMBRE DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA. REPRESENTA A LA MISMA EN ATENCIÓN A TRAMITES ARBITRALES, LAUDÓS ARBITRALES, CONCILIACIÓN, RECURSOS DE ANULACIÓN, RECURSO DE REVISIÓN Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS MEDIANTE LA LEY 1563 DEL 2012 Y TODA AQUELLA NORMA QUE LE ADICIONE, MODIFIQUE O ACLARE.

Por Escritura Pública No. 3079 del 30 de diciembre de 2021 Notaria Decima de Bogota , inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 2022 con el No. 48 del Libro V , Compareció, Francisco Andrés Rojas Aguirre identificado con cédula de ciudadanía No. 79.152.694 actuando en calidad de representante legal de la mencionada sociedad, confiere poder general amplio y suficiente a Juan Carlos Lenis Cobo, mayor de edad, de nacionalidad colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.384.774 para que en su calidad de Gerente de la Agencia Cali Norte de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, en la ciudad de Cali y en representación de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA ejecute los siguientes actos:

A) Expedir y firmar pólizas en los ramos comercializados por ASEGURADORA SOLIDARIA DE

Recibo No. 9525488, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824FKR181

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA y que estén debidamente autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, hasta por los montos señalados mediante escrito separado, suscrito por el presidente de la Compañía o por quien este delegue, escrito que forma parte integral del presente poder.

B) Representar en la ciudad de Cali a ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA en las audiencias de conciliación de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, con las facultades de conciliación de que trata la citada norma, así como en todas aquellas audiencias de similar naturaleza efectuadas por cualquier autoridad de la rama judicial o administrativa a que sea citada ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA. Los parámetros de conciliación adoptados por la apoderada deberán obedecer a las instrucciones impartidas por escrito para el efecto por el Representante Legal de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA. En todo caso, tendrá las facultades expresas de confesar, absolver interrogatorios /o declaraciones, exhibir y reconocer documentos.

C) Firmar propuestas y contratos de procesos de convocatoria pública (procesos de mínima cuantía, selección abreviada, licitación pública e invitaciones públicas) y/o privada en los que participe ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA de forma individual o bajo la figura de unión temporal o coaseguro, e igualmente para suscribir la documentación necesaria para la legalización y perfeccionamiento de la etapa precontractual, contractual y postcontractual, cuyo negocio no sea mayor a CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$150.000.000 M/CTE) igualmente, para que asista en representación e ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA a audiencias de adjudicación de los procesos de convocatoria pública y/o privada. Dichas facultades se le otorgan únicamente en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.

Tercero. La vigencia del poder será por el término de duración del contrat laboral suscrito con ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, sin perjuicio de que pueda ser revocado en cualquier momento.

Cuarto. Cualquier extralimitación a las facultades conferidas mediante el presente poder se lo obligará a ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA en los términos del artículo 1266 del Código de Comercio.

Por Escritura Pública No. 0175 del 09 de febrero de 2023 Notaria Decima de Bogota, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de marzo de 2023 con el No. 37 del Libro V, compareció con minuta enviada por correo electrónico el señor JOSE IVAN BONILLA PEREZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.520.827, en calidad de representante legal de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, identificada con Nit. 860.524.654-6, confiere PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE a JUAN CARLOS LENIS COBO, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.384.774, para que en su calidad de Gerente de la Agencia Cali Norte de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, en la misma ciudad y en representación de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, ejecute los siguientes actos:

A) Expedir y firmar pólizas en los ramos comercializados por ASEGURADORA SOLIDARIA DE

Recibo No. 9525488, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824FKR181

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA y que estén debidamente autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, hasta por los montos señalados mediante escrito separado, suscrito por el Presidente de la Compañía o por quien este delegue escrito que forma parte integral del presente poder.

B) Representar en el Departamento del Valle del Cauca y Cauca a ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA en las audiencias de conciliación de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, con las facultades de conciliación de que trata la citada norma, así como en todas aquellas audiencias de similar naturaleza efectuadas por cualquier autoridad de la rama judicial o administrativa a que sea citada ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA. Los parámetros de conciliación adoptados por el apoderado deberán obedecer a las instrucciones impartidas por escrito para el efecto por el Representante Legal de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA. En todo caso, tendrá las facultades expresas de confesar, absolver interrogatorios y/o declaraciones, exhibir y reconocer documentos.

C) Firmar propuestas y contratos de procesos de convocatoria pública (procesos de mínima cuantía, selección abreviada, licitación pública e invitaciones públicas) y/o privada en los que participe ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA de forma individual o bajo la figura de unión temporal o coaseguro, e igualmente para suscribir la documentación necesaria para la legalización y perfeccionamiento de la etapa precontractual, contractual y postcontractual, cuyo negocio no sea mayor a DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$250.000.000 M/CTE). Igualmente, para que asista en representación de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA a audiencias de adjudicación de los procesos de convocatoria pública y/o privada. Dichas facultades se le otorgan únicamente en el Departamento del Valle del Cauca y Cauca.

TERCERO: La vigencia de poder será por el termino de duración del contrato laboral suscrito con ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, sin perjuicio de que pueda ser revocado en cualquier momento.

CUARTO: Cualquier extralimitación a las facultades conferidas mediante el presente poder solo obligará a ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA en los términos del artículo 1266 del Código de Comercio.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.



674

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE AGENCIA
Fecha expedición: 11/06/2024 01:36:39 pm

Recibo No. 9525488, Valor: \$3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824FKR181

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6511

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: ACTIVIDAD ASEGURADORA

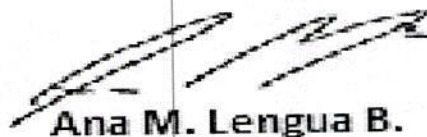
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.



Ana M. Lengua B.

675

PRF - 1148

Contraloría del Caquetá <notificaciones@contraloriadelcaqueta.gov.co>

24 de junio de 2024, 18:32

Para: notificaciones@gha.com.co, "jcalvo@gha.com.co" <jcalvo@gha.com.co>, kbuitrago@gha.com.co

Doctor

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

Comedidamente remito copia escaneada del PRF 1148, atendiendo la solicitud realizada por su señoría, por lo tanto envío el Link: para descargar la información correspondiente.

<https://drive.google.com/drive/folders/1lj15pYhUCd6oDRe5iWv0MWtJCWxrV8Z?usp=sharing>

--

Favor confirmar recibido
Cualquier otra inquietud comuníquese al correo

info@contraloriadelcaqueta.gov.co

Edificio Gobernación - Carrera 13 No. 15-00 Piso 3

Teléfonos: (8) 4352391 - 4353199 - Línea Transparente: 01 800 09 78515

Página Web: www.cdc.gov.co - Correo Electrónico: info@contraloriadelcaqueta.gov.co

Florencia, Caquetá

PRF - 1148

Contraloría del Caquetá <notificaciones@contraloriadelcaqueta.gov.co>
Para: notificaciones@gha.com.co

24 de junio de 2024, 18:33

Doctor
GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

Comedidamente remito copia escaneada del PRF 1148, atendiendo la solicitud realizada por su señoría, por lo tanto envío el Link: para descargar la información correspondiente.

<https://drive.google.com/drive/folders/1I1j15pYhUCd6oDRe5iWv0MWtJCWxrV8Z?usp=sharing>

--

Favor confirmar recibido
Cualquier otra inquietud comuníquese al correo

info@contraloriadelcaqueta.gov.co

Edificio Gobernación - Carrera 13 No. 15-00 Piso 3
Teléfonos: (8) 4352391 - 4353199 - Línea Transparente: 01 800 09 78515
Página Web: www.cdc.gov.co - Correo Electrónico: info@contraloriadelcaqueta.gov.co
Florencia, Caquetá

--

Favor confirmar recibido
Cualquier otra inquietud comuníquese al correo

info@contraloriadelcaqueta.gov.co

Edificio Gobernación - Carrera 13 No. 15-00 Piso 3
Teléfonos: (8) 4352391 - 4353199 - Línea Transparente: 01 800 09 78515
Página Web: www.cdc.gov.co - Correo Electrónico: info@contraloriadelcaqueta.gov.co
Florencia, Caquetá

Florencia, 27 de junio de 2024

Señores

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
E.S.D

REFERENCIA	RECURSO DE REPOSICIÓN FRENTE A FALLO FISCAL N° 004
TIPO DE PROCESO	RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO DE ÚNICA INSTANCIA
RADICADO	PRF-1148
ENTIDAD AFECTADA	MUNICIPIO DE EL PAUJIL
RESPONSABLE	Nit: 800.095.763 - 0
VALOR DEL DETRIMENTO INDEXADO	RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT \$ 172.510.957 M/CTE COP

LUZ MARINA MORENO SANABRIA, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.117.265.965 expedida en Solita Caquetá, adscripta a Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de la Amazonia, portadora del código estudiantil N° 20200291624. Actuando como DEFENSORA DE OFICIO en el proceso que se sigue con radicado PRF-1148 en contra del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT identificado con cedula de ciudadanía N° 17.691.533 expedida en Florencia Caquetá quien fue elegido por voto popular como alcalde del municipio de el paujil para el periodo 2012 - 2015 según credenciales expedida por la Comisión Escrutadora del 30 de octubre de 2011 y acta de posesión N° 008 de 31 de diciembre de 2011 de la notaria única del círculo de Doncello quien desempeño el cargo a partir del 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2025, de manera respetuosa me permito presentar ante este despacho **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra de **FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL N° 004** de fecha 20 de junio de 2024, mismo en el cual en la parte resolutoria declara la responsabilidad fiscal en contra de mi prohijado, en virtud de las presuntas irregularidades en la adquisición de un bien inmueble con matrícula inmobiliaria N° 420-109661, mismo predio que fue adquirido a precio comercial de acuerdo con el avalúo presentado por el ingeniero civil FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO el día 10 de mayo de 2012, presentándose un sobre costo en la compra del mismo que derivo en un presunto detrimento al patrimonio del municipio de el paujil en cuantía de noventa y seis millones treinta y dos mil quinientos cuarenta y ocho pesos (\$ 96.032.548).

En consecuencia, la dirección técnica de responsabilidad fiscal de la contraloría departamental del Caquetá emite fallo con responsabilidad fiscal acogiéndose a la extemporaneidad de la compra del bien inmueble con la vigencia del avalúo inicial fechado el 10 de mayo de 2012 y presentado por el profesional el señor FERNANDO

GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO, por dicho evento; la contraloría departamental endilga responsabilidad fiscal, resolviendo que el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT identificado con cedula de ciudadanía N° 17.691.533 expedida en Florencia Caquetá es responsable fiscal por el detrimento al erario público por un valor de noventa y seis millones treinta y dos mil quinientos cuarenta y ocho pesos (\$ 96.032.548), indexado al día del fallo por un valor de ciento setenta y dos millones quinientos diez mil novecientos cuarenta y siete (\$ 172.510.957) M/CTE.

En aras de tener un conocimiento más amplio frente a la acusación planteada por el ente acusador, de detallan los hechos por los cuales endosan responsabilidad fiscal en contra del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT:

i. HECHOS PROBADOS

PRIMERO: El día 10 de mayo de 2012 a petición del municipio de el Paujil en cabeza del alcalde Municipal el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, el señor FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO, profesional idóneo elabora avalúo comercial del predio urbano con matrícula inmobiliaria N° 420-109661 y ficha catastral N° 00-01-0004-000 ubicado en la vereda BORUGO del municipio de el Paujil, predio avaluado en doscientos cuarenta millones de pesos (\$ 240.000.000).

SEGUNDO: El día 26 de diciembre de 2013 se suscribe contrato de compraventa con el señor HERIBERTO ALCILA PUENTES (vendedor) y el MUNICIPIO DE EL PAUJIL (comprador), con el fin de adquirir predio urbano con matrícula inmobiliaria N° 420-109661 ubicado en la vereda BORUGO del municipio del Paujil.

TERCERO: El día 28 de septiembre de 2015 se realiza avalúo comercial por instituto geográfico Agustín Codazzi, elaborado por el profesional JOSÉ GERMÁN CASTELLANOS TORRES

ii. MARCO NORMATIVO

○ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

La encuesta debe hacerse con referencia a las unidades de área que usualmente se utilizan en la zona, (hectárea, fanegada, plaza, cuadra) y posteriormente hacer la conversión.

La encuesta debe hacerse para unidades de área, y verificar que al hacer la liquidación del total del área de avalúo la persona encuestada encuentre razonable el valor hallado.

Cuando el predio cuente con características diferentes dentro de él, la encuesta debe hacerse para cada una de ellas separadamente y no sobre valores promedios.

El perito debe haber hecho una estimación previa del valor asignable y cuando la información obtenida en la encuesta difiera sustancialmente del encontrado, deberá manifestarlo para que el encuestado pueda explicar las posibles razones de tal diferencia.

En la selección de la persona a investigar debe tenerse en cuenta el conocimiento que tenga del mercado y la idoneidad de ella, además que no tengan interés directo en el bien.

Los valores obtenidos por encuesta no se podrán incluir como parte de la definición del precio y por lo tanto, no podrán incluirse o promediarse con los valores encontrados en el mercado. Esta prohibición se aplica tanto a las valoraciones puntuales como a las técnicas masivas de valoración.

***Parágrafo.** En el caso que el avalúo se soporte únicamente en encuestas, el perito deberá dejar constancia bajo gravedad de juramento, escrita en el informe que la utilización de esta modalidad se debe a que en el momento de la realización del avalúo no existían ofertas de venta, arriendo, ni transacciones de bienes comparables al del objeto de estimación.*

La suscrita defensora de oficio del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, en aras de advertir que la DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, en fallo fiscal N° 004 del 20 de junio de 2024, el cual **RESOLVIÓ FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL** de conformidad con el artículo 53 de la ley 610 de 2000 por cuantía de CIENTO SETENTA Y DOS MIL MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$ 172.510.957) dentro del proceso de responsabilidad fiscal de única instancia N° 1148, como lo manifiesta en la parte motiva del presente fallo:

Teniendo en cuenta que el avalúo presentado por el perito evaluador del bien inmueble identificado con Matricula Inmobiliaria No. 420-109661, se realizó el día 10 de mayo de 2012, su vigencia se establecía hasta el día 10 de mayo de 2013. Al presentarse la compra el día 26 de diciembre de 2013, es evidente para este

Despacho, que la compra se realizó sin el avalúo comercial vigente solicitado por el señor Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; lo que constituye flagrante violación de la normatividad mencionada. Así mismo se precisa por parte de este Despacho que al estar el avalúo comercial indexado realizado a diciembre de 2013, por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC., vigente para la fecha de la compra, se constituye en el referente que conduce a confirmar que ciertamente se presentó detrimento patrimonial al municipio de El Paujil, Caquetá; como bien se dijo ya, en la diferencia existente entre el valor de la compra y el valor comercial determinado por el IGAC., esto la cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINEINTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.

Una vez valorado el material probatorio obrantes en el expediente y los argumentos de defensa presentados por la defensa del investigado; este Despacho advierte la existencia de detrimento patrimonial endilgado en la Conclusión de la Denuncia D-003-16. Toda vez que se evidencia el incumplimiento de la normatividad vigente para la compra de los bienes por parte del estado, al momento de realizar la compra el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, hecho generador que da origen al detrimento patrimonial endilgado al investigado por parte de este despacho, toda vez que al momento de la compra del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N° 420-109661, se realizó sin avalúo comercial vigente, lo que equivale a decir que no se tenía avalúo comercial por parte del municipio de el pajuil para realizar la compra, y por tanto no podría realizarla.

En consecuencia, este Despacho procederá a endilgar responsabilidad fiscal al implicado JOSÉ RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, en calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá para la época de los hechos, por la compra del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 420-109661, incumpléndose así la normatividad vigente para la fecha de la compra del inmueble, toda vez que no acreditó avalúo comercial vigente para dicha transacción comercial, incumpliendo así las funciones administrativas encomendadas en su respectivo cargo para la época de los hechos, por tanto se configura el hecho generador del detrimento patrimonial en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.

Finalmente se precisa detrimento al patrimonio en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE... tal como se dispuso en el Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 febrero de 2024, con base en la violación de la normatividad vigente al momento de la compra del bien inmueble.

Ahora bien, de acuerdo con los medios de prueba documentales y testimoniales allegados a este proceso se puede determinar la existencia de responsabilidad de carácter fiscal por el detrimento originado al Municipio de El Pajuil, Caquetá; por concepto de la compra del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria

602

No. 420-109661, en cabeza del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, en calidad de Alcalde del Municipio del Paujil, Caquetá; tal como se desprende de la certificación laboral (folio 106), en la cual se manifiesta que para la época de los hechos el investigado se desempeñaba como Alcalde del municipio de El Paujil, Caquetá.

Incurrió en un error al imputar responsabilidad con forme a la vigencia del avalúo practicado el día 10 de mayo de 2012 y no como se había planteado en el **AUTO N° 001** de IMPUTACIÓN MIXTA DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO N° 1148, el cual advierte un sobre costo y que el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT incumplió con las funciones en su calidad de alcalde del municipio de el Paujil, toda vez que era la persona encargada de hacer el respectivo avalúo comercial del bien inmueble objeto de a compra por parte de la entidad territorial y dentro de sus funciones establecidas en el artículo 315 de la constitución política de Colombia numeral 9.

iii. CONSIDERACIONES Y ARGUMENTOS

PRIMERO: Con relación al **DEBIDO PROCESO**, consagrado en el artículo 29 constitucional el cual hace extensiva su aplicación a toda clase de actuación administrativa y tiene por objeto la correcta producción de los actos administrativos, a colación en sentencia C- 341 de 2014:

5.3. EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.

5.3.1. El debido proceso como derecho fundamental, se encuentra consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, y como primer elemento cabe resaltar su aplicación no solo para los juicios y procedimientos judiciales, sino también para todas las actuaciones administrativas, cuando establece que: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas". La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la extensión del debido proceso a las actuaciones administrativas, tiene por objeto garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y extiende su cobertura al ejercicio de la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, cobijando todas sus manifestaciones, "en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses"

5.3.2. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus

derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso:

(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y,

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

SEGUNDO: En analogía a la nulidad del fallo con relación al artículo 36 de la ley 610 de 2000, esta suscrita advierte una presunta nulidad, la cual estará argumentada en el acápite siguiente.

V. INCONGRUENCIA DEL FALLO FISCAL N° 004

En el presente documento se analiza una significativa incongruencia identificada en el fallo de responsabilidad fiscal emitido por la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL dictado el día 20 de junio de 2024. El tribunal, al resolver este caso, concluyó que el funcionario era responsable de un daño patrimonial a la entidad pública derivado de la presunta malversación de fondos destinados a la compra de un bien para objeto de interés social. Sin embargo, al revisar detenidamente el contenido del fallo, se evidencian

inconsistencias cruciales entre los hechos probados, las pruebas presentadas y las conclusiones alcanzadas por el tribunal. —

La incongruencia principal radica en la falta de correlación entre lo imputado en el AUTO N° 001DE IMPUTACIÓN MIXTA durante el proceso y la conclusión del FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL N° 004. Específicamente, el fallo se basó en un informe de AVALUÓ PREDIAL emitido por el INSTITUTO GEOGRÁFICO DE AGUSTÍN CODAZZI que señalaba el valor del predio para la fecha de la compra que de conformidad con el contrato fue para el día 26 de diciembre de 2013. Este análisis se enfoca en desglosar la incongruencia identificada, evaluando como ésta afecta la validez del fallo y las implicaciones legales de las mismas. La identificación y corrección de estas incongruencias es esencial para garantizar la justicia y la transparencia en el proceso de responsabilidad fiscal, así como para proteger los derechos de mi prohiado el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT.

PRIMERO: Con base en lo planteado, esta suscrita advierte que se esta desconociendo el derecho a la defensa con relación al fallo CON RESPONSABILIDAD FISCAL N° 004. que alude aceptación de haber imputado erróneamente por norma derogada, misma por la cual, en la etapa procesal oportuna se planteo la defensa y frente a esa imputación se argumentó, sin embargo, la decisión adoptada por el ente acusador radica en un nuevo hecho como lo es la vigencia del primer avalúo para el momento de la compra.

SEGUNDO: En virtud del fallo CON RESPONSABILIDAD FISCAL N° 004 el cual advierte que la decisión la tomaba con base en la vigencia del primer avalúo ejecutado por el profesional FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO realizado el día 10 de mayo de 2012, hecho que no fue objeto de controversia en el AUTO N° 001DE IMPUTACIÓN MIXTA

TERCERO: Con relación al hecho por el cual en ente acusador CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL falla desfavorable en contra de mi defendido, a quien le violenta el derecho a la defensa, con el ánimo de sorprender y dejar sin argumentos esta defensa.

CUARTO: Pues al haber un nuevo hecho generador de una conducta dolosa o culposa que sorprende esta defensa, ésta suscrita advierte una nulidad de pleno derecho, considerando que hay una violación al debido proceso, conforme a la constitución y las leyes preexistentes. → se concede recurso.

El análisis detallado del fallo de responsabilidad fiscal en el caso en concreto ha revelado importantes incongruencias que afectan la validez y legitimidad de la decisión emitida. Principalmente, se ha identificado una discrepancia significativa entre el peritaje inicial y las conclusiones alcanzadas por el ente acusador mismo que mediante prueba testimonial practicada el día 29 de abril de 2024 quien rinde testimonio bajo la gravedad de juramento el señor FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO quien fue el responsable del avalúo de fecha 10 de mayo de 2012, quien corrobora la vigencia del informe pericial.

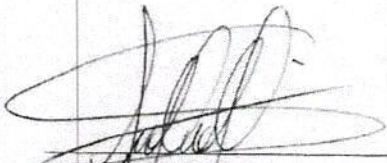
1

685

VI. PRETENSIONES

Se solicita la nulidad del fallo CON RESPONSABILIDAD FISCAL N° 004. En virtud del artículo 36 de la ley 610 de 2000

Para efectos de notificaciones la suscrita recibe al correo institucional luzm.moreno@udla.edu.co



LUZ MARINA MORENO SANABRIA

CC. 1117265965

TL 3153670235

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S Certifica que ha realizado por encargo de **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA** identificado(a) con NIT **891190246** el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id mensaje: 1499
Emisor: contraloriadelcaqueta@contraloriadelcaqueta.gov.co (no-reply@contraloriadelcaqueta.gov.co)
Destinatario: notificaciones@gha.com.co - GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
Asunto: NOTIFICACION DEL FALLO FISCAL DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148
Fecha envío: 2024-06-25 17:42
Estado actual: Lectura del mensaje

Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
Estampa de tiempo al envío de la notificación El mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste - Artículo 23 Ley 527 de 1999.	Fecha: 2024/06/25 Hora: 17:45:36	Tiempo de firmado: Jun 25 22:45:36 2024 GMT Política: 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.6.0.
Acuse de recibo Con la recepción del presente mensaje de datos en la bandeja de entrada del receptor, se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos legales de acuerdo con las normas aplicables vigentes, especialmente el Artículo 24 de la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.	Fecha: 2024/06/25 Hora: 17:45:38	Jun 25 17:45:38 cl-t205-282cl postfix/smtp[10567]: ABE3C12486C0: to=<notificaciones@gha.com.co>, relay=gha-com-co.mail.protection.outlook.com[52.101.8.44]:25, delay=1.5, delays=0.1/0.0.26/1.1, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 <36debefe85db7bd37c9d18215714dbbe9f5e e 7b906f84e62ae289aae355ab0f2@correocertificado-72.com.co> [InternalId=33840047347990, Hostname=CH3PR14MB7260.namprd14.prod.outlook.com] 27533 bytes in 0.207, 129.676 KB/sec Queued mail for delivery)
El destinatario abrió la notificación	Fecha: 2024/06/25 Hora: 17:49:39	Dirección IP: 190.130.97.251 Agente de usuario: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
Lectura del mensaje	Fecha: 2024/06/25 Hora: 17:49:53	Dirección IP: 190.130.97.251 Colombia - Antioquia - San Rafael Agente de usuario: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36


De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de ideas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así como sus archivos adjuntos en la fecha y hora indicadas anteriormente.

Importante: En el aparte Acuse de Recibo, en los casos en que aparece la frase "Queued mail for delivery" se debe a las características del servidor de correo electrónico Microsoft

687

✉ **Contenido del Mensaje**

 **Asunto: NOTIFICACION DEL FALLO FISCAL DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148**

 **Cuerpo del mensaje:**

Doctor

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

De conformidad con el poder allegado a este ente de control el día 24 de junio del 2024, para ejercer la defensa técnica de su poderdante la **COMPAÑIA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA**, comedidamente remito Fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso de responsabilidad fiscal N° 1148.

En la presente fecha se procede a notificar el Fallo con Responsabilidad del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148 del 20 de junio del 2024, en donde se procede al Auto a fallar de conformidad con lo establecido en los artículos 53 de la ley 610 de 2000.

Es preciso indicar que contra el presente Fallo para que los sujetos procesales, presente dentro de los Cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación del proceso procede el recurso de reposición .

Adjunto copia íntegra del Acto Administrativo en (152) Hojas

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

DAR CLIC EN EL SIGUIENTE LINK- DECARGA EL FALLO FISCAL N 1148

<https://drive.google.com/drive/folders/1P5F8Bmg1C584t78vOMl4WKy3qShX54sl?usp=sharing>




El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos

LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO


688

SECRETARIA

Correo: lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co

 Adjuntos

--

 Descargas

--

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 527 de 1999, la presente notificación electrónica como los documentos adjuntos a esta, son documentos íntegros, ya que es posible determinar que los mismos no han sido modificados ni alterados desde el momento en que fue enviado el mensaje de datos por parte del emisor del mensaje, por lo tanto dichos documentos tienen plena validez jurídica y probatoria.

www.4-72.com.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CONSTANCIA SECRETARIAL

Florencia, 28 de junio del 2024

Referencia: Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

Qué a última hora hábil de oficina del día 27 de junio del 2024, vencieron los términos con que disponía la estudiante de derecho **LUZ MARINA MORENO SANABRIA** Defensora de oficio del señor **RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURHT** para presentar Recurso de Reposición frente al Fallo Fiscal N° 004 del 20 de junio del 2024, presentación que hace en términos, del mencionado recurso.



LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO
Secretaria

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS
PUBLICOS**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL


CONSTANCIA SECRETARIAL

Florencia, 04 de julio del 2024

Referencia: Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

Que a última hora hábil de oficina del día 03 de julio del 2024, vencieron en silencio los términos con que disponía la compañía de seguros solidaria de Colombia, para interponer recurso de reposición contra el Fallo Fiscal N° 004 del 20 junio del 2024, notificado el día 25 de junio del 2024.

Pasa al despacho para lo de su competencia.



LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO
Secretaria

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS
PUBLICOS**

**Fwd: NULIDAD POR INDEBIDA DE NOTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.//PRF- 1148//ENTIDAD AFECTADA:
MUNICIPIO DE PAUJIL.**

Contraloria Caquetá <info@contraloriadelcaqueta.gov.co>

4 de julio de 2024, 16:25

Para: Hermes Torres Nuñez <contralor@contraloriadelcaqueta.gov.co>, Jorge Tadeo Oyola Prieto
<direccionresponfiscal@contraloriadelcaqueta.gov.co>, Liesel Joullieth Correa Forero
<lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: **Notificaciones GHA** <notificaciones@gha.com.co>

Date: jue, 4 jul 2024 a la(s) 4:12 p.m.

Subject: NULIDAD POR INDEBIDA DE NOTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA E.C.//PRF- 1148//ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE PAUJIL.

To: notificaciones@contraloriadelcaqueta.gov.co <notificaciones@contraloriadelcaqueta.gov.co>, Contraloria Caquetá
<info@contraloriadelcaqueta.gov.co>

Señores

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ.

info@contraloriadelcaqueta.gov.co

EXPEDIENTE: PRF- 1148.
ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE PAUJIL.
VINCULADOS: RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT Y OTROS
TERCEROS VINCULADOS: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.

ASUNTO: NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LA
COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, conforme al poder obrante en el expediente, de manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal correspondiente, procedo a presentar **INCIDENTE DE NULIDAD POR LA COMPROBADA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES SUSTANCIALES QUE AFECTAN EL DEBIDO PROCESO**, solicitando desde ya que se declare la nulidad de todo lo actuado hasta la notificación

del Auto de Imputación proferido en el proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148, conforme a los argumentos fácticos y jurídicos que se exponen.


Cordialmente,


GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
T.P.No.39.116 del C.S.J.

--
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA
El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos
Edificio de la Gobernación, Cra. 13 No. 15-00 Piso 4 Fax: 4352391 – 4353199 Cel: 3208859894
www.cdc.gov.co - Email: info@contraloriadelcaqueta.gov.co
Línea Transparente: 018000978515

3 adjuntos

 **INCIDENTE DE NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN SOLIDARIA1.pdf**
568K

 **PODER GHA PRF1148 (1).pdf**
376K

 **630-73-994000000032-0 (1).PDF**
1284K

Señores

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ.

info@contraloriadelcaqueta.gov.co

EXPEDIENTE: PRF- 1148.
ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE PAUJIL.
VINCULADOS: RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT Y OTROS
TERCEROS VINCULADOS: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.

ASUNTO: NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA
COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, conforme al poder obrante en el expediente, de manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal correspondiente, procedo a presentar **INCIDENTE DE NULIDAD POR LA COMPROBADA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES SUSTANCIALES QUE AFECTAN EL DEBIDO PROCESO**, solicitando desde ya que se declare la nulidad de todo lo actuado hasta la notificación del Auto de Imputación proferido en el proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148, conforme a los argumentos fácticos y jurídicos que se exponen a continuación:

**I. DE LA NULIDAD EN EL PROCESO POR FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LA
COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.**

A través de la promoción del presente incidente de nulidad se demostrará a la colegiatura la indebida notificación del tercero civilmente responsable respecto de las actuaciones promulgadas por la Contraloría Departamental del Caquetá al interior del proceso de responsabilidad fiscal No.1148. Es preciso indicar que, revisado el expediente del proceso de referencia, la **Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.** no fue notificada en debida forma de las actuaciones emitidas al interior del proceso de Responsabilidad Fiscal No.1148, en específico la notificación del Auto de Imputación Mixta No. 001, mediante el cual se procedió a imputar responsabilidad fiscal contra el señor Rodrigo Andrés Castro Betancourt por un monto de noventa y seis millones treinta y dos mil quinientos cuarenta y ocho pesos (\$96.032.548), y también en contra del tercero civilmente responsable. No obstante, a mi procurada no se le permitió presentar argumentos de defensa contra el auto de imputación, contradecir las pruebas y aportar las que considerara pertinentes, conducentes y útiles; en general, se desconoció posibilidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción debido a que el ente de control fiscal realizó una indebida notificación de las actuaciones procesales.

El legislador colombiano estableció en el artículo 36 de la Ley 610 de 2000 las causales de nulidad que pueden configurarse al interior del proceso de responsabilidad fiscal, así:

"ARTÍCULO 36. CAUSALES DE NULIDAD. Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar; la violación del derecho de defensa del implicado; o la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. La nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del proceso. "(Énfasis es nuestro)

Por su parte, el artículo 2º de la misma codificación establece que las actuaciones que se surtan en el desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal deberán ser adelantadas por los operadores fiscales con sujeción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, así:

"ARTICULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA ACCION FISCAL. En el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal se garantizará el debido proceso y su trámite se adelantará con sujeción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y a los contenidos en el Código Contencioso Administrativo." (Negrillas fuera de texto original).

Lo anterior adquiere relevancia si se tiene en cuenta que uno de los fines esenciales, medulares y connaturales de nuestro Estado de derecho es garantizar el debido proceso de los administrados en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, así:

"ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. (Negrilla adrede)

El derecho al debido proceso incorpora el derecho a la defensa, lo cual implica la facultad de ser escuchado en un proceso donde se decide sobre una controversia, en este caso la obligación del garante respecto de los presuntos hechos lesivos en el patrimonio público. Este derecho permite solicitar, aportar y controvertir pruebas, así como formular alegaciones e impugnar las decisiones adoptadas. No se trata solo de seguir mecánicamente las reglas del procedimiento, sino de asegurar un proceso justo, observando principios fundamentales como la publicidad, la inmediatez y la libre apreciación de la prueba. El derecho a la defensa debe estar garantizado a lo largo de todo el proceso, asegurando que todo sujeto procesal sea informado sobre la iniciación de cualquier proceso

en su contra, de acuerdo con el principio de publicidad.

Veamos ahora si las notificaciones realizadas por la Contraloría Departamental del Caquetá al interior del proceso de responsabilidad fiscal No.1148 se llevaron a cabo conforme a las exigencias normativas y los principios legales que establecen las directrices para tales procedimientos. El artículo 49 de la Ley 610 de 2000 establece que la notificación del auto de imputación de responsabilidad fiscal se notificará en la forma y términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo, así:

"ARTÍCULO 49. NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El auto de imputación de responsabilidad fiscal se notificará a los presuntos responsables o a sus apoderados si los tuvieren y a la compañía de seguros si la hubiere, en la forma y términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.
Si la providencia no se hubiere podido notificar personalmente a los implicados que no estén representados por apoderado, surtida la notificación por edicto se les designará apoderado de oficio, con quien se continuará el trámite del proceso. Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 43." (Negrilla adrede)

En virtud del precitado precepto normativo, la notificación personal debe surtir de conformidad con lo previsto en el artículo 67 del CPACA que establece: ley 610

"ARTÍCULO 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:

1. **Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera.**

Por su parte el artículo 68 de la misma decodificación establece las exigencias que debe reunir la citación para notificación personal, así:

"ARTÍCULO 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al

correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente (Negrilla adrede)

Finalmente, el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) dispone que la notificación por aviso se hará efectiva en caso de que, al finalizar los cinco (5) días siguientes al envío de la citación para que se surta la notificación personal, el notificado no comparezca. En tal caso, la notificación se realizará por medio de aviso, de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal." (Negrilla adrede)

Asimismo, los artículos 106 y 112 de la Ley 1474 de 2011, consagran lo relativo a las notificaciones en los procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten en su integridad bajo la ley 610 de 200, así:

"ARTÍCULO 106. Notificaciones. En los procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten en su integridad por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000 únicamente deberán notificarse personalmente las siguientes providencias: el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, el auto de imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instancia; para estas providencias se aplicará el sistema de notificación personal y por aviso previsto para las actuaciones administrativas en la Ley 1437 de 2011. Las demás decisiones que se profieran dentro del proceso serán notificadas por estado.

"ARTÍCULO 112. Citaciones y notificaciones. Cuando se deba notificar personalmente una decisión, o convocarse a la celebración de una audiencia se citará oportunamente a las partes, al garante, testigos, peritos y demás personas que deban intervenir en la actuación.

El presunto responsable y su apoderado si lo tuviere, o el defensor de oficio, y el garante en calidad de tercero civilmente responsable, tendrán la obligación procesal de señalar la dirección, el correo electrónico o cualquier otro medio idóneo de comunicación, en el cual se recibirán las citaciones. Igualmente tendrán el deber de informar cualquier cambio que se presente en el curso del proceso. Cuando se haga un cambio de dirección, el funcionario responsable deberá hacer en forma inmediata el respectivo registro, so pena de sanción de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario. La omisión a este deber implicará que sean legalmente válidas las comunicaciones que se envíen a la última dirección conocida.

La citación debe indicar la clase de diligencia para la cual se le requiere, el lugar, la fecha y hora en donde se llevará a cabo y el número de radicación de la actuación a la cual corresponde. (negrilla adrede)

Queda claro el marco normativo que regula lo concerniente a la notificación personal de los actos emitidos al interior del proceso de responsabilidad fiscal; descendamos al expediente del proceso de responsabilidad fiscal No. 1148 en aras de establecer el cumplimiento normativo de las notificaciones realizadas a mi procurada por el operador fiscal.

Adviértase que la Contraloría Departamental del Caquetá profirió Auto No.012 del 16 de mayo de 2024, "por medio del cual se decretó una nulidad parcial de oficio dentro del proceso de responsabilidad fiscal No.1418", nulidad que tuvo origen en que la compañía de seguros Aseguradora Solidaria de Colombia no fue notificado en debida foirma del Auto de Imputación No.001 de fecha de 26 de febrero de 2024.

Que estando el presente proceso en el Despacho de la Dirección Técnica de Responsabilidad fiscal, se evidencia por parte del Despacho que el Tercero Civilmente Responsable la compañía de seguros Solidaria de Colombia, no fue notificado en debida forma el Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024.

1

¹ Auto No.012 del 16 de mayo de 2024 por medio del cual se decretó una nulidad parcial de oficio dentro del proceso de responsabilidad fiscal No.1418

Nit. 891.190.246-1

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar de oficio la nulidad parcial dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 1148, respecto de la notificación del Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, correspondiente al Tercero Civilmente Responsable la compañía de seguros SOLIDARIA DE COLOMBIA identificada con NIT. No. 860.524.654-8, conforme con lo expuesto en la parte motiva del presente Auto, a fin de que se subsanen las actuaciones necesarias.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese por estado la presente providencia de conformidad a 106 establecido en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Cítese a la compañía de seguros SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con NIT 860.524.654-8, en calidad de Tercero Civilmente Responsable vinculado en el presente proceso, para ser notificada del Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024 y procédase de conformidad, al correo electrónico notificaciones@solidaria.com.co

ARTÍCULO CUARTO: Las pruebas y demás actuaciones allegadas y decretadas en el presente proceso legalmente, conservarán su plena validez.

2

Nótese como el operador fiscal declara de oficio la nulidad parcial dentro del proceso fiscal que nos ocupa, en razón a que mi procurada en calidad de tercero civilmente responsable no fue notificado el auto de imputación, y posteriormente se ordenó citar a la compañía de seguros a través del correo electrónico notificaciones@solidaria.com.co.

Acto seguido la Contraloría Departamental del Caquetá por intermedio de su secretaria emitió comunicado bajo el asunto de "Citación a Notificarse" y refiere que transcurridos cinco (5) días hábiles de la fecha de envío de la presente citación, se procederá a realizar la notificación por aviso, si para esa fecha no se ha podido surtir la notificación personal.


CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Nit. 891.190.246-1

PF-1037

Florencia, 20 de mayo del 2024

Señores:
SEGUNDOS SOLIDARIO DE COLOMBIA
Email: notificaciones@solidaria.com.co
Ciudad

ASUNTO: Citación a Notificarse
Auto de Imputación Mixta N° 001 del 26/02/2024
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148

Si se presentara a este despacho ubicado en la carrera 13 No. 15-00 piso 3° del Edificio de la Gobernación, en horario habilitado por la Contraloría Departamental del Caquetá de 8:00 a. m. a 12:00pm y de 2:00pm a 6:00pm, de lunes a jueves y de 7:00am a 3:00pm el día viernes, o en caso de no poder trasladarse puede enviar correo electrónico a info@contraloriadecaqueta.org.co Autorizando el Correo al cual desea que sea enviada la providencia con el objeto de notificarse del Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero del 2024 proferido por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal dentro del proceso expuesto en el asunto.

Transcurridos cinco (5) días hábiles de la fecha de envío de la presente citación, se procederá a realizar la notificación por aviso, si para esa fecha no se ha podido surtir la notificación personal.

Lo anterior cobra suma relevancia si se tiene en cuenta que la citación enviada a la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia tenía como finalidad que esta última compareciera ante el

² Auto No. 012 del 16 de mayo de 2024 por medio del cual se decretó una nulidad parcial de oficio dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 1418

despacho para procurar la notificación personal del Auto de Imputación, o en su defecto designara un apoderado de confianza que compareciera al proceso, o autorizara mediante correo electrónico la notificación personal a través del buzón electrónico dispuesto para tales efectos. Empero, de transcurrir los cinco (5) días hábiles sin que el tercero civilmente responsable compareciera a notificarse personalmente de la providencia; era necesario y además de obligatoriedad que la Contraloría Departamental del Caquetá procediera con la notificación por aviso de conformidad como lo estatuye el artículo 49 de la ley 610 de 2000 y el artículo 68 de la ley 1437 de 2011:

"ARTÍCULO 49. NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El auto de imputación de responsabilidad fiscal se notificará a los presuntos responsables o a sus apoderados si los tuvieren y a la compañía de seguros si la hubiere, en la forma y términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. Si la providencia no se hubiere podido notificar personalmente a los implicados que no estén representados por apoderado, surtida la notificación por edicto se les designará apoderado de oficio, con quien se continuará el trámite del proceso. Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en el artículo" (Negrilla adrede)

"ARTÍCULO 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente (Negrilla adrede)

ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si no pudiese hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. (Negrilla adrede)

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.

Bajo la perspectiva del debido proceso, no se evidencia al interior del legajo que conforma el proceso de responsabilidad fiscal la actuación que debía surtirte consecuentemente una vez finalizado el tiempo que otorga la ley para la comparecencia del garante de cara a surtirte la notificación personal, es decir adelantar la notificación por aviso del Auto de Imputación de responsabilidad fiscal No.001 del 26 de febrero de 2024, exigencia normativa que no fue satisfecha por el órgano de control degenerando con ella la vulneración del debido proceso de mi representada y la incursión de dos de las causales establecidas en el artículo 36 de la ley 610 de 2000, esto es, la violación del derecho de defensa del implicado; o la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Sin embargo, no sería aceptable que, de forma hipotética, el ente de control fiscal pretenda argumentar que al enviar la citación al correo electrónico notificaciones@solidaria.com.co se cumplió con la notificación personal del auto, ya que es de vital importancia no confundir el acto de citación para efectuar la notificación personal con la notificación personal efectiva. Estos son actos procesales distintos. Por lo tanto, era obligatorio que, ante la falta de respuesta o comparecencia de la compañía aseguradora, el operador fiscal procediera con la notificación por aviso para evitar cualquier violación de los derechos de los involucrados en el proceso fiscal.

Previendo las posibles objeciones del respetado despacho, tampoco es aceptable que se argumente que el 28 de mayo de 2024 se envió una nueva citación para que el tercero civilmente responsable compareciera al despacho a notificarse del auto de imputación. No puede interpretarse como una notificación por aviso consecuente, ya que, como consta en el expediente, dicha notificación no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. Este artículo establece que **el aviso debe indicar la fecha del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos legalmente procedentes, las autoridades ante las cuales deben interponerse, los plazos respectivos, y la advertencia de que la notificación se considerará efectuada al finalizar el día siguiente a la entrega del aviso en el lugar de destino,** siendo que tal comunicación no cumple con los requisitos de ley queda demostrado la indebida notificación de la Aseguradora Solidaria de Colombia al interior del proceso de responsabilidad fiscal No. 1148:

Resumen del mensaje	
Id mensaje:	1391
Emisor:	controladadecapen@contraloriadecauca.gov.co (no-reply@contraloriadecauca.gov.co)
Destinatario:	notificaciones@solidaria.com.co - COMPAÑIA DE SEGUROS SOLIDARIA DE COLOMBIA
Asunto:	NOTIFICACION DEL AUTO DE IMPUTACION MIXTA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148
Fecha envío:	2024-05-28 09:27

"Nótese que inclusive en el asunto no hace referencia a la notificación por aviso."

En concreto, se echa de menos que el ente de control fiscal procediera a realizar en debida forma la notificación por aviso. Esto incluye la constancia secretaria con la advertencia de que la notificación se considerará efectuada al finalizar el día siguiente a la entrega del aviso en el lugar de destino. No obstante, en el expediente se evidencia que tal constancia secretaria únicamente se hizo en relación con la citación para la notificación personal, la cual también se realizó indebidamente. La notificación por aviso, a modo ilustrativo, debió contener la constancia secretaria pertinente para ello de la siguiente manera:



"Ejemplo de constancia secretarial de notificación por aviso"

En definitiva, la Contraloría Departamental del Caquetá vulneró el debido proceso del garante, al no permitirle presentar descargos contra el auto de imputación, controvertir pruebas ni aportar las que consideraba conducentes y útiles para su defensa. Esto implica que no se le permitió ejercer el derecho de defensa que le asiste en calidad de tercero civilmente responsable, viciando así las actuaciones subsiguientes a la indebida notificación del Auto de Imputación. De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 610 de 2000, se deberá tramitar el incidente de nulidad, ya que no se ha proferido fallo definitivo, es decir, debidamente ejecutoriado.

I. PETICIONES

PRIMERO: Se declare la nulidad parcial dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 1148, respecto de la notificación del Auto de Imputación No. 001 fechado el 26 de febrero de 2024, y, por consiguiente, se le permita a mi representada, **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, ejercer su derecho de defensa, en observancia del artículo 50 de la Ley 610 de 2000.

SEGUNDO: Se establezca y se compute de nuevo el término de diez (10) días una vez la Contraloría Departamental del Caquetá resuelva la presente solicitud de nulidad y acredite que ha cumplido con su carga procesal respecto de notificar en debida forma al garante.

TERCERO: De manera subsidiaria, solicito que se aplique el control judicial integral, sustentado en el precepto normativo del artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, en lo atinente a la corrección de irregularidades en la actuación administrativa, en procura de que la notificación del auto de imputación se ajuste a derecho.

II. NOTIFICACIONES

Al suscrito en la Calle 69 No.4 – 48, Oficina 502 de la ciudad de Bogotá y en la dirección electrónica:
notificaciones@gha.com.co



GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. No.19.395.114 de Bogotá D.C.
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

Bogotá D.C., 18 de junio de 2024
ISG-01166 - PRF5910

Señores

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

E. S. D.

PROCESO:

RADICADO:

ENTIDAD AFECTADA:

TERCERO VINCULADO:

RESPONSABILIDAD FISCAL

1148

MUNICIPIO DE EL PAUJIL

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

JOSÉ IVÁN BONILLA PÉREZ, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.520.827 obrando como representante legal judicial de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, sociedad comercial legalmente constituida, identificada con NIT 860.524.654-6, domiciliada en Bogotá D.C., sometida al control y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera, tal como consta en el certificado anexo, por medio del presente confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente los intereses de la compañía dentro del proceso de la referencia.

El doctor **HERRERA ÁVILA**, queda investido con la facultad de notificarse, pronunciarse, contestar, interponer los recursos que fueren procedentes, solicitar pruebas, recibir, desistir, sustituir y reasumir el presente mandado, solicitar copias de las actuaciones surtidas y de cualquier pieza que obre en el expediente, y demás facultades necesarias para el cabal cumplimiento de los fines del presente mandato.

Atentamente,

JOSE IVAN

BONILLA PEREZ

JOSÉ IVÁN BONILLA PÉREZ

Representante Legal

C.C. No. 79.520.827

Firmado digitalmente por
JOSE IVAN BONILLA PEREZ

Fecha: 2024.06.18
11:56:48 -05'00'

Acepto,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C. C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C

T. P. No. 39.116 del C.S.J

notificaciones@gha.com.co

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6300084529

PÓLIZA No: 630 -73 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA				COD. AGE: 630				RAMO: 73				PAP:			
DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
29	11	2013		01	11	2013	23:59	01	03	2014	23:59	18	06	2024	
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				FECHA DE IMPRESIÓN			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL				A LAS				A LAS				DIAS			
TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION															

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION				VIGENCIA DEL ANEXO				DIA				MES				AÑO				HORAS				DIA				MES				AÑO				HORAS				DIAS			
				01				11				2013				23:59				01				03				2014				23:59				120							
				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS																											

NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL		IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0	
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL		CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ	
		TELÉFONO: 6084362480	

ASEGURADO: VER CERTIFICADOS POR ITEM		IDENTIFICACIÓN:	
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	
BENEFICIARIO: VER CERTIFICADOS POR ITEM		IDENTIFICACIÓN:	
		TELÉFONO:	

Ver Certificados por Item		DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS	
AMPAROS		SUMA ASEGURADA	% INVAR
MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL		100,000,000.00	
EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO		101,000,000.00	
SUSTRACCION CON VIOLENCIA		412,000,000.00	
ROTURA ACCIDENTAL DE VIDRIOS PLANOS		20,000,000.00	
ROTURA DE MAQUINARIA		60,000,000.00	
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO		2,432,000,000.00	
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE T		2,443,000,000.00	
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL		105,600,000.00	
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS		2,342,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		500,000,000.00	
			SUBLIMITE

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *3,083,126,027.39	VALOR PRIMA: \$ *****3,160,898	GASTOS EXPEDICION: \$ ****15,000.00	IVA: \$ *****508,144	TOTAL A PAGAR: \$ *****3,684,042
--	-----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
FEXVAN LTDA	1576	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)00000000007000630008452	FIRMA TOMADOR
------------------	---	---------------

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá	CLIENTE	AMONTES 0
--	---------	-----------

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor llame al 011 260 5246 en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6300084529

PÓLIZA No: 630 -73 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: **AGENCIA FLORENCIA** COD. AGE: 630 RAMO: 73 PAP:
DIA MES AÑO DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS DIAS
29 11 2013 VIGENCIA DE LA PÓLIZA **01 11 2013** **23:59** **01 03 2014** **23:59** **120** **18 06 2024**
FECHA DE EXPEDICIÓN VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS DIAS
MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: **REIMPRESION**

TIPO DE MOVIMIENTO **EXPEDICION** VIGENCIA DEL ANEXO **01 11 2013** **23:59** **01 03 2014** **23:59** **120**
VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS DIAS

DATOS DEL TOMADOR
NOMBRE: **MUNICIPIO DE EL PAUJIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.763-0**
DIRECCIÓN: **CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL** CIUDAD: **EL PAUJIL, CAQUETÁ** TELÉFONO: **6084362480**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: **MUNICIPIO DE EL PAUJIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.763-0**
DIRECCIÓN: **CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL** CIUDAD: **EL PAUJIL, CAQUETÁ** TELÉFONO: **6084362480**
BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE EL PAUJIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.763-0**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS
ITEM: 1 ASEGURADO: **MUNICIPIO DE EL PAUJIL** NIT : **800095763**
DEPARTAMENTO: **CAQUETÁ** CIUDAD: **EL PAUJIL** DIRECCION: **CARRERA 4 ENTRE CALLE 4 Y 5**
CASA DE LA CULTURA MANZANA: **5-4**
ACTIVIDAD: **CASA DE HABITACION NO RURAL**
TIPO EDIFICIO: **EDIFICIO (S)** TIPO DE RIESGO: **ESTATAL**
AMPARO OBJETO SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS
DEDUCIBLES: **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV**
EDIFICIO(S) 110,000,000.00 5.00
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL
EDIFICIO(S) 6,600,000.00
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO
DEDUCIBLES: **15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMLV**
EDIFICIO(S) 110,000,000.00 5.00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO
DEDUCIBLES: **3.00 % DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO (ITEM) AFECTADO - Mínimo: 3.00 SMLV**
EDIFICIO(S) 110,000,000.00 5.00

Texto Aclaratorio
BENEFICIARIOS
NIT 800095763 - MUNICIPIO DE EL PAUJIL
NIT 800095763 - MUNICIPIO DE EL PAUJIL

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****111,808,219.18	VALOR PRIMA: \$ *****61,489	GASTOS EXPEDICION: \$*****	IVA: \$ *****9,884	TOTAL A PAGAR: \$ *****71,373
--	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE FEYVAN LTDA	CLAVE 1576	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA FEYVAN LTDA
		%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)00000000007000630008452
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
AMONTES 0

C8DB20780F07F87B5D
CLIENTE
Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor, para en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Gran Contribuyente RES.2509 DIC/93 - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

705

POLIZA MULTIRRIESGO

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA

COD. AGENCIA: 630 RAMO: 73 No PÓLIZA: 994000000032 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

ASEGURADO: VER CERTIFICADOS POR ITEM

IDENTIFICACIÓN:

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT

TEXTO ITEM 1

NIT 800095763 - MUNICIPIO DE EL PAUJIL
NIT 800095763 - MUNICIPIO DE EL PAUJIL
NIT 800095763 - MUNICIPIO DE EL PAUJIL
NIT 800095763 - MUNICIPIO DE EL PAUJIL

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE PRORROGA LA POLIZA POR UN PERIODO DE CUATRO MESES, DANDO CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA POLIZA DE LA AGENCIA NEIVA No 994/499. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE

POLIZA MULTIRRIESGO

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6300084529

PÓLIZA No: 630 -73 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA COD. AGE: 630 RAMO: 73 PAP:
DIA MES AÑO DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS
29 11 2013 VIGENCIA DE LA PÓLIZA 01 11 2013 23:59 01 03 2014 23:59 120 18 06 2024
FECHA DE EXPEDICIÓN VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS DIAS
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION VIGENCIA DEL ANEXO DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS DIAS
01 11 2013 23:59 01 03 2014 23:59 120
VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS

DATOS DEL TOMADOR
NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ TELÉFONO: 6084362480

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ TELÉFONO: 6084362480
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS
ITEM: 2 ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT : 800095763
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ CIUDAD: EL PAUJIL DIRECCION: CALLE 5 CARRERA 3 ESQUINA -
CASA DE PLANTA ELECTRICA
ACTIVIDAD: BODEGAS, ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO MANZANA: 4-4
TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S) TIPO DE RIESGO: ESTATAL
AMPARO OBJETO SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV
EDIFICIO(S) 10,000,000.00 5.00
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL
EDIFICIO(S) 600,000.00
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO
DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMLV
EDIFICIO(S) 10,000,000.00 5.00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO
DEDUCIBLES: 3.00 % DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO (ITEM) AFECTADO - Mínimo: 3.00 SMLV
EDIFICIO(S) 10,000,000.00 5.00
Texto Aclaratorio
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SOLICITUD DEL MUNICIPIO, SE PRORROGA LA VIGENCIA POR DOS MESES MAS,

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****10,164,383.56 VALOR PRIMA: \$ *****5,590 GASTOS EXPEDICION: \$ ***** IVA: \$ *****899 TOTAL A PAGAR: \$ *****6,488

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO
NOMBRE CLAVE %PART NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO
FEXVAN LTDA 1576 100.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000630008452

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

AMONTES 0

C8DB20780F07F87B5D

CLIENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6300084529

PÓLIZA No: 630 -73 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA				COD. AGE: 630				RAMO: 73				PAP:			
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
29	11	2013		01	11	2013	23:59	01	03	2014	23:59	120	18	06	2024
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION			

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION				VIGENCIA DEL ANEXO				DIA MES AÑO HORAS				DIA MES AÑO HORAS DIAS			
				01 11 2013 23:59				01 03 2014 23:59				120			
				VIGENCIA DESDE A LAS				VIGENCIA HASTA A LAS							

NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL		IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0	
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL		CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ	
		TELÉFONO: 6084362480	

ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL		IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0	
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL		CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ	
		TELÉFONO: 6084362480	
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL		IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0	

ITEM: 3 ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL		NIT : 800095763	
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ		CIUDAD: EL PAUJIL	
DIRECCIÓN: CARRERA 5 NO. 9-10		COLISEO	
ACTIVIDAD: ESTADIO		MANZANA: 10-5	
TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S)		TIPO DE RIESGO: ESTATAL	
AMPARO		SUMA ASEGURADA % INVAR	
OBJETO		SUBLIMITE	
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS			
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV			
EDIFICIO(S)		150,000,000.00 5.00	
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL			
EDIFICIO(S)		9,000,000.00	
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO			
DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMLV			
EDIFICIO(S)		150,000,000.00 5.00	
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA, MAREMOTO			
DEDUCIBLES: 3.00 % DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO (ITEM) AFECTADO - Mínimo: 3.00 SMLV			
EDIFICIO(S)		150,000,000.00 5.00	

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***152,465,753.42	VALOR PRIMA: \$ *****83,848	GASTOS EXPEDICION: \$ *****	IVA: \$ *****13,479	TOTAL A PAGAR: \$ *****97,327
INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE FEXVAN LTDA	CLAVE 1576	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	%PART
		VALOR ASEGURADO		

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR		FIRMA TOMADOR	
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá		AMONTES 0	
C6DB20780F07F87B5D		CLIENTE	

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tener en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6300084529

PÓLIZA No: 630 -73 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA			COD. AGE: 630			RAMO: 73			PAP:					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
29	11	2013	01	11	2013	23:59	01	03	2014	23:59	120	18	06	2024
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION		

TIPO DE MOVIMIENTO	EXPEDICION	VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO
			01	11	2013	23:59	01	03	2014	23:59	120		
			VIGENCIA DESDE			A LAS			VIGENCIA HASTA			A LAS	

NOMBRE:	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	IDENTIFICACIÓN: NIT	800.095.763-0
DIRECCIÓN:	CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL	CIUDAD:	EL PAUJIL, CAQUETÁ
		TÉLEFONO:	6084362480

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	IDENTIFICACIÓN: NIT	800.095.763-0
DIRECCIÓN:	CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL	CIUDAD:	EL PAUJIL, CAQUETÁ
		TÉLEFONO:	6084362480
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	IDENTIFICACIÓN: NIT	800.095.763-0

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS		NIT : 800095763	
ITEM: 4 ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL			
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ	CIUDAD: EL PAUJIL	DIRECCION: CARRERA 4 ENTRE CALLE 3 Y 2	
GALERIA CENTRAL		MANZANA: 4-4	
ACTIVIDAD: PLAZAS DE MERCADO, O GALERIA			
TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S)	TIPO DE RIESGO: ESTATAL		
AMPARO	OBJETO	SUMA ASEGURADA	% INVAR
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS			SUBLIMITE
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV		620,000,000.00	5.00
EDIFICIO(S)			
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL		37,200,000.00	
EDIFICIO(S)			
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO			
DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMMLV		620,000,000.00	5.00
EDIFICIO(S)			
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO			
DEDUCIBLES: 3.00 % DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO (ITEM) AFECTADO - Mínimo: 3.00 SMMLV		620,000,000.00	5.00
EDIFICIO(S)			

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***630,191,780.82	\$ *****346,571	\$ *****	\$ *****55,712	\$ *****402,284
INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART
FEXVAN LTDA	1576	100.00		
		VALOR ASEGURADO		

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000630008452

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

AMONTES 0

C8DB20780F07F87B5D

CLIENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6300084529

PÓLIZA No: 630 -73 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA COD. AGE: 630 RAMO: 73 PAP:
DIA MES AÑO DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS
29 11 2013 VIGENCIA DE LA PÓLIZA 01 11 2013 23:59 01 03 2014 23:59 120 18 06 2024
FECHA DE EXPEDICIÓN VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS DIAS
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION VIGENCIA DEL ANEXO 01 11 2013 23:59 01 03 2014 23:59 120
VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS DIAS

DATOS DEL TOMADOR
NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ TELÉFONO: 6084362480

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ TELÉFONO: 6084362480
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS
ITEM: 5 ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT : 800095763
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ CIUDAD: EL PAUJIL DIRECCION: CARRERA 5 SALIDA AL DONCELLO
- PLATA DE BENEFICIO
ACTIVIDAD: MATADEROS, FRIGORIFICO MANZANA: 1-5
TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S) TIPO DE RIESGO: ESTATAL
AMPARO OBJETO SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
EDIFICIO(S) 90,000,000.00 5.00
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL
EDIFICIO(S) 5,400,000.00
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO
DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMMLV
EDIFICIO(S) 90,000,000.00 5.00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO
DEDUCIBLES: 3.00 % DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO (ITEM) AFECTADO - Mínimo: 3.00 SMMLV
EDIFICIO(S) 90,000,000.00 5.00

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****91,479,452.05 VALOR PRIMA: \$ *****50,309 GASTOS EXPEDICION: \$ ***** IVA: \$ *****8,087 TOTAL A PAGAR: \$ *****58,396

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO
NOMBRE CLAVE %PART NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO
FEXVAN LTDA 1576 100.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)00000000007000630008452
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá AMONTES 0
C8DB20780F07F87B5D CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tener en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VISTILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6300084529

PÓLIZA No: 630 -73 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA			COD. AGE: 630			RAMO: 73			PAP:					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
29	11	2013	01	11	2013	23:59	01	03	2014	23:59	120	18	06	2024
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION		

TIPO DE MOVIMIENTO	EXPEDICION	VIGENCIA DEL ANEXO	01	11	2013	23:59	01	03	2014	23:59	120
		VIGENCIA DESDE		A LAS		VIGENCIA HASTA		A LAS		DÍAS	

NOMBRE:	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	IDENTIFICACIÓN: NIT	800.095.763-0
DIRECCIÓN:	CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL	CIUDAD:	EL PAUJIL, CAQUETÁ
		TELÉFONO:	6084362480

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	IDENTIFICACIÓN: NIT	800.095.763-0
DIRECCIÓN:	CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL	CIUDAD:	EL PAUJIL, CAQUETÁ
		TELÉFONO:	6084362480
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	IDENTIFICACIÓN: NIT	800.095.763-0

ITEM: 6 ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL		NIT : 800095763	
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ	CIUDAD: EL PAUJIL	DIRECCION: CARRERA 4 NO. 4-49 CARCEL	
MUNICIPAL			
ACTIVIDAD: CASA DE HABITACION NO RURAL		MANZANA: 4-4	
TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S)	TIPO DE RIESGO: ESTATAL		
AMPARO	OBJETO	SUMA ASEGURADA	% INVAR
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS			SUBLIMITE
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV		80,000,000.00	5.00
EDIFICIO(S)			
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL		4,800,000.00	
EDIFICIO(S)			
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO		80,000,000.00	5.00
DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMMLV			
EDIFICIO(S)			
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO		80,000,000.00	5.00
DEDUCIBLES: 3.00 % DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO (ITEM) AFECTADO - Mínimo: 3.00 SMMLV			
EDIFICIO(S)			

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ****81,315,068.49	\$ *****81,896	\$ *****	\$ *****13,165	\$ *****95,061

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
FEXVAN LTDA	1576	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)00000000007000630008452	FIRMA TOMADOR
------------------	---	---------------

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C8DB20780F07F87B5D CLIENTE AMONTES 0

POLIZA MULTIRRIESGO



NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6300084529

PÓLIZA No: 630 -73 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA				COD. AGE: 630				RAMO: 73				PAP:			
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
29	11	2013		01	11	2013	23:59	01	03	2014	23:59	18	06	2024	
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DE LA PÓLIZA				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA			
				A LAS				A LAS				DÍAS			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												FECHA DE IMPRESIÓN			
												TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION			

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION				VIGENCIA DEL ANEXO				DIA				MES				AÑO				HORAS				DÍAS															
				01				11				2013				23:59				01				03				2014				23:59				120			
				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS																							

NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL		IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0	
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL		CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ	
		TELÉFONO: 6084362480	

ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL		IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0	
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL		CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ	
		TELÉFONO: 6084362480	
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL		IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0	

ITEM: 7 ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL		NIT : 800095763	
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ		CIUDAD: EL PAUJIL	
ACTIVIDAD: CASA DE HABITACION NO RURAL		DIRECCION: CALLE 5 CARRERA 5 ESQUINA	
TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S)		MANZANA: 4-6	
TIPO DE RIESGO: ESTATAL			
AMPARO	OBJETO	SUMA ASEGURADA	% INVAR
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS			
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV			
EDIFICIO(S)		700,000,000.00	5.00
MEJORAS LOCATIVAS		100,000,000.00	5.00
MUEBLES Y ENSERES		350,000,000.00	5.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		60,000,000.00	5.00
DINERO EN EFECTIVO Y TITULOS VALORES		2,000,000.00	
TERRENO		50,000,000.00	5.00
VIDRIOS		20,000,000.00	5.00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV			
PATRIMONIO DEL ASEGURADO		500,000,000.00	
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL			
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV			
EDIFICIO(S)		42,000,000.00	
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO			

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *2,005,701,369.87	VALOR PRIMA: \$ *****2,531,196	GASTOS EXPEDICION: \$ *****	IVA: \$ *****406,895	TOTAL A PAGAR: \$ *****2,938,091
--	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
FEXVAN LTDA	1576	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	(415)770186100019(8020)00000000007000630008452	FIRMA TOMADOR
------------------	--	---------------

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá	CLIENTE	AMONTES 0
--	---------	-----------

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tener en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Comisión de San José

POLIZA MULTIRRIESGO

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA

COD. AGENCIA: 630

RAMO: 73

No PÓLIZA: 994000000032 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

ITEM 7 - (continuación ...)

DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMMLV

EDIFICIO(S)	700,000,000.00	5.00
MEJORAS LOCATIVAS	100,000,000.00	5.00
MUEBLES Y ENSERES	350,000,000.00	5.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000,000.00	5.00
DINERO EN EFECTIVO Y TITULOS VALORES	2,000,000.00	
TERRENO	50,000,000.00	5.00
VIDRIOS	20,000,000.00	5.00
EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	90,000,000.00	5.00
EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES	11,000,000.00	5.00

TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO

DEDUCIBLES: 3.00 % DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO (ITEM) AFECTADO - Mínimo: 3.00 SMMLV

EDIFICIO(S)	700,000,000.00	5.00
MEJORAS LOCATIVAS	100,000,000.00	5.00
MUEBLES Y ENSERES	350,000,000.00	5.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000,000.00	5.00
DINERO EN EFECTIVO Y TITULOS VALORES	2,000,000.00	
TERRENO	50,000,000.00	5.00
VIDRIOS	20,000,000.00	5.00
EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	90,000,000.00	5.00

ROTURA DE MAQUINARIA

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000,000.00	5.00
---------------------	---------------	------

ROTURA ACCIDENTAL DE VIDRIOS PLANOS

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMDLV

VIDRIOS Y UNIDADES FRAGILES	20,000,000.00	5.00
-----------------------------	---------------	------

SUSTRACCION CON VIOLENCIA

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

MUEBLES Y ENSERES	350,000,000.00	5.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000,000.00	5.00
DINERO EN EFECTIVO Y TITULOS VALORES	2,000,000.00	

EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	90,000,000.00	5.00
EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES	11,000,000.00	5.00

MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5.00 SMMLV

EMPLEADOS DE NOMINA	100,000,000.00	
---------------------	----------------	--

Relación de Bienes:

Objeto: MEJORAS LOCATIVAS / Ramo: INCENDIO

ADECUACIONES A LAS NORMAS DE SISMORESISTENCIA

\$ 100,000,000.00

Objeto: MUEBLES Y ENSERES / Ramo: INCENDIO

MUEBLES Y ENSERES

\$ 150,000,000.00

BINES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL

\$ 200,000,000.00

CLIENTE

213

POLIZA MULTIRRIESGO

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA

COD. AGENCIA: 630

RAMO: 73

No PÓLIZA: 994000000032 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

RIESGO 7 - (continuación ...)

Objeto: MEJORAS LOCATIVAS / Ramo: AMIT
ADECUACIONES A LAS NORMAS DE SISMORESISTENCIA

\$ 100,000,000.00

Objeto: MUEBLES Y ENSERES / Ramo: AMIT
MUEBLES Y ENSERES

\$ 150,000,000.00

BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL

\$ 200,000,000.00

Objeto: MUEBLES Y ENSERES / Ramo: SUSTRACCIÓN
MUEBLES Y ENSERES

\$ 150,000,000.00

BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL

\$ 200,000,000.00

Objeto: MEJORAS LOCATIVAS / Ramo: TERREMOTO
ADECUACIONES A LAS NORMAS DE SISMORESISTENCIA

\$ 100,000,000.00

Objeto: MUEBLES Y ENSERES / Ramo: TERREMOTO
MUEBLES Y ENSERES

\$ 150,000,000.00

BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL

\$ 200,000,000.00

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA MULTIRRIESGO
DATOS DE LA PÓLIZA

774

No. POLIZA: 994000000032 ANEXO: 0 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 12
TOMADOR: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACION: 800.095.763-0

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. & NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	800095763-0	CARRERA 4 ENTRE CALLE 4 Y 5 C	EL PAUJIL	111,808,219.18	61,489	71,373
2	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	800095763-0	CALLE 5 CARRERA 3 ESQUINA - CA	EL PAUJIL	10,164,383.56	5,590	6,488
3	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	800095763-0	CARRERA 5 NO. 9-10 COLISEO D	EL PAUJIL	152,465,753.42	83,848	97,327
4	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	800095763-0	CARRERA 4 ENTRE CALLE 3 Y 2 GA	EL PAUJIL	630,191,780.82	346,571	402,284
5	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	800095763-0	CARRERA 5 SALIDA AL DONCELLO -	EL PAUJIL	91,479,452.05	50,309	58,396
6	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	800095763-0	CARRERA 4 NO. 4-49 CARCEL MUN	EL PAUJIL	81,315,068.49	81,896	95,061
7	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	800095763-0	CALLE 5 CARRERA 5 ESQUINA	EL PAUJIL	2,005,701,369.	2,531,196	2,938,090
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						3,160,898	3,669,019

275

Fwd: RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA DEL FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No.004 DEL 20 DE JUNIO DE 2024//PRF- 1148//ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE PAUJIL.

Contraloria Caquetá <info@contraloriadelcaqueta.gov.co>

4 de julio de 2024, 16:41

Para: Hermes Torres Nuñez <contralor@contraloriadelcaqueta.gov.co>, Jorge Tadeo Oyola Prieto <direccionresponfiscal@contraloriadelcaqueta.gov.co>, Liesel Joullieth Correa Forero <lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: **Notificaciones GHA** <notificaciones@gha.com.co>

Date: jue, 4 jul 2024 a la(s) 4:18 p.m.

Subject: RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA DEL FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No.004 DEL 20 DE JUNIO DE 2024//PRF- 1148//ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE PAUJIL.

To: notificaciones@contraloriadelcaqueta.gov.co <notificaciones@contraloriadelcaqueta.gov.co>, info@contraloriadelcaqueta.gov.co <info@contraloriadelcaqueta.gov.co>

Cc: cgr <cgr@contraloria.gov.co>

Señores

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ.

info@contraloriadelcaqueta.gov.co

EXPEDIENTE: PRF- 1148.

ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE PAUJIL.

VINCULADOS: RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT Y OTROS

TERCEROS VINCULADOS: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA DEL FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No.004 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, conforme a poder obrante en el expediente, de manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal correspondiente, procedo a presentar **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra del **FALLO CON**

RESPONSABILIDAD FISCAL No. 004 DEL 20 DE JUNIO DE 2024, por medio del cual se declaró como tercero civilmente responsable a mi poderdante, en virtud de la Póliza Multirriesgo No. 930-73-9940000000032, solicitando desde ya que se revoque el acto administrativo en cita y, en consecuencia, se absuelva a los presuntos responsables y a la aseguradora que represento, conforme a los argumentos fácticos y jurídicos.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
T.P.No.39.116 del C.S.J.

--
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA
El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos
Edificio de la Gobernación, Cra. 13 No. 15-00 Piso 4 Fax: 4352391 – 4353199 Cel: 3208859894
www.cdc.gov.co - Email: info@contraloriadelcaqueta.gov.co
Línea Transparente: 018000978515

3 adjuntos

-  **RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA DEL FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL SOLIDARIA2.pdf**
869K
-  **PODER GHA PRF1148 (1).pdf**
376K
-  **630-73-9940000000032-0 (1).PDF**
1284K

Señores

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ.

notificaciones@contraloriadelcaqueta.gov.co

EXPEDIENTE: PRF- 1148.
ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE PAUJIL.
VINCULADOS: RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT Y OTROS
TERCEROS VINCULADOS: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA DEL FALLO
CON RESPONSABILIDAD FISCAL No.004 DEL 20 DE JUNIO DE
2024.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, conforme a poder obrante en el expediente, de manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal correspondiente, procedo a presentar **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra del **FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 004 DEL 20 DE JUNIO DE 2024**, por medio del cual se declaró como tercero civilmente responsable a mi poderdante, en virtud de la Póliza Multirriesgo No. 930-73-9940000000032, solicitando desde ya que se revoque el acto administrativo en cita y, en consecuencia, se absuelva a los presuntos responsables y a la aseguradora que represento, conforme a los argumentos fácticos y jurídicos que se exponen a continuación:

I. OPORTUNIDAD

Considerando que se realizó la notificación personal del acto administrativo que determinó responsabilidad fiscal el 12 de enero de 2024, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 610 de 2000, frente al fallo con responsabilidad fiscal proceden los recursos de reposición, los cuales deben interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del fallo. En virtud de ello, el presente escrito se presenta dentro del plazo establecido.

II. CUESTIÓN PREVIA

Previo a la exposición de los motivos de disenso frente al fallo con responsabilidad fiscal No. 004, es menester mencionar que los reparos se presentarán sin perjuicio del incidente de nulidad que se ha promovido de manera coetánea al presente recurso de reposición. Esto en atención a que Aseguradora Solidaria de Colombia fue notificada indebidamente del auto de imputación No. 001

del 26 de febrero de 2024, lo cual se traduce en la vulneración del derecho de defensa y de contradicción que le asiste al garante en el proceso de responsabilidad fiscal No. 1148.

III. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 1148

Antes de exponer las razones que servirán de base de la revocación del fallo que declaró civilmente responsable a mi representada, es relevante recordar que el proceso de responsabilidad fiscal se originó en el memorando CF-066 del 05 de abril de 2016, por medio del cual la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral remite la denuncia D-003-16, relacionada con presuntas irregularidades relacionadas con el sobrecosto en la compra de un lote para los desplazados en el Municipio de El Paujil.

De acuerdo con el traslado de la denuncia D-003-16, se estableció que el Municipio de El Paujil suscribió el Contrato de Compraventa No. 001 del 26 de diciembre de 2013, con el señor Heriberto Arcila Puentes, en cuantía de Doscientos cuarenta millones de pesos (\$240.000.000) M/Cte., con el objeto de adquirir un predio con destino a la construcción del proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable del citado ente territorial, el cual fue adquirido presuntamente con sobrecosto en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

Mediante Auto No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal procedió a dar apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148, en contra de los señores: Rodrigo Andrés Castro Betancourt, identificado con cédula de ciudadanía No. 217.691.533 expedida en Florencia.

Dicho lo anterior, procedo a exponer y evidenciar las falencias presentes en el fallo con responsabilidad fiscal emitido contra mi representada. Estas razones fundamentan la necesidad de revocar el fallo proferido por la colegiatura.

IV. REPAROS CONCRETOS FRENTE A LA DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

1. EN EL PRESENTE PROCESO, OPERÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL.

Si bien el presente argumento no versa sobre una refutación a la exposición de fundamentos fácticos y jurídicos elaborados por el despacho de conocimiento, es menester indicar o señalar que dado el lapso transcurrido entre la fecha en que se profirió el Auto de Apertura y que no se ha dictado decisión o providencia en firme que declare la responsabilidad de este tipo, ha operado la prescripción de la responsabilidad fiscal.

La presente cuestión, se fundamenta, teniendo en cuenta el artículo 9 de la Ley 610 del 2000, que dicta:

"ARTÍCULO 9o. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto.

La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare.

El vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo no impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparación de la totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya sufrido la administración, a través de la acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la contraloría correspondiente o por la respectiva entidad pública." – Subrayado fuera del original

Por su parte la Corte Constitucional en Sentencia C-836 de 2013 estableció la existencia de un término de prescripción con miras a buscar impedir la parálisis de los organismos encargados de llevar a cabo el control fiscal, así:

"La previsión de un término de caducidad cumple el propósito inicial de permitir que las contralorías cuenten con tiempo suficiente para adelantar las actuaciones que les corresponden, ya que, conforme lo ha destacado esta Corporación, antes del auto de apertura, con el cual comienza el proceso de responsabilidad fiscal, tiene lugar una indagación preliminar que, "si bien puede contribuir a la precisión y determinación de los elementos necesarios a la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, formalmente no hace parte del mismo", a tal punto que tal indagación puede concluir en un auto de archivo, hipótesis en la que no existirá proceso de responsabilidad fiscal, pues "su presencia se anuncia solo a partir del auto de apertura", cuya fecha es "el extremo que marca la consolidación quinquenal de la caducidad de la acción fiscal"[21].

(...)

La existencia de un término de caducidad de la acción fiscal pretende, también, asegurar el actuar diligente de las contralorías, pues, pese a que esté involucrado el interés general, no pueden mantener indefinidamente las indagaciones o postergar sin límite temporal alguno la iniciación del proceso fiscal, porque, de lo contrario, "el sistema jurídico se vería abocado a un estado de permanente latencia en donde la incertidumbre

e imprecisión que rodearían el quehacer estatal, entorpecería el desarrollo de las funciones públicas"

(...)

Así pues, la limitación del plazo busca impedir la parálisis de los organismos encargados de llevar a cabo el control fiscal, pretende comprometerlos con el adecuado ejercicio de su actividad controladora y promueve su actuación eficaz, pero la previsión de ese término no solo incide en el ámbito competencial asignado a los órganos controladores, puesto que también tiene incidencia en la situación de los sujetos que eventualmente pudieran hallarse expuestos a enfrentar un proceso de responsabilidad fiscal." (Subrayas y negrilla fuera de texto original).

Descendiendo al caso concreto, es necesario establecer si en el presente caso se ha materializado el fenómeno prescriptivo de la responsabilidad fiscal. En primer lugar, se debe mencionar que dentro del proceso se emitió el Auto de apertura No. 025 el 18 de diciembre de 2018, correspondiente al proceso de responsabilidad fiscal No. 1148. Por lo tanto, se deduce que el plazo que tenía el organismo de control fiscal para dictar el fallo de responsabilidad fiscal venció el 18 de diciembre de 2023.

Mediante Auto No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal procedió a dar apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148 (folio 228 al 233 y reversos), en contra de los señores: RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH, identificado con cédula de ciudadanía No. 217.691.533 expedida en Florencia.

Página 1 de 152

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"

No obstante, es crucial tener en cuenta la suspensión de términos judiciales decretada en el proceso debido a la emergencia sanitaria que asoló a la humanidad en 2020. Dicha suspensión de términos se aplicó desde el 21 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, lo que implica que al término de prescripción de la responsabilidad fiscal deben sumarse los 3 meses y 12 días de dicha suspensión. Esto significa que el plazo que tenía la Contraloría Departamental del Caquetá finalizó el 30 de marzo de 2024. Sin embargo, el fallo con responsabilidad fiscal No. 004 fue emitido el 20 de junio de 2024, es decir, después de que la prescripción de la responsabilidad fiscal ya hubiera operado.

Conviene decir que el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal tiene fecha de emisión el 18 de diciembre del año 2018, y el fallo con responsabilidad fiscal emitido el 20 de junio de 2024 a la fecha no está en firme y debidamente ejecutoriado, lo que implica que el término de cinco (5) años para proferir fallo con responsabilidad fiscal, con el que contaba el operador fiscal, ya feneció sin que ello se llevara a cabo. Por consiguiente, nos hallamos en la materialización del fenómeno de la prescripción respecto del término perentorio e ineludible con el que cuenta el órgano fiscal para proferir su providencia.

En definitiva, solicito respetuosamente al despacho acogerse a los argumentos esbozados y proceder a declarar la prescripción, al arribar a la conclusión de que el proceso de marras debe ser archivado, puesto que, de lo contrario se configuraría una nulidad procesal por la comprobada existencia de irregularidades sustanciales.

2. EL FENÓMENO DE LA PRESCRIPCIÓN CONFIGURA FALTA DE COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO PARA FALLAR.

La consecuencia procesal de lo expuesto configura la falta de competencia del funcionario para fallar debido a los efectos provocados por la prescripción extintiva alegada respecto al procedimiento fiscal. Se observa que no es procedente que el funcionario a cargo del proceso haya emitido un fallo con responsabilidad fiscal cuando el plazo para hacerlo ya había expirado, considerando que la consecuencia lógico-procesal de la realización del fenómeno prescriptivo es la pérdida de competencia del funcionario para continuar con el curso normal del proceso fiscal. Puesto que al proferir un fallo con responsabilidad fiscal en inobservancia del término prefijado por el legislador para tal acto resulta en vicios de nulidad de los actos administrativos posteriores a la presentación del presente escrito solicitando la terminación y archivo de las diligencias. Esta situación, de materializarse, allanaría el camino para que las partes puedan recurrir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para proteger sus derechos mediante la acción de nulidad y restablecimiento contemplada en el artículo 138 del CPACA.

Así lo ha establecido la Sala Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado en Decisión del 28 de abril del 2021:

(2) Como se desprende de las normas transcritas, el control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal se ejerce sobre decisiones que son actos administrativos de contenido particular. Las personas condenadas en dichos actos, tienen derecho a impugnarlos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y a solicitar el restablecimiento de sus derechos y la reparación de los perjuicios, causados con los mismos. Tienen el derecho, al igual que todas las personas, a hacerlo mediante la acción de <nulidad y restablecimiento> prevista en el artículo 138 del CPACA; esta es una acción o medio de control contenido particular, de la cual son los titulares y cuyo desarrollo está reglado en las normas contenidas en la segunda parte del CPACA¹.

De esta manera, el funcionario de conocimiento deberá decidir sobre el fenómeno prescriptivo alegado, y de tenerse como factible sus efectos, consecuentemente tendrá por terminado y

¹ Consejo De Estado. Magistrado Ponente: Martín Bermúdez Muñoz. Fecha 8 De Abril De 2021 control Automático De Legalidad, Actor: Contraloría General De La República – Contraloría Delegada Para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial Y Cobro Coactivo, Demandado: Fallo Con Responsabilidad Fiscal. Radicado: 11001-03-15-000-2021-01175-00(A).

archivado el proceso de responsabilidad fiscal, sin que sea oponible la continuación anormal del proceso ante su evidente pérdida de competencia para fallar e incursión en vicio de nulidad.

3. INCONGRUENCIA ENTRE EL AUTO DE IMPUTACIÓN DE CARGOS Y EL FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

El fallo con responsabilidad fiscal proferido por la Contraloría Departamental del Caquetá deberá ser revocado en su integridad, ello en razón de que el operador fiscal inobservó la congruencia que debe contener el núcleo fáctico y normativo de la imputación de responsabilidad fiscal con el fallo que ponga fin al proceso de responsabilidad fiscal, puesto que el derecho de defensa debe contemplarse y salvaguardarse frente a los investigados y terceros civilmente responsables. Circunstancia que, para el proceso que nos ocupa, no se cumplió, ya que el operador fiscal, con ostensible desvío del sendero fáctico y normativo trazado en el auto de imputación No.001, profiere un fallo con responsabilidad fiscal en sujeción de enunciados fácticos y normativos que no fueron incorporados al auto de imputación de cargos, de manera que tal conducta, a todas luces inconsulta e improcedente, degeneró en la afectación del derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales, ya que estos no tuvieron la oportunidad de presentar alegaciones y pruebas respecto de las nuevas consideraciones del operador fiscal, quien en su fallo decidió modificar el núcleo fáctico de la controversia prefijada previamente en el auto de imputación.

El artículo 48 de la ley 610 de 2000 estatuye los presupuestos que deberán ser incorporados al auto de imputación, así:

"ARTÍCULO 48. AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El funcionario competente proferirá auto de imputación de responsabilidad fiscal cuando esté demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados.

El auto de imputación deberá contener:

1. La identificación plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la compañía aseguradora, del número de póliza y del valor asegurado.
2. La indicación y valoración de las pruebas practicadas.
3. La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinación de la cuantía del daño al patrimonio del Estado."

Sobre los elementos estructurales del auto de imputación, nótese que el auto de imputación mixto No. 001, fechado el 26 de febrero de 2024, estableció que la supuesta conducta lesiva del patrimonio gravita en torno al contrato de compraventa de la extensión de predio adquirido por el municipio de El Paujil, representando un supuesto sobre costo de \$96.032.548. Conducta que se le

endilga a quien regentaba la administración del municipio en el año 2017, ante una presunta inobservancia de la Ley 9 de 1989, en concreto, por no haber solicitado el avalúo comercial del bien adquirido mediante el título traslativo de dominio de compraventa ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Además, se le imputaron cargos por no haber demostrado que el evaluador del bien inmueble, el señor Fernando Gustavo Martínez, ostentara la calidad de perito evaluador, y también por solicitar un avalúo comercial privado y no acudir a un evaluador comercial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Empero, el operador fiscal, al momento de proferir el fallo con responsabilidad, incurre en serias contradicciones en la motivación de su acto. Iniciemos con lo relacionado con la comparación de los avalúos comerciales, ya que concluye la imposibilidad de comparar el aspecto metodológico de avalúos de fechas diferentes, indicando además que ambas son correctas y determinadas por la normatividad vigente. No obstante, más adelante concluye que el avalúo del IGAC ostenta una mayor rigurosidad en la recolección de información, y luego procede a emitir un juicio de valor fundamentado en un "viejo aforismo" relacionado con que el que vende siempre considera barata su venta realizada, desvirtuando de tajo la versión libre del tratante en el negocio jurídico.

Como se precisó los dos (2) métodos para avaluar tanto directa como indirectamente son aceptado por la normatividad vigente al momento de la realización de los avalúos, del cual ya precisó este Despacho que se observa una mayor rigurosidad en el recaudo de información para determinar el valor comercial del bien objeto de estudio por parte del avalúo realizado por el IGAC., respecto de lo mencionado por el vendedor del predio que consideró en la versión libre y espontánea rendida, que la venta fue muy barata, aplica el viejo aforismo que establece que quien vende siempre considera barato la venta realizada, por cuanto quien lo hace siempre aspira a mucho más, apreciación que pierde valor, toda vez que el vendedor estaba sujeto a lo determinado por el avalúo comercial que se determinara en su momento.

Obsérvese cómo la rigurosidad en la recolección de datos que enarbola el operador fiscal respecto del avalúo del IGAC se fundamenta en que la recopilación de datos y la comparación para determinar el valor del terreno fueron realizadas a través de internet.

INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

INVESTIGACIÓN INDIRECTA:

Método de Comparación o de Mercado. Se utilizó este método para determinar el valor del terreno y se analizó la información de ofertas obtenidas en el sector y por internet de la siguiente manera:

En los antecedentes de avalúos del año 2012 se encontraron avalúos comerciales de predios ubicados en el municipio de El Paují, se evidenció que para predios ubicados en la zona montañosa rural y a distancias mayores de más de siete kilómetros los valores de terreno oscilan entre \$800.000 y 2.500.000, dependen principalmente de la distancia a la zona urbana y de clase agrológica.

Luego, el despacho promulga que, si bien el avalúo del IGAC se realizó de manera indirecta, bajo su sindicación, debe dársele más valor que al realizado por el evaluador privado.

Con lo cual se observa por parte de este Despacho, que si bien el avalúo realizado por el IGAC, se realizó de manera indirecta, se evidencia mucha más rigurosidad en la recolección de datos de información que fueron plasmados en el estudio para determinar el precio del bien objeto del inmueble, sin dejar de menospreciar que por tratarse de un avalúo de tipo institucional podría estar desprovisto de cualquier interés en la determinación del precio. Es conveniente de igual manera precisar que de

Si

Seguidamente el despacho insiste en que ambos avalúos son técnicamente aceptados por la ley, empero, inserta un cargo de imputación el cual no había sido incorporado en el auto de imputación No.001 del 26 de febrero de 2024, esbozando que el avalúo realizado por el perito evaluador que dio origen a la compra de la extensión del predio no se encontraba vigente al momento de solemnizarse el negocio jurídico y por ello tal avalúo no podía tenerse en cuenta para fijar el precio del inmueble. Debe acotarse que tal enunciado factico no fue endilgado al investigado en etapa de imputación de cargos lo que representa una vulneración al debido proceso.

→ no es right
Induct Price

Se precisó por parte del perito evaluador concomitante con lo establecido en la norma, que ambos avalúos son técnicamente aceptados por la Ley. Sin embargo se reitera que el avalúo realizado por el perito evaluador que dio origen a la compra del bien inmueble, al momento de materializarse y cristalizarse la compra, el avalúo había perdido vigencia, por superar el año de haber sido realizado. De igual manera causa extrañeza a este Despacho que la autorización por parte del Concejo Municipal de El Paujil, Caquetá; se concediera mediante Acuerdo Municipal No. 011 de fecha 22 de junio de 2012 (folio 6 al 7), y el avalúo se realizó el día 10 de mayo de 2012, es decir un (1) mes y diez (10) antes de haber sido autorizado el señor Alcalde para realizar la compra. ¿Cómo inició acciones tendientes a la compra del terreno, cuando aun cuando no estaba facultado para ello?

Finalmente, la Contraloría Departamental del Caquetá menciona las propias falencias que fueron incorporadas en el auto de imputación y que pretendió corregir en el acto definitivo que pone fin al proceso de única instancia, vulnerando con su actuar el debido proceso de los investigados y, por descontado, del tercero civilmente responsable, así:

no

Argumento que también ha aceptado este Despacho, en el entendido que en el Auto de Imputación No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, no se dejó claro por parte de este Despacho, que no es que el perito no fuera idóneo, sino que el avalúo había perdido vigencia, toda vez que el mismo se realizó el día 10 de mayo de 2012, y la compra real se realizó el día 28 de diciembre de 2013, postura que entra a ser corregida por este Despacho.

Corrección prob.

720

Respecto al debido proceso, la defensa no puede manifestar que el mismo se ha violado, siempre se han dado todas la garantías procesales para que el investigado pueda tener acceso a su defensa, lo cual se ha realizado por parte de la defensoría de oficio, por cuanto el mismo se ha rehusado a comparecer al proceso y sin embargo ha sido notificado y comunicado de todas y cada una de las decisiones adoptada por este Despacho, tampoco puede la defensa manifestar que se ha violado el debido proceso, toda vez que este Despacho se caracteriza con brindar plenas garantías tanto al investigado como a la defensa, a quien también se han notificado y comunicado todas y cada una de las decisiones administrativas que en desarrollo del proceso se han tomado. Se precisa que en el devanir de la investigación se han reconocido a la defensa argumentos jurídicos pasados por alto por este Despacho, pero también se deja de presente que en la presente investigación en sus diferentes etapa, afloran conceptos jurídicos y testimonial que hacen necesario por parte de este Despacho modificar su postura inicial, pero siempre conservando que con apego a la Ley, el investigado infringió la normatividad vigente al momento de comprar el bien inmueble y por tanto su gestión fiscal continua siendo generadora de detrimento patrimonial para el Municipio de El Paujil, Caquetá.

De lo anterior es plausible interpretar que el acto de imputación es el hito en el cual el investigado tiene la oportunidad de saber de qué se le acusa, frente a qué se debe defender y cuál es el lindero que tiene la autoridad respecto de su facultad sancionatoria, por lo que quebrantar la congruencia entre la imputación y la sanción, es cercenar por completo el debido proceso y las garantías mínimas del administrado.

Fallo por eso se concede el recurso para su anulación.

El auto de imputación No. 001 de 26 de febrero de 2024, en el que se basó la acusación inicial, delineaba un conjunto específico de hechos y normas, sobre los cuales los acusados presentaron sus defensas. Sin embargo, la decisión final de la Contraloría se desvió sustancialmente de dicho marco, incorporando nuevas consideraciones fácticas y jurídicas que no fueron previamente notificadas a los imputados, lo cual infringe los artículos 48 y siguientes de la Ley 610 de 2000, que estipulan la necesidad de que los cargos y las pruebas sean claras y congruentes desde el inicio hasta el final del proceso. Esta práctica no solo es improcedente, sino que además atenta contra los principios de legalidad y justicia que deben guiar los procedimientos administrativos.

- prueba como q no?

no

En virtud de lo anterior, se hace imperativo que el fallo sea revocado en su integridad por la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso.

no bien hubiese sido impotente...

V. REPAROS CONCRETOS FRENTE A LA A LA DECLARATORIA DE TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE DE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.

1. EN EL PRESENTE CASO SE MATERIALIZÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO PORQUE SE CONFIGURÓ EL TERMINO EXTINTIVO.

El fallo con responsabilidad No.004 proferido por el despacho colegiado carece de motivación por cuanto el operador fiscal decidió declarar a mi procurada como tercero civilmente responsable sin realizar un minucioso análisis de la Póliza Multirriesgo No. 63073994000000032, aspecto de suma

importancia que debió ser tenido en cuenta por el operador fiscal previo a la vinculación de la compañía aseguradora e conformidad como lo exige el instructivo Circular No. 005 del 16 de marzo de 2020, expedido por la Contraloría General de la República, "**ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA VINCULACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS DENTRO DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL**", se destacan los siguientes:

"Es importante que, además de identificar la modalidad de cobertura, el operador fiscal verifique los demás elementos de la póliza, como su periodo de prescripción, de retroactividad, las exclusiones que establezca, sus amparos, deducible, valor y de ser posible determinar si la misma ya había sido afectada, lo cual puede afectar la suma asegurada."

Además de la importancia que representa el estudio del contrato de seguro vinculado al procedimiento fiscal, resulta imperioso manifestar que la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro se sujeta a lo establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio, el cual postula:

***"ARTÍCULO 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES>.** La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.*

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes."

El Consejo de Estado en postura reciente destaca que el artículo 1081 del Código de Comercio es aplicable en juicios de responsabilidad fiscal, así:

*(..) la Sección Primera del Consejo de Estado, atendiendo a que esta Sección, **de manera reiterada y pacífica ha señalado que en los juicios de responsabilidad fiscal debe tenerse en cuenta el artículo 1081 del Código de Comercio, en relación con la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen, el cual, es de dos años** contados desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento de la existencia del riesgo asegurado que da base a la acción de responsabilidad fiscal para evitar la extinción del derecho por el fenómeno de la prescripción"²*

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 68001 23 31 000 2004 00491 01;

Para lo cual, se ha señalado que el citado artículo resulta aplicable en los eventos de la vinculación al proceso de responsabilidad fiscal del garante como civilmente responsable, toda vez que dicha vinculación no es a título de acción por responsabilidad fiscal, sino por responsabilidad civil, esto es, por razones inherentes al objeto del contrato de seguros, derivado únicamente del contrato que se ha celebrado, que por lo demás es de derecho comercial, y no de gestión fiscal alguna o conducta lesiva del erario por parte del garante, de allí que la responsabilidad que se llegue a declarar es igualmente civil o contractual, y nunca fiscal.

166. En efecto, reiteró que debe tenerse en cuenta que uno es el término durante el cual se cubre el riesgo, que corresponde al período de duración del contrato de seguro, y otro el término dentro del cual es exigible el cumplimiento de la obligación de indemnizar mediante la acción del asegurado o beneficiario del seguro, determinando que el acto administrativo mediante el cual se declara el incumplimiento de una obligación garantizada mediante un contrato de seguro, debe expedirse, notificarse y quedar ejecutoriado dentro de los dos años siguientes a la fecha en que la administración tuvo conocimiento o razonablemente pudo tenerlo de la existencia del riesgo asegurado" (Subrayado propio para denotar importancia)

Furto de lo anterior, la Sala procede a dar aplicación de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro de la siguiente manera, veamos:

186. Según lo reseñado en precedencia, el término de dos (2) años previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio para que opere la prescripción ordinaria, empezó a correr para la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental del Quindío de la Contraloría General de la República, a partir de la fecha en que esta tuvo conocimiento de la ocurrencia de los hechos investigados, que en el presente caso aconteció el 20 de diciembre de 2006 cuando abrió formalmente la investigación fiscal en contra de los implicados.

187. En vista de que el fallo con responsabilidad fiscal núm. 000001 fue expedido el 7 de septiembre de 2011, resulta evidente que se expidió después de los dos años de que disponía el ente de control para hacerlo, el cual vencía el 20 de diciembre de 2008 por lo que, al estar vencido ese término, operó la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro en contra de la Contraloría, cuya póliza ordenó hacer efectivos el ente de control en el mencionado fallo.

188. Para la Sala, teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República, vinculó a la compañía aseguradora en calidad de tercero civilmente responsable afectando la póliza núm. 8001000118, como consecuencia de una acción derivada del contrato de seguro, resulta evidente que dicha decisión la adoptó por fuera del término legal en virtud de la ocurrencia de la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, de allí que la sentencia de primera instancia será revocada.

189. En esas circunstancias, es notoria la ocurrencia de la prescripción alegada por la parte demandante, lo cual implica revocar la decisión tomada en primera instancia que negó las pretensiones de la demanda³ (Subrayado propio para denotar importancia)

La jurisprudencia previamente citada señala que el término de dos años del artículo 1081 del Código de Comercio comienza a computarse a partir del momento en que la Contraloría ha debido tener conocimiento de la ocurrencia del siniestro asegurado. En ese sentido el reproche que emerge ante el ente de control fiscal se sujeta al hecho comprobado de que la Contraloría Departamental del Caquetá tuvo conocimiento del hecho lesivo del patrimonio el 05 de abril de 2016, por medio del cual la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, remite la denuncia D-003-16, relacionada con presuntas irregularidades relacionadas con el sobrecosto en la compra de un lote para los desplazados en el Municipio de El Paujil.

2. ANTECEDENTES

Originó la presente investigación el memorando CF- 066 del 05 de abril de 2016, por medio del cual la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, remite la denuncia D-003-16, relacionada con presuntas irregularidades relacionadas con el sobrecosto en la compra de un lote para los desplazados en el Municipio de El Paujil.

Bajo ese estado de cosas, el ente de control fiscal contaba con dos años a partir del conocimiento de los hechos para emitir el auto de apertura vinculando al garante. No obstante, en el interior del proceso está acreditado que el auto de apertura fue proferido por el despacho el 18 de diciembre de 2018, es decir, cuando la prescripción bienal de las acciones derivadas del contrato de seguro ya se había materializado

Mediante Auto No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal procedió a dar apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148 (folio 228 al 233 y reversos), en contra de los señores: RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH, identificado con cédula de ciudadanía No. 217.691.533 expedida en Florencia,

La línea jurisprudencial del máximo tribunal administrativo ha sido absolutamente clara al establecer que el acto administrativo por medio del cual se declara el siniestro, debe ser proferido por la administración a más tardar dentro de los dos años siguientes a la fecha en la que la entidad administrativa ha debido tener conocimiento de la ocurrencia del siniestro, hecho que claramente deberá configurarse dentro de la vigencia del contrato de seguro, y cuyo término coincide con el de la prescripción ordinaria de 2 años reseñada en el artículo 1081 del Código de Comercio:

³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Número único de radicación: 250002324000 2012 00588 02. Demandante: Seguros Colpatría S.A. hoy AXA Colpatría Seguros S.A. Demandado: Contraloría General de la República. Tercero con interés: La Previsora S.A. compañía de seguros.

"Cabe precisar que la declaratoria del siniestro, materializada mediante un acto administrativo, deberá hacerse por la Administración, a más tardar dentro de los dos años siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro, hecho que necesariamente debe acaecer durante la vigencia del seguro, así la declaratoria se produzca después de su vencimiento. Lo anterior tiene sustento tanto en la ley, artículo 1081 del Código de Comercio, como en la doctrina y la jurisprudencia que, sobre el tema, en particular, ha desarrollado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

El artículo 1081 del Código de Comercio consagró un término de dos años para la prescripción ordinaria y uno de cinco años para la extraordinaria, la primera de ellas corre desde el momento en que el interesado haya tenido conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción, (factor subjetivo) mientras que la extraordinaria por ser objetiva, correrá contra toda clase de personas sin consideración alguna del citado conocimiento, desde el momento en que nace el respectivo derecho. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)⁴

Obsérvese que el Consejo de Estado, máxima autoridad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ha sido completamente diáfano al establecer que la prescripción derivada de las acciones del contrato de seguro, es decir, la contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio, puede ser alegada y debe ser reconocida cuando se manifieste en los procesos de responsabilidad fiscal. En otras palabras, considerando que el garante en este tipo de procesos se vincula como tercero civilmente responsable, es completamente claro que puede alegar en su defensa la prescripción de las acciones derivadas de la relación aseguradora, tal como se expone en el siguiente pronunciamiento:

"Conviene reiterar sobre este tema que el término de esa prescripción es distinto al término de vigencia de la póliza, que el siniestro debe ocurrir dentro de dicha vigencia para que nazca la obligación del garante o asegurador, y que la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros empieza a correr desde cuando acontezca el siniestro o de que el beneficiario o la autoridad competente, como en este caso lo es la Contraloría General de la República, tenga conocimiento de su ocurrencia."⁵

Es relevante destacar que no solo el fallo mencionado anteriormente demanda de manera expresa el reconocimiento por parte de la Contraloría de la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro cuando sea aplicable, sino que también existen diversas decisiones en la misma línea, como se ejemplifica a continuación:

"...tal vinculación no es a título de acción por responsabilidad fiscal, sino por

⁴ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de abril 22 de 2009. Expediente 14.667. C.P. Miryam Guerrero de Escobar; y, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 3 de mayo de 2000, Exp. 5360, M.P. Nicolás Bechara Simancas.

⁵ -Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de junio de 2010 radicado 68001- 23-15-000-2004-00654-01CP. Rafael E. Ostau De Lafont Planeta

responsabilidad civil, esto es, por razones inherentes al objeto del contrato de seguros, esto es, derivada únicamente del contrato que se ha celebrado, que por lo demás es de derecho comercial, y no de gestión fiscal alguna o conducta lesiva del erario por parte del garante, de allí que la responsabilidad que se llegue a declarar es igualmente civil o contractual, y nunca fiscal... (...)

Dicho de otra forma, por efecto de ese precepto, la Contraloría pasa a ocupar el lugar del beneficiario de la póliza, que de suyo es el contratante, cuando éste no haya ordenado hacerla efectiva en el evento de la ocurrencia del siniestro, como todo indica que aquí sucedió.

...De suerte que la entidad de control tiene una craza confusión sobre esas dos acciones, y sirva la oportunidad para dejar en claro que, si bien están entrelazadas, son totalmente diferentes, de las cuales una debe surtir primero para que sea posible la otra, incluso con sujeción a regulaciones procesales distintas.

Por no tratarse, entonces, de una vinculación por responsabilidad fiscal ni de una acción de cobro coactivo, sino una acción derivada del contrato de seguros es aplicable la prescripción del artículo 1081 del C.Co. y no el término de caducidad previsto en el artículo 9° de la ley 610 de 2000, como tampoco el señalado en el artículo 66, numeral 3, del C.C.A., para vincular al garante como civilmente responsable..." (Énfasis propio)⁶

En ese sentido, al extrapolar el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado al caso que nos ocupa, se concluye que nos encontramos ante un caso típico de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. Esto se evidencia en el certificado de entrega de la comunicación de vinculación de mi representada, el cual se emitió dos años después del conocimiento de los hechos por parte del ente de control fiscal. Razón suficiente para que el operador tenga por probada la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, so pena de incurrir en un vicio de ilegalidad del acto administrativo que no la tenga como probada.

El Consejo de Estado refiere de cara a la falta de motivación de fallo de responsabilidad fiscal lo siguiente:

"En efecto, aunque el otorgar un espacio para el ejercicio del derecho a la defensa constituye un ámbito de protección del derecho al debido proceso, éste no se agota con tal garantía, pues resulta imperativo que el operador jurídico realice un análisis material de las razones que invoca el acusado, a fin de validar o desvirtuar las mismas ofreciendo argumentos suficientes, de lo contrario la decisión por la ausencia de motivación puede resultar arbitraria, infundada y por consiguiente

⁶ Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección primera, rad: 68001-23-15-000-2004-00654-01, c.p: rafael e. Ostau de lafont planeta

contraria al ordenamiento jurídico. Con lo anterior en manera alguna se está indicado que la motivación de los actos administrativos necesariamente debe ser extensa, pero sí que las razones expuestas en los mismos sean pertinentes y claras frente a las decisiones adoptadas, máxime, cuando éstas implican la atribución de responsabilidad luego de surtido un proceso en el que se le brinda a la parte acusada la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, lo que implica un esfuerzo de la autoridad competente de valorar los argumentos desarrollados, de motivar por qué los mismos son o no acertados a luz del ordenamiento jurídico, de lo contrario tal decisión adolece de la motivación debida y por ende vulnera el derecho al debido proceso.

En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este cargo se denomina técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la forma del acto administrativo, el modo de expedirse. Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en el vicio de expedición irregular y, por ende, se configura la nulidad del acto administrativo. ()⁷

Por lo anterior, se debe tener en cuenta que en el caso concreto se ha configurado la prescripción de las acciones derivadas de los contratos de seguro mediante los cuales se vinculó a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. En conclusión, la garantía contenida en la Póliza Multirriesgo No. 63073994000000032 no podrá ser afectada, ya que se ha configurado la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros, relacionadas con los hechos objeto de investigación fiscal. Por lo tanto, por deducción jurídica, se deberá reponer el fallo de responsabilidad fiscal para, en su lugar, desvincular a mi representada o exonerarla de cualquier condena.

2. EL ENTE DE CONTROL NO TUVO EN CUENTA LA INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA POR CUANTO NO SE REALIZÓ EL RIESGO ASEGURADO.

Yerra el operador fiscal al imponer de manera inconsulta la obligación a cargo de mi representada, toda vez que no existió detrimento patrimonial. En consecuencia, no hay realización del riesgo asegurado. Articulando lo expuesto en este acápite con lo desarrollado al inicio de este escrito, en el presente proceso de responsabilidad fiscal no se concluyen los elementos que determinen este tipo de responsabilidad. Por un lado, porque el daño patrimonial al Estado que presenta la Contraloría se fundamentó en serias inconsistencias e imprecisiones de orden tanto fáctico como jurídico, ya que el auto de imputación de responsabilidad fiscal se basó en una norma derogada, como lo es la Ley 9 de 1989. En ese sentido, no es dable que se emita un fallo con responsabilidad

⁷ Consejo de Estado. (2018, 9 de agosto). [Número de radicación: 76001-23-31-000-2004-03513-02]. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Bogotá D.C.

fiscal cuando la supuesta conducta incorrecta del funcionario asegurado se encuadró en los límites de un precepto normativo derogado por el legislador colombiano, razón suficiente para que se revoque el fallo en su integridad.

No existe obligación indemnizatoria a cargo de mi representada, toda vez que no se realizó el riesgo asegurado en la Póliza Multirriesgo No. 63073994000000032. En el expediente ciertamente no está demostrada la responsabilidad fiscal que pretende el ente de control endilgar a los presuntos responsables. Lo anterior, toda vez que la contraloría no cuenta con pruebas fehacientes para determinar la causación del presunto detrimento patrimonial. Por el contrario, se encuentra probada la clara gestión del investigado, la cual ha estado encaminado a darle cumplimiento a los compromisos adquiridos por el municipio. En este orden de ideas, en concordancia con todo lo referenciado a lo largo del presente escrito, se propone este reparo, toda vez que la Aseguradora Solidaria de Colombia, no está obligada a responder, de conformidad con las obligaciones expresamente estipuladas y aceptadas por las partes en los contratos de seguro. Como no se ha realizado el riesgo en los términos del artículo 1072 del C.Co., debe absolverse de toda responsabilidad a la compañía aseguradora.

En términos generales, para que en un contrato de seguro la parte aseguradora desembolse una indemnización, es necesario que se cumpla la condición eventual de la cual depende esta obligación. Esta condición no es otra cosa que el acaecimiento del riesgo asegurable o el siniestro, en los términos del artículo 1072 del Código de Comercio, según el cual "se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado.

A su vez el artículo 1077 del Código de Comercio señala lo siguiente:

"(...) ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad (...)."

Nótese que al interior del proceso el ente de control fiscal no logró acreditar un actuar gravemente culposo en cabeza del alcalde del municipio del el Paujil, en razón a que su actuar estuvo permeado de legalidad. De conformidad con lo anterior, se evidencia que el riesgo asegurado en el contrato de seguro en comento no es otro que implique

"indemnizará a la entidad asegurada, con sujeción a los términos, cláusulas y condiciones contenidos en esta póliza, las pérdidas causadas por los funcionarios de la entidad asegurada o por las personas que bajo su responsabilidad lo reemplacen, previa aceptación de la compañía, por incurrir en conductas que sean tipificadas como delitos contra la administración pública o en alcances que por incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias, causen menoscabo de los fondos o bienes de la entidad asegurada, siempre y cuando el hecho sea cometido dentro de la vigencia de la presente póliza."

De acuerdo con la exposición anterior y teniendo en cuenta lo descrito en el Fallo mixto del 20 de junio de 2024, se tiene que el ente de control no acreditó que efectivamente el riesgo asegurado se haya materializado por el concurso de los elementos propios de la responsabilidad fiscal. Esto es, no se encuentran acreditados los requisitos listados en el 5 de la Ley 610 de 2000 en cabeza de los presuntos responsables y por consiguiente, la presente investigación no está llamada a prosperar. En consecuencia, no se logra estructurar una responsabilidad fiscal en cabeza del presunto responsable, lo que por sustracción de materia significa, que no se ha realizado el riesgo asegurado como condición sine qua non para activar la responsabilidad que, eventual e hipotéticamente, pudiera corresponder a la aseguradora.

Se concluye que, al no reunirse los supuestos para que se configure la responsabilidad fiscal claramente no se ha realizado el riesgo asegurado por la Póliza Multirriesgo No. 63073994000000032 que sirvió como sustento para vincular como tercero civilmente responsable a la compañía. En tal sentido, no surge obligación indemnizatoria alguna a cargo de la aseguradora. De esta manera, al ser jurídicamente improcedente la declaratoria de responsabilidad fiscal en contra de los investigados, se debe concluir que tampoco se puede exigir pago alguno a mi procurada, derivado de la póliza lo que por sustracción de materia significa, la no realización del riesgo asegurado. En consecuencia, el honorable despacho no tiene una alternativa diferente que desvincular a la SEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, del proceso de responsabilidad fiscal identificado con el expediente No. PRF-1148.

3. AUSENCIA DE LAS CONDICIONES PARA QUE SE CONFIGURE UN SINIESTRO:
PÉRDIDAS AMPARADAS POR LA PÓLIZA MULTIRRIESGO No. 63073994000000032

No puede perderse de vista tampoco que el amparo extendido por mi representada en lo que atañe al Manejo Global de Sector Oficial, este amparo solo estaría llamado a su activación en el momento en que se acredite que los servidores públicos o funcionarios de la entidad asegurada esto es **MUNICIPIO DE EL PAUJIL**, hayan incurrido en actos u omisiones fraudulentos o deshonestos que cometa uno de sus servidores públicos, lo que implica que se debe tipificar una conducta de tipo penal. Lo dicho encuentra apoyo en el análisis que realizó sobre el particular la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de la Sala de Casación Civil de 24 de julio de 2006, exp. 00191:

"El seguro de manejo, por su parte, también fue creado por la precitada ley 225 de 1938, que en su artículo 2° señala que aquel tiene por objeto garantizar 'el correcto manejo de fondos o valores de cualquier clase que se confían a los empleados públicos o a los particulares, a favor de las entidades o personas ante las cuales sean responsables'

En el mismo sentido, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, CP. Danilo Rojas Betancourth, en sentencia del 19 de junio de 2013, rad. No. 25000-23- 26-000-2000-02019-01(25472), manifestó:

"...en la denominada póliza global de manejo, las entidades públicas o privadas se precaven frente a los perjuicios que pueden sufrir en su patrimonio con ocasión de

la pérdida de sus fondos y bienes, proveniente de las actuaciones de sus empleados en ejercicio de sus cargos y como consecuencia de la administración, custodia o manejo de los bienes por parte de dichos servidores. Tratándose de las entidades estatales, el seguro de manejo la ampara de los actos que sean tipificados como delito contra la administración pública, es decir que, en estos casos, el riesgo está fundado en la administración dolosa o gravemente culposa de los bienes y valores confiados al funcionario debido a su cargo"

Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante concepto No. 2002019456-1 del 12 de noviembre de 2002, define la concepción de la garantía de Manejo, en los siguientes términos:

"El seguro de manejo tiene como objeto amparar al asegurado contra las pérdidas causadas por sus empleados con ocasión de la comisión de las conductas tipificadas en nuestro ordenamiento penal bajo los delitos de hurto, hurto calificado, abuso de confianza, falsedad y estafa". (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Bajo este estado de cosas, para que una pérdida sufrida por el asegurado genere una obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora (es decir que sea considerada como siniestro) se requiere un acto o infracción fraudulenta o deshonesta cometida por el funcionario, o por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en sus funciones, la cual debe presentarse durante la vigencia de la póliza. Lo anterior no significa que sea menester contar con una sentencia penal previa, sino que se acredite plenamente que se reúnen los elementos para un tipo penal y/o disciplinario.

En conclusión, el fallo de responsabilidad fiscal deberá revocarse, por cuanto el amparo de manejo tiene un alcance limitado y se enfoca en brindar cobertura en casos específicos. Su objetivo principal es proteger al asegurado ante pérdidas causadas por actos u omisiones fraudulentas o deshonestas cometidas por sus servidores públicos, así como por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en sus funciones. Para que una pérdida sea considerada como siniestro y genere una obligación indemnizatoria por parte de la aseguradora, es necesario que el acto o infracción se haya cometido durante la vigencia de la póliza y que se cumplan los elementos necesarios para tipificar un delito o una falta disciplinaria. En ese orden, se evidencia que la vinculación de mi representada en el presente caso resulta improcedente, dado que las conductas del funcionario de la entidad asegurada no se ajustan a los supuestos establecidos en el condicionado general de la póliza.

4. LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ NO TUVO EN CUENTA LAS EXCLUSIONES CONCERTADAS AL INTERIOR DEL CONTRATO DE SEGURO POLIZA MULTIRRIESGO NO. 630-73-994000000032.

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de

725

coberturas que se excluyen de amparo, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza. En tal sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, mediante sentencia del 27 de mayo de 2020, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

*"Lo anterior, se reitera, en la medida que si bien desde la perspectiva de la normativa aplicable se cumplieron las condiciones generales de la póliza de seguros para que Seguros del Estado S.A. respondiera por el daño atribuido a la I.P.S. Universitaria de Antioquia, el juez en la valoración probatoria debió revisar si en el caso bajo examen se configuraba alguna de las exclusiones de responsabilidad fijadas contractualmente, en los términos señalados en el numeral 29 del referido contrato de seguro"*⁸

Así las cosas, se evidencia cómo por parte del Órgano de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se exhorta a los Jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los Contratos de Seguro. Ahora bien, hay que tener en cuenta el concepto No. 19999055614-2 proferido por la Superintendencia Financiera¹⁶, que al respecto ha dicho:

"En relación con la exclusión: Sea lo primero manifestarle que dentro del ámbito de la libertad contractual que les asiste a las partes en el contrato de seguro, el asegurador en virtud de la facultad que consagra el artículo 1056 del Código de Comercio puede, salvo las restricciones legales, asumir a su arbitrio todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés asegurado, el patrimonio o la persona del asegurado. Es así como éste, mediante la suscripción de la póliza de seguro decide otorgar determinados amparos supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, de tal manera que sólo en el evento de que se presenten éstos, deberá cumplir con su obligación de indemnizar. De igual forma, adicionalmente, puede incorporar en la póliza determinadas estipulaciones, contentivas de circunstancias que aun siendo origen del evento dañoso o efecto del mismo no obliguen al asegurador a la prestación señalada en el contrato de seguro, las cuales se conocen generalmente con el nombre de exclusiones". Negrilla y subrayado por fuera del texto original.

En el caso en concreto, de la lectura acuciosa de las condiciones generales de la Póliza Multirriesgo No. 630-73-994000000032, se puede observar que se encuentra la siguiente:

- 1. MERMAS, DIFERENCIAS DE INVENTARIOS, DESAPARICIONES, O DAÑOS QUE SUFRAN EL DINERO, LOS BIENES O LOS VALORES POR CUALQUIER CAUSA NO IMPUTABLE A LA CONDUCTA O ACTIVIDAD DE CUALQUIER TRABAJADOR DEL ASEGURADO.**

⁸ Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez de fecha 27 de mayo de 2020

2. PAGOS REALIZADOS A TERCEROS EQUIVOCADAMENTE O DE CRÉDITOS CONCEDIDOS A TERCEROS NO PAGADOS POR CUALQUIER CAUSA, SALVO CUANDO LA CONDUCTA SE TIPIFIQUE COMO UNO DE LOS DELITOS CUBIERTOS POR ESTA PÓLIZA.

En virtud de lo anterior y en el remoto evento de que el fallo se mantenga incólume, el ente de control fiscal deberá declarar que el hecho objeto de la investigación fiscal se encuentra excluido del amparo en la Póliza Multirriesgo No. 630-73-994000000032, dado que el pago realizado por parte del municipio asegurado fue efectuado de manera equivocada, puesto que supuestamente el avalúo realizado no se encontraba vigente para la época de la solemnización del negocio jurídico de compraventa sobre el lote de terreno identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661. Hecho que constituye una merma no imputable al servidor público y un pago realizado a terceros de manera errónea.

5. EN EL REMOTO EVENTO DE QUE NO SE REVOQUE EL FALLO CON RESPONSABILIDAD, EL ENTE DE CONTROL DE NINGUNA FORMA PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO PARA CADA SINIESTRO.

En gracia de discusión y sin que implique reconocimiento de responsabilidad, debe destacarse que la eventual obligación de mi procurada se circunscribe en proporción al límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato, los cuales se encuentran sujetos a la disponibilidad de la suma asegurada. La ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia de la póliza va agotando la suma asegurada, por lo que es indispensable que se tenga en cuenta la misma en el remoto evento de proferir sentencia condenatoria en contra de nuestro asegurado.

Es preciso indicar que en el contrato de seguro se estableció que, por cada siniestro, originado por un riesgo amparado, ocurrido dentro de la vigencia de la póliza se podrá afectar la misma solo por un valor máximo de Cien millones de pesos colombianos \$100,000,000, para el amparo de manejo. Lo anterior como se evidencia en el siguiente apartado de la póliza:

AMPAROS	SUMA ASEGURADA
MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL	100,000,000.00
EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	101,000,000.00
SUSTRACCION CON VIOLENCIA	412,000,000.00
ROTURA ACCIDENTAL DE VIDRIOS PLANOS	20,000,000.00
ROTURA DE MAQUINARIA	60,000,000.00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO	2,432,000,000.00
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE T	2,443,000,000.00
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL	105,600,000.00
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS	2,342,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	500,000,000.00

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. No obstante, se reitera que, por cada siniestro originado por

un riesgo amparado, ocurrido dentro de la vigencia de la póliza se podrá afectar la misma solo por un valor máximo de Cien millones de pesos colombianos \$100,000,000.

De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

"ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074".

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

(...) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización. (Subrayado y negrilla propios del suscrito).⁹

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda en razón a la porción de riesgo asumido, y en observancia de las condiciones estipuladas para cada siniestro. Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al despacho tomar en consideración que la póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el ente fiscal en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

⁹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. MP. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952

6. EN EL REMOTO EVENTO DE QUE NO SE REVOQUE EL FALLO CON RESPONSABILIDAD, EL ENTE DE CONTROL DEBERÁ TENER EN CUENTA EL DEDUCIBLE PACTADO EN LA POLIZA MULTIRRIESGO No. 630-73-994000000032.

En el fallo con responsabilidad fiscal No.004 del 20 de junio de 2024, la Contraloría Departamental del Caquetá no tuvo en cuenta el deducible pactado insertado en la póliza multirriesgo No. 630-73-994000000032, pese a que la carátula del contrato de seguro obra adosa al expediente del proceso fiscal, situación que denota ausencia de análisis de cara a la relación del tercero civilmente responsable, lo que se traduce en un defecto fáctico en cabeza del operador fiscal, puesto que no advirtió en su fallo el deducible debidamente pactado por las partes contractuales al interior del contrato de seguro.

En gracia de discusión y sin que implique reconocimiento de responsabilidad, debe destacarse que de la eventual obligación de mi procurada se debe descontar el deducible pactado. Debe tenerse en cuenta que el deducible corresponde a la fracción de la pérdida que debe asumir directamente y por su cuenta el asegurado, y en este caso para la póliza, se pactó en el 10% del valor de la pérdida, mínimo 5.00 SMMLV para cada amparo, como se evidencia en el siguiente aparte así:

MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5.00 SMMLV

De esta manera, en el improbable evento de que no se revoque el fallo con responsabilidad fiscal, no debe perderse de vista que el operador fiscal debe proceder a descontar del importe de la indemnización la suma pactada como deducible, según lo expuesto anteriormente. De lo contrario, el título ejecutivo resultaría inexigible frente a la compañía de seguros.

Por otra parte, y de acuerdo con la normatividad vigente, la Superintendencia Financiera de Colombia en Concepto No. 2019098264 del 29 de agosto de 2019, ha sido clara en definir en qué consiste el deducible indicando lo siguiente:

(...) Sin embargo, es preciso señalar que en nuestro ordenamiento jurídico no existe disposición que obligue al asegurador a indemnizar conforme a determinado régimen específico, en consecuencia, sea que la incapacidad o la lesión se acredite en las formas mencionadas en su comunicación, la fijación del monto de la indemnización se rige por las estipulaciones que al respecto hubieren pactado el tomador y el asegurador.

Dicho esto, en una póliza donde se ampara la responsabilidad civil extracontractual el monto de la indemnización puede verse disminuido si las partes han pactado que un porcentaje de la pérdida se asumirá a título de deducible por el asegurado, convenio

que resulta legalmente viable, de acuerdo con nuestro ordenamiento mercantil. En efecto, la Sección I del Capítulo II, Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio, en su artículo 1103, consagra dentro de los principios comunes a los seguros de daños la posibilidad de pactar, mediante cláusulas especiales, que el asegurado "...deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño".

Una de tales modalidades, la denominada deducible, se traduce en la suma que el asegurador descuenta indefectiblemente del importe de la indemnización, de tal suerte que en el evento de ocurrencia del siniestro no indemniza el valor total de la pérdida, sino a partir de un determinado monto o de una proporción de la suma asegurada, con el objeto de dejar una parte del valor del siniestro a cargo del asegurado. El deducible, que puede consistir en una suma fija, en un porcentaje o en una combinación de ambos, se estipula con el propósito de concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o riesgo asegurado.

Por tanto, el valor del ofrecimiento extendido por la compañía aseguradora podría variar en función de los perjuicios sufridos por el reclamante, así como los elementos probatorios que se hubieren allegado para acreditar el valor de la pérdida, conforme lo presupuestado en el artículo 1077 del código de comercio, aunado a las condiciones generales y particulares pactadas en la póliza, como lo son el límite del valor asegurado, el deducible pactado con el asegurado, entre otros factores (...).

En conclusión, el operador fiscal está obligado, conforme a la ley, a considerar que el deducible aplicable sería del 10% sobre el valor de la pérdida, en el caso improbable de que no se revoque el fallo con responsabilidad fiscal.

7. EN TODO CASO DEBE TENERSE EN CUENTA EL CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO DE LOS CONTRATOS DE SEGURO.

Es importante mencionar el principio que rige el contrato de seguro de daños, es el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo.

De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado. Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización. Es decir, no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

(..) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato(..)

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

"(...) Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso" (Subraya y negrita adrede)

Es importante señalar que, dentro del fallo, la contraloría no realizó el análisis correspondiente de la póliza, solo se limitó a enunciar la vigencia de la misma y sus amparos, sin tener en cuenta la cobertura material, el valor límite asegurado para cada siniestro y el coaseguro que debe ser asumido por el asegurado.

Vale la pena mencionar, que este instructivo debe ser interpretado armónicamente con la Circular No. 005 proferida por la Contraloría General de la Nación el 16 de marzo de 2020, la cual fue sumamente clara al puntualizar y exigir el cumplimiento de lo siguiente:

En aras de brindar mayor claridad frente a la vinculación de las compañías aseguradoras en los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República y como parte de la política de prevención del daño antijurídico que ha adoptado la entidad para el presente año, a continuación se resaltan algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta por los operadores jurídicos, relacionados con la mencionada vinculación de dichas compañías como garantes dentro de los procesos de responsabilidad fiscal:

- Las compañías de seguros no son gestores fiscales, por ende, su responsabilidad se limita a la asunción de ciertos riesgos en las condiciones previstas en el contrato de seguros.*
- Las obligaciones de la aseguradora tienen límites, entre otros, la suma asegurada, la vigencia, los amparos, las exclusiones, los deducibles, los siniestros, establecidos en el clausulado del contrato de seguros correspondiente.*

• De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, la vinculación como garante de una compañía aseguradora se da, ya sea porque el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recae el objeto del proceso se encuentra amparado por una póliza.

• Es importante que, además de identificar la modalidad de cobertura, el operador fiscal verifique los demás elementos de la póliza, como su periodo de prescripción, de retroactividad, las exclusiones que establezca, sus amparos, deducible, valor y de ser posible determinar si la misma ya había sido afectada, lo cual puede afectar la suma asegurada.

• El operador fiscal debe identificar con absoluta claridad cuáles son las modalidades de cobertura (descubrimiento, ocurrencia, o reclamación claims made), así como su vigencia, los periodos de cobertura temporal retroactiva o no de las respectivas pólizas, y demás condiciones, para determinar cuál de ellas se afectará en curso del proceso de responsabilidad fiscal. En caso de tratarse de la modalidad de seguros de ocurrencia, la póliza a ser afectada debe ser aquella que se encontraba vigente para el momento de acaecimiento del hecho que genere la pérdida del recurso público. Si la modalidad es, por descubrimiento, la póliza afectada será la que se encontraba vigente a la fecha en que se tuvo conocimiento del hecho que origine la pérdida o solicitud de indemnización. Y si la modalidad del seguro es por reclamación o "claims made", deberá afectarse la póliza vigente al momento de proferir el auto de apertura o de vinculación de la aseguradora.

• El operador fiscal dentro del ejercicio de verificación antes señalado, debe analizar tanto las condiciones generales como particulares en las cuales se determinan las coberturas y exclusiones de la póliza, vinculando únicamente el valor del amparo al que se refiere el hecho investigado.

Se considera de la mayor importancia que, en lo sucesivo, se realice el estudio temprano, oportuno e integral de todas las pólizas de seguros que puedan llevar a la declaratoria de responsabilidad civil dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 389 de 1997, el Código de Comercio y las cláusulas contractuales de los respectivos contratos de seguros, en armonía con las normas especiales que regulan el proceso de responsabilidad fiscal. (...) (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Así las cosas, no debe perderse de vista que, como se señaló en el acápite pertinente, Póliza Multirriesgo No. 630-73-994000000032, no podrán ser afectada puesto que carece de cobertura material y no se realizó el riesgo asegurado. Así pues, como el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento sin justa causa debido al carácter meramente indemnizatorio, y teniendo en cuenta que se demostró la inexistencia de algún tipo de detrimento del erario público, resulta improcedente afectar la póliza en cuestión.

**8. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD DE LA ASEGURADORA SOLIDARIA FRENTE A LOS
DEMÁS RESPONSABLES FISCALES**

Es preciso indicar que la Contraloría Colegiada de Córdoba, cometió un error factico y jurídico al interpretar la solidaridad, como quiera que la misma surge exclusivamente cuando la ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Es importante recabar sobre el particular por cuanto a que la obligación de mí representada ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, tiene su génesis en un contrato de seguro celebrado dentro de unos parámetros y límites propios de la autonomía de la voluntad privada y no de la existencia de responsabilidad civil extracontractual propia de la aseguradora, sino de la que se pudiere atribuir al asegurado conforme lo establecido por el artículo 2341 del Código Civil, por tanto se encuentra frente a dos responsabilidades diferentes a saber: 1. La del asegurado por la responsabilidad civil extracontractual que se le llegará a atribuir, cuya fuente de obligación indemnizatoria emana de la ley propia y 2. La de mí representada aseguradora cuyas obligaciones no emanan de la ley propiamente dicha, sino de la existencia de un contrato de seguro celebrado dentro de los parámetros dados por los artículos 1036 del Código de Comercio y S.S., encontrándose las obligaciones de mí representada debidamente delimitadas por las condiciones pactadas en el contrato de seguro celebrado, constituyéndose entonces las obligaciones del asegurado y de la aseguradora en obligaciones independientes y que no son solidarias.

En virtud de tal independencia en las obligaciones, el artículo 1044 del Código de Comercio faculta a la aseguradora proponer al tercero beneficiario las excepciones y exclusiones que pudiere interponerle al asegurado o tomador del contrato de seguro, motivo por el cual puede alegar mí representada la ausencia de cobertura ante la falta de prueba de la ocurrencia y cuantía del siniestro y las exclusiones y demás condiciones que resultaren atribuibles al presente evento.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales como el coaseguro establecido y el límite del valor asegurado que puede ser afectado para cada siniestro ocurrido dentro de la vigencia de la póliza.

De tal forma que no puede predicarse ningún tipo de responsabilidad solidaria de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, con la COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO, como erradamente lo manifiesta la contraloría en el fallo del 22 de diciembre de 2022.

VI. PETICIONES

- A. Comendidamente, solicito se **REVOQUE INTEGRAMENTE** el **FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 004 DEL 20 DE JUNIO DE 2024**, proferido dentro del proceso de la referencia, por cuanto de los elementos probatorios que obran en el plenario, no se acreditan de ninguna manera los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, esto es, no se demuestra un patrón de conducta dolosa o gravemente culposa en cabeza del presunto responsable fiscal, ni un daño cierto causado al patrimonio de la administración pública.
- B. Comendidamente, solicito que se sirva **ABSOLVER** de toda condena a **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, en calidad de tercero civilmente responsable y garante, debido a que ha operado la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. Además, la Póliza Multirriesgo No. 630-73-994000000032, no presta cobertura material para los hechos objeto de investigación por haber configurado la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.

I. NOTIFICACIONES

- El suscrito y mi representada recibirán notificaciones en la Calle 69 No. 4 - 48, oficina 502 de la ciudad de Bogotá y en la dirección de correo electrónico notificaciones@gha.com.co

Atentamente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No 19.395.114 expedida de Bogotá.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.



Aseguradora Solidaria
de Colombia

¡Siempre junto a ti!

Bogotá D.C., 18 de junio de 2024
ISG-01166 - PRF5910



Señores
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
E. S. D.

PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL
RADICADO: 1148
ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE EL PAUJIL
TERCERO VINCULADO: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

JOSÉ IVÁN BONILLA PÉREZ, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.520.827 obrando como representante legal judicial de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, sociedad comercial legalmente constituida, identificada con NIT 860.524.654-6, domiciliada en Bogotá D.C., sometida al control y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera, tal como consta en el certificado anexo, por medio del presente confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente los intereses de la compañía dentro del proceso de la referencia.

El doctor **HERRERA ÁVILA**, queda investido con la facultad de notificarse, pronunciarse, contestar, interponer los recursos que fueren procedentes, solicitar pruebas, recibir, desistir, sustituir y reasumir el presente mandado, solicitar copias de las actuaciones surtidas y de cualquier pieza que obre en el expediente, y demás facultades necesarias para el cabal cumplimiento de los fines del presente mandado.

Atentamente,

JOSE IVAN

BONILLA PEREZ

JOSÉ IVÁN BONILLA PÉREZ

Representante Legal

C.C. No. 79.520.827

Firmado digitalmente por
JOSE IVAN BONILLA PEREZ

Fecha: 2024.06.18

11:56:48 -05'00'

Acepto,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C. C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C

T. P. No. 39.116 del C.S.J

notificaciones@gha.com.co



POLIZA MULTIRRIESGO



NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6300084529

PÓLIZA No: 630 -73 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA				COD. AGE: 630				RAMO: 73				PAP:			
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
29	11	2013		01	11	2013	23:59	01	03	2014	23:59	120			
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DE LA PÓLIZA				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA			
				A LAS				A LAS				DÍAS			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION			

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION				VIGENCIA DEL ANEXO				DIA				MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DÍAS
				01				11	2013	23:59	01	03	2014	23:59	120				
				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS			

NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL		IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0	
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL		CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ	
		TELÉFONO: 6084362480	

ASEGURADO: VER CERTIFICADOS POR ITEM		IDENTIFICACIÓN:	
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	
TELÉFONO:			
BENEFICIARIO: VER CERTIFICADOS POR ITEM		IDENTIFICACIÓN:	

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS			
Ver Certificados por Item			
AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL	100,000,000.00		
EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	101,000,000.00		
SUSTRACCION CON VIOLENCIA	412,000,000.00		
ROTURA ACCIDENTAL DE VIDRIOS PLANOS	20,000,000.00		
ROTURA DE MAQUINARIA	60,000,000.00		
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO	2,432,000,000.00		
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE T	2,443,000,000.00		
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL	105,600,000.00		
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS	2,342,000,000.00		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	500,000,000.00		

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *3,083,126,027.39	VALOR PRIMA: \$ *****3,160,898	GASTOS EXPEDICION: \$ ****15,000.00	IVA: \$ *****508,144	TOTAL A PAGAR: \$ *****3,684,042
INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE FEXVAN LTDA	CLAVE 1576	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	%PART VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000630008452

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá



AMONTES 0

C8DB20780F07F87B5D

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180

Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:

<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tener en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6300084529

PÓLIZA No: 630 -73 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA COD. AGE: 630 RAMO: 73 PAP:
DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS
29 11 2013 23:59 01 03 2014 23:59 120 18 06 2024
FECHA DE EXPEDICIÓN VIGENCIA DE LA PÓLIZA VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS DIAS FECHA DE IMPRESIÓN
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION
VIGENCIA DEL ANEXO DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS DIA
01 11 2013 23:59 01 03 2014 23:59 120
VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS

DATOS DEL TOMADOR
NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ TELÉFONO: 6084362480

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ TELÉFONO: 6084362480
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS
ITEM: 1 ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT : 800095763
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ CIUDAD: EL PAUJIL DIRECCION: CARRERA 4 ENTRE CALLE 4 Y 5
CASA DE LA CULTURA MANZANA: 5-4
ACTIVIDAD: CASA DE HABITACION NO RURAL
TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S) TIPO DE RIESGO: ESTATAL
AMPARO OBJETO SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
EDIFICIO(S) 110,000,000.00 5.00
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL
EDIFICIO(S) 6,600,000.00
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO
DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMMLV
EDIFICIO(S) 110,000,000.00 5.00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO
DEDUCIBLES: 3.00 % DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO (ITEM) AFECTADO - Mínimo: 3.00 SMMLV
EDIFICIO(S) 110,000,000.00 5.00
Texto Aclaratorio

BENEFICIARIOS
NIT 800095763 - MUNICIPIO DE EL PAUJIL
NIT 800095763 - MUNICIPIO DE EL PAUJIL

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***111,808,219.18 VALOR PRIMA: \$ *****61,489 GASTOS EXPEDICION: \$***** IVA: \$ *****9,884 TOTAL A PAGAR: \$ *****71,373

INTERMEDIARIO NOMBRE CLAVE %PART NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO
FEXVAN LTDA 1576 100.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000630008452

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

AMONTES 0

C8DB20780F07F87B5D

CLIENTE

732

POLIZA MULTIRRIESGO

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA

COD. AGENCIA: 630 RAMO: 73 No PÓLIZA: 994000000032 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

ASEGURADO: VER CERTIFICADOS POR ITEM

IDENTIFICACIÓN:

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT

TEXTO ITEM 1

NIT 800095763 - MUNICIPIO DE EL PAUJIL
NIT 800095763 - MUNICIPIO DE EL PAUJIL
NIT 800095763 - MUNICIPIO DE EL PAUJIL
NIT 800095763 - MUNICIPIO DE EL PAUJIL

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE PRORROGA LA POLIZA POR UN PERIODO DE CUATRO MESES, DANDO CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA POLIZA DE LA AGENCIA NEIVA No 994/499. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6300084529

PÓLIZA No: 630 -73 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA COD. AGE: 630 RAMO: 73 PAP:
DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS
29 11 2013 23:59 01 11 2013 23:59 01 03 2014 23:59 120 18 06 2024
FECHA DE EXPEDICIÓN VIGENCIA DE LA PÓLIZA VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS DIAS FECHA DE IMPRESIÓN
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION
VIGENCIA DEL ANEXO 01 11 2013 23:59 01 03 2014 23:59 120
VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS

DATOS DEL TOMADOR
NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ TELÉFONO: 6084362480

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ TELÉFONO: 6084362480
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS
ITEM: 2 ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT : 800095763
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ CIUDAD: EL PAUJIL DIRECCION: CALLE 5 CARRERA 3 ESQUINA
CASA DE PLANTA ELECTRICA MANZANA: 4-4
ACTIVIDAD: BODEGAS, ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S) TIPO DE RIESGO: ESTATAL
AMPARO OBJETO SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
EDIFICIO(S) 10,000,000.00 5.00
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL
EDIFICIO(S) 600,000.00
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO
DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMMLV
EDIFICIO(S) 10,000,000.00 5.00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO
DEDUCIBLES: 3.00 % DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO (ITEM) AFECTADO - Mínimo: 3.00 SMMLV
EDIFICIO(S) 10,000,000.00 5.00

Texto Aclaratorio
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SOLICITUD DEL MUNICIPIO, SE PRORROGA LA VIGENCIA POR DOS MESES MAS,

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****10,164,383.56 VALOR PRIMA: \$ *****5,590 GASTOS EXPEDICION: \$ ***** IVA: \$ *****899 TOTAL A PAGAR: \$ *****6,488

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO
NOMBRE CLAVE %PART NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO
FEXVAN LTDA 1576 100.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000630008452

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

AMONTES 0

C8DB20780F07F87B5D

CLIENTE

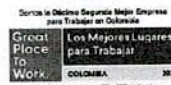
Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE
993 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6801, ENTIDAD COOPE
GRAN CONTRIBUYENTE RES.250

POLIZA MULTIRRIESGO



NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6300084529

PÓLIZA No: **630 -73 - 994000000032** ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA				COD. AGE: 630				RAMO: 73				PAP:			
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
29	11	2013	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	01	11	2013	23:59	01	03	2014	23:59	120	18	06	2024
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												FECHA DE IMPRESIÓN			
												TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION			

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION	VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS		
		01	11	2013	23:59	01	03	2014	23:59	120		
		VIGENCIA DESDE			A LAS			VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR		IDENTIFICACIÓN: NIT		800.095.763-0	
NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL					
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL		CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ		TELÉFONO: 6084362480	

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN: NIT		800.095.763-0	
ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL					
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL		CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ		TELÉFONO: 6084362480	
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL		IDENTIFICACIÓN: NIT		800.095.763-0	

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS		NIT : 800095763	
ITEM: 3 ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL			
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ		CIUDAD: EL PAUJIL	
DIRECCIÓN: CARRERA 5 NO. 9-10		COLISEO	
ACTIVIDAD: ESTADIO		MANZANA: 10-5	
TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S)		TIPO DE RIESGO: ESTATAL	
AMPARO	OBJETO	SUMA ASEGURADA	% INVAR
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS			
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV			
EDIFICIO(S)		150,000,000.00	5.00
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL			
EDIFICIO(S)		9,000,000.00	
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO			
DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMMLV			
EDIFICIO(S)		150,000,000.00	5.00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA, MAREMOTO			
DEDUCIBLES: 3.00 % DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO (ITEM) AFECTADO - Mínimo: 3.00 SMMLV			
EDIFICIO(S)		150,000,000.00	5.00

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***152,465,753.42	\$ *****83,848	\$ *****	\$ *****13,479	\$ *****97,327

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
FEXVAN LTDA	1576	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000630008452

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

AMONTES 0

C8DB20780F07F87B5D

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180

Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tener en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUADA RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA No: 630 -73 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA				COD. AGE: 630		RAMO: 73		PAP:			
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO
29	11	2013	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	01	11	2013	23:59		01	03	2014
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE		A LAS		VIGENCIA HASTA		A LAS	
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL										DÍAS	
										FECHA DE IMPRESIÓN	
										TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION	

TIPO DE MOVIMIENTO		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	
EXPEDICION	VIGENCIA DEL ANEXO	01	11	2013	23:59	01	03	2014	23:59	120	
VIGENCIA DESDE					A LAS		VIGENCIA HASTA				
							A LAS				

DATOS DEL TOMADOR			
NOMBRE:	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	IDENTIFICACIÓN: NIT	800.095.763-0
DIRECCIÓN:	CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL	CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ	TÉLEFONO: 6084362480

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO			
ASEGURADO:	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	IDENTIFICACIÓN:	NIT 800.095.763-0
DIRECCIÓN:	CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL	CIUDAD:	EL PAUJÍL, CAQUETÁ
		TELÉFONO:	6084362480
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	IDENTIFICACIÓN:	NIT 800.095.763-0

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ITEM: 4 ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT : 800095763

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ CIUDAD: EL PAUJÍL DIRECCION: CARRERA 4 ENTRE CALLE 3 Y 2

ACTIVIDAD: PLAZAS DE MERCADO, O GALERIA

TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S) TIPO DE RIESGO: ESTATAL

[illegible]

INCENDIO, RAYO Y ANEXOS
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

EDIFICIO(S)	620,000,000.00	5.00
-------------	----------------	------

EDR11010 (5)

ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL	37,200,000.00
EDIFICIO(S)	

EDR11010 (5)

ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO
REDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMMVLV

EDIFICIO(S)	620,000,000.00	5.00
-------------	----------------	------

TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO
REDUCIBLES: 3.00 % DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO (ITEM) AFECTADO - Mínimo: 3.00 SMMLV

DEDUCIBLES: 5.00 % DEL VALOR ASIGNABLE DEL INMUEBLE (VALOR)	620,000,000.00	5.00
PREFICIO(S)		

EDIFICIO(S)

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
			\$ *****55.712	\$ *****402.284

\$ ***630,191,780.82	\$ *****346,571	\$ *****	\$ *****35,712	\$ *****102,201
INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO		

INTERMEDIARIO						
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO	
	1576	100.00				

FEXVAN LTDA	1570	100400
-------------	------	--------

LA MORSA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA REINSCRIPCIÓN EN LA CATEGORÍA CORRESPONDIENTE.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA FUERZA DE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

FIRMA TOMADOR

FIRMA ASEGURADOR (415)701861000019(6020)/0000000000/0000000000

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá AMONTES 0

68DB20780F07E87B5D CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180

Fax: (601) 7919180 • Celular: 312 342 6229 • Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<http://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

<https://aseguradorasolida.com.co/seguros/seguros-de-vida>

93 - REGIMEN COMIN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Companhia de Seguros

POLIZA MULTIRRIESGO

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6300084529

PÓLIZA No: 630 -73 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA	COD. AGE: 630	RAMO: 73	PAP:
DIA MES AÑO 29 11 2013	DIA MES AÑO 01 11 2013	DIA MES AÑO 01 03 2014	DIA MES AÑO 18 06 2024
FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA DE IMPRESIÓN
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL	A LAS	A LAS	DÍAS
TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION			

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION	VIGENCIA DEL ANEXO	DIA MES AÑO HORAS 01 11 2013 23:59	DIA MES AÑO HORAS 01 03 2014 23:59	DIA MES AÑO HORAS 18 06 2024
		VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA

NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL	IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL	CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ
TELÉFONO: 6084362480	

ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL	IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL	CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ
TELÉFONO: 6084362480	
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL	IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS	
ITEM: 5 ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL	NIT : 800095763
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ	CIUDAD: EL PAUJIL
DIRECCION: CARRERA 5 SALIDA AL DONCELLO	
ACTIVIDAD: MATADEROS, FRIGORIFICO	MANZANA: 1-5
TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S)	TIPO DE RIESGO: ESTATAL
AMPARO	OBJETO
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS	SUMA ASEGURADA % INVAR
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	SUBLIMITE
EDIFICIO(S)	90,000,000.00 5.00
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL	
EDIFICIO(S)	5,400,000.00
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO	
DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMMLV	
EDIFICIO(S)	90,000,000.00 5.00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO	
DEDUCIBLES: 3.00 % DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO (ITEM) AFECTADO - Mínimo: 3.00 SMMLV	
EDIFICIO(S)	90,000,000.00 5.00

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****91,479,452.05	VALOR PRIMA: \$ *****50,309	GASTOS EXPEDICION: \$ *****	IVA: \$ *****8,087	TOTAL A PAGAR: \$ *****58,396
---	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA
FEXVAN LTDA	1576	100.00	
		%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000630008452

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

AMONTES 0

C8DB20780F07F87B5D

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180

Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:

<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tener en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Comunidad de San José

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6300084529

PÓLIZA No: 630 -73 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA COD. AGE: 630 RAMO: 73 PAP:
DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS
29 11 2013 23:59 01 03 2014 23:59 120 18 06 2024
FECHA DE EXPEDICIÓN VIGENCIA DE LA PÓLIZA VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS DIAS FECHA DE IMPRESIÓN
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION
VIGENCIA DEL ANEXO DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS DIA
01 11 2013 23:59 01 03 2014 23:59 120
VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS

DATOS DEL TOMADOR
NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ TELÉFONO: 6084362480

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ TELÉFONO: 6084362480
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS
ITEM: 6 ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT : 800095763
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ CIUDAD: EL PAUJIL DIRECCION: CARRERA 4 NO. 4-49 CARCEL
MUNICIPAL MANZANA: 4-4
ACTIVIDAD: CASA DE HABITACION NO RURAL
TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S) TIPO DE RIESGO: ESTATAL
AMPARO OBJETO SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
EDIFICIO(S) 80,000,000.00 5.00
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL
EDIFICIO(S) 4,800,000.00
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO
DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMMLV
EDIFICIO(S) 80,000,000.00 5.00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO
DEDUCIBLES: 3.00 % DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO (ITEM) AFECTADO - Mínimo: 3.00 SMMLV
EDIFICIO(S) 80,000,000.00 5.00

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****81,315,068.49 VALOR PRIMA: \$ *****81,896 GASTOS EXPEDICION: \$ ***** IVA: \$ *****13,165 TOTAL A PAGAR: \$ *****95,061

INTERMEDIARIO NOMBRE CLAVE %PART NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO
FEXVAN LTDA 1576 100.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000630008452

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

AMONTES 0

C8DB20780F07F87B5D

CLIENTE

POLIZA MULTIRRIESGO

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**
6300084529

PÓLIZA No: 630 -73 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA				COD. AGE: 630				RAMO: 73				PAP:			
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
29	11	2013		01	11	2013	23:59	01	03	2014	23:59	120			
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DE LA PÓLIZA				VIGENCIA DESDE				A LAS			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL								VIGENCIA HASTA				A LAS			
												DÍAS			
												FECHA DE IMPRESIÓN			
												TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION			

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION				VIGENCIA DEL ANEXO				DIA				MES				AÑO				HORAS				DÍAS															
				01				11				2013				23:59				01				03				2014				23:59				120			
				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS																							

DATOS DEL TOMADOR		IDENTIFICACIÓN: NIT		800.095.763-0	
NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL					
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL		CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ		TELÉFONO: 6084362480	

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN: NIT		800.095.763-0	
ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL					
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.5-01 EL PAUJIL		CIUDAD: EL PAUJIL, CAQUETÁ		TELÉFONO: 6084362480	
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL		IDENTIFICACIÓN: NIT		800.095.763-0	

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS		NIT : 800095763	
ITEM: 7 ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL			
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ CIUDAD: EL PAUJIL		DIRECCION: CALLE 5 CARRERA 5 ESQUINA	
ACTIVIDAD: CASA DE HABITACION NO RURAL		MANZANA: 4-6	
TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S)		TIPO DE RIESGO: ESTATAL	
AMPARO	OBJETO	SUMA ASEGURADA	% INVAR
INCENDIO, RAYO Y ANEXOS			
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA	- Mínimo: 1.00 SMMLV		
EDIFICIO(S)		700,000,000.00	5.00
MEJORAS LOCATIVAS		100,000,000.00	5.00
MUEBLES Y ENSERES		350,000,000.00	5.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		60,000,000.00	5.00
DINERO EN EFECTIVO Y TITULOS VALORES		2,000,000.00	
TERRENO		50,000,000.00	5.00
VIDRIOS		20,000,000.00	5.00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA	- Mínimo: 1.00 SMMLV		
PATRIMONIO DEL ASEGURADO		500,000,000.00	
ARRENDAMIENTO POR ALOJAMIENTO TEMPORAL			
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA	- Mínimo: 1.00 SMMLV		
EDIFICIO(S)		42,000,000.00	
ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO			

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ *2,005,701,369.87	\$ *****2,531,196	\$ *****	\$ *****406,895	\$ *****2,938,091

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
FEEXVAN LTDA	1576	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000630008452

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE



AMONTES 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tener en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

DEFENSORIA DEL FINANCIERO DE COLOMBIA

VIGILADO

Comisión de Supervisión

POLIZA MULTIRRIESGO

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA

COD. AGENCIA: 630

RAMO: 73

Nº PÓLIZA: 994000000032 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

ITEM 7 - (continuación ...)

DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMMLV

EDIFICIO(S)	700,000,000.00	5.00
MEJORAS LOCATIVAS	100,000,000.00	5.00
MUEBLES Y ENSERES	350,000,000.00	5.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000,000.00	5.00
DINERO EN EFECTIVO Y TITULOS VALORES	2,000,000.00	
TERRENO	50,000,000.00	5.00
VIDRIOS	20,000,000.00	5.00
EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	90,000,000.00	5.00
EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES	11,000,000.00	5.00

TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO

DEDUCIBLES: 3.00 % DEL VALOR ASEGURABLE DEL ARTICULO (ITEM) AFECTADO - Mínimo: 3.00 SMMLV

EDIFICIO(S)	700,000,000.00	5.00
MEJORAS LOCATIVAS	100,000,000.00	5.00
MUEBLES Y ENSERES	350,000,000.00	5.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000,000.00	5.00
DINERO EN EFECTIVO Y TITULOS VALORES	2,000,000.00	
TERRENO	50,000,000.00	5.00
VIDRIOS	20,000,000.00	5.00
EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	90,000,000.00	5.00

ROTURA DE MAQUINARIA

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000,000.00	5.00
---------------------	---------------	------

ROTURA ACCIDENTAL DE VIDRIOS PLANOS

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMDLV

VIDRIOS Y UNIDADES FRAGILES	20,000,000.00	5.00
-----------------------------	---------------	------

SUSTRACCION CON VIOLENCIA

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

MUEBLES Y ENSERES	350,000,000.00	5.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000,000.00	5.00
DINERO EN EFECTIVO Y TITULOS VALORES	2,000,000.00	

EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	90,000,000.00	5.00
EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES	11,000,000.00	5.00

MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5.00 SMMLV

EMPLEADOS DE NOMINA	100,000,000.00	
---------------------	----------------	--

Relación de Bienes:

Objeto: MEJORAS LOCATIVAS / Ramo: INCENDIO

ADECUACIONES A LAS NORMAS DE SISMORESISTENCIA

\$ 100,000,000.00

Objeto: MUEBLES Y ENSERES / Ramo: INCENDIO

MUEBLES Y ENSERES

\$ 150,000,000.00

BINES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL

\$ 200,000,000.00

CLIENTE

736 **LISTADO DE ASEGURADOS**

POLIZA MULTIRRIESGO
DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000000032	ANEXO: 0	TIPO DE MOVIMIENTO: 0	PAGINA: 12
TOMADOR: MUNICIPIO DE EL PAUJIL		IDENTIFICACION: 800.095.763-0	

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. 6 NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	800095763-0	CARRERA 4 ENTRE CALLE 4 Y 5 C	EL PAUJIL	111,808,219.18	61,489	71,373
2	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	800095763-0	CALLE 5 CARRERA 3 ESQUINA - CA	EL PAUJIL	10,164,383.56	5,590	6,488
3	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	800095763-0	CARRERA 5 NO. 9-10 COLISEO D	EL PAUJIL	152,465,753.42	83,848	97,327
4	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	800095763-0	CARRERA 4 ENTRE CALLE 3 Y 2 GA	EL PAUJIL	630,191,780.82	346,571	402,284
5	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	800095763-0	CARRERA 5 SALIDA AL DONCELLO -	EL PAUJIL	91,479,452.05	50,309	58,396
6	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	800095763-0	CARRERA 4 NO. 4-49 CARCEL MUN	EL PAUJIL	81,315,068.49	81,896	95,061
7	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	800095763-0	CALLE 5 CARRERA 5 ESQUINA	EL PAUJIL	2,005,701,369.	2,531,196	2,938,090
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						3,160,898	3,669,019

POLIZA MULTIRRIESGO

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA

COD. AGENCIA: 630

RAMO: 73

No PÓLIZA: 994000000032 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

ASEGURADO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.763-0

RIESGO 7 - (continuación ...)

Objeto: MEJORAS LOCATIVAS / Ramo: AMIT
ADECUACIONES A LAS NORMAS DE SISMORESISTENCIA

\$ 100,000,000.00

Objeto: MUEBLES Y ENSERES / Ramo: AMIT
MUEBLES Y ENSERES

\$ 150,000,000.00

BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL

\$ 200,000,000.00

Objeto: MUEBLES Y ENSERES / Ramo: SUSTRACCIÓN
MUEBLES Y ENSERES

\$ 150,000,000.00

BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL

\$ 200,000,000.00

Objeto: MEJORAS LOCATIVAS / Ramo: TERREMOTO
ADECUACIONES A LAS NORMAS DE SISMORESISTENCIA

\$ 100,000,000.00

Objeto: MUEBLES Y ENSERES / Ramo: TERREMOTO
MUEBLES Y ENSERES

\$ 150,000,000.00

BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL

\$ 200,000,000.00

DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CONSTANCIA SECRETARIAL


Florencia, 05 de julio del 2024

Referencia: Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

Que el día 04 de julio del 2024 la Compañía de seguros solidaria de Colombia a través de su Defensor de Confianza el Doctor **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA** presentó escrito invocando nulidad procesal por indebida notificación del Auto de Imputación Mixta N°001 del 26 de febrero del 2024, siendo las 14:25 del día 04 de julio del 2024.

Que el día 04 de julio del 2024 la compañía de seguros solidaria de Colombia a través de su Defensor de Confianza el Doctor **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA** presento recurso de reposición frente al fallo fiscal N° 004 del 20 de junio del 2024, siendo las 14:41 del 04 de julio del 2024

Pasa al despacho para lo de su competencia.



LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO
Secretaria

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS
PUBLICOS**



Nit. 891.190.246-1

AUTO No. 003

MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN
DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 1148

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:

PRESUNTOS RESPONSABLES	RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH C.C. 17.691.533 HERIBERTO ARCILA PUENTES C.C. 6.681.291
ENTIDAD AFECTADA	MUNICIPIO DE EL PAUJIL
PRESUNTO DETRIMENTO	\$96.032.548 (Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos)
POLIZA No.	930-73-994000000032
ASEGURADORA	Compañía de Seguros Solidaria de Colombia

En la ciudad de Florencia, Caquetá a los cinco (05) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024), el suscrito Director Técnico de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental, procede a resolver el **RECURSO DE REPOSICIÓN** interpuesto contra el **Fallo Fiscal No. 004 del 20 de junio de 2024**, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario de Única Instancia No. 1148 con fundamento en los siguientes:

2. ANTECEDENTES

Originó la presente investigación el memorando CF- 066 del 05 de abril de 2016, por medio del cual la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, remite la denuncia D-003-16, relacionada con presuntas irregularidades relacionadas con el sobrecosto en la compra de un lote para los desplazados en el Municipio de El Paujil.

De acuerdo con el traslado de la denuncia D-003-16, se estableció que el Municipio de El Paujil suscribió el Contrato de Compraventa No. 001 del 26 de diciembre de 2013, con el señor Heriberto Arcila puentes, en cuantía de Doscientos cuarenta Millones de pesos (\$240.000.000) M/Cte., con el objeto de adquirir un predio con destino a la construcción del proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable del citado ente territorial, el cual fue adquirido presuntamente con sobrecosto en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

Mediante Auto No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal procedió a dar apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148 (folio 228 al 233 y reversos), en contra de los señores: **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH**, identificado con cédula de ciudadanía No. 217.691.533 expedida en Florencia, quien se desempeñó para la ocurrencia de los hechos como Alcalde del Municipio de



Nit. 891.190.246-1

El Paujil, Caquetá; para la época de los hechos, y **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291, quien se desempeñó como vendedor del lote de terreno identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, de la jurisdicción del Municipio de El Paujil, Caquetá, según certificado de libertad y tradición de fecha 26 de diciembre de 2013, obrante a folio 9 al 50. Y en calidad de tercero civilmente responsable a la compañía de seguros Solidaria de Colombia.

Mediante Auto No. 034 de fecha 30 de septiembre de 2019, el Director Técnico de Responsabilidad Fiscal en ejercicio de la competencia establecida en la Ley 610 de 2000 y la Resolución No. 229 del fecha 25 de agosto de 2015, procedió a dictar Auto de designación de apoderado de oficio dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148, para los investigados **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT** y **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, quienes para la época de los hechos se desempeñaron como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá y Vendedor del predio objeto del Contrato de Compraventa; con el fin de que los representaran dentro de este proceso fiscal, garantizándoles así el derecho de defensa y contradicción a los investigados, con el objeto de cumplir el debido proceso y otorgar sin lugar a dudas todas las garantías procesales inherentes a los investigados (folio 244 al

El día 26 de febrero de 2021, mediante Auto de Imputación Mixta No. 001, se procedió a imputar responsabilidad fiscal contra: **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT** en cuantía de Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos (\$96.032.548) M/Cte., y en contra del Tercero Civilmente Responsable la compañía de Seguros **SOLIDARIA DE COLOMBIA DE COLOMBIA S.A.** De igual manera se procedió al archivo parcialmente a favor del señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES** (folio 295 al 330).

Mediante Grado de Consulta No. 114 de fecha 21 de marzo de 2024, se confirma el Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024 (folio 370 al 385).

Mediante Auto No. 008 de fecha 03 de abril de 2024, se resolvió solicitud de práctica de pruebas (folio 390 al 396).

Mediante Auto No. 009 de fecha 17 de abril de 2024, se resolvió recurso de reposición frente al Auto No. 008, a través del cual se decidió práctica de pruebas dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148 (folio 422 al 439).

Mediante Auto No. 004 de fecha 20 de julio de 2024, se decidió Fallo con Responsabilidad Fiscal de la misma fecha en cuantía de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (172.510.957) M/CTE.** (folio 502 al 653).

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Página 2 de 15

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá

Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515

@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC

info@contraloriadelcaqueta.gov.co

www.cdc.gov.co



Nit. 891.190.246-1

Como fundamento de derecho se aducen las siguiente:

- Artículos 267, 268 y 271 de la Constitución Política de Colombia, artículos modificados por el Acto Legislativo 4 de 2019, los cuales establecen que la vigilancia del Control Fiscal de la Administración Pública corresponde a las Contralorías.
- Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por la cual se establece el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorías.
- Ley 1474 del 12 de julio de 2011, modificada parcialmente por el Decreto 403 de 2020, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Ley 80 de 1993.
- Las demás normas que se referencien.

4. ENTIDAD ESTATAL AFECTADA

Municipio de El Paujil, Caquetá con NIT. 800-095.763-0.

5. CUANTÍA

El detrimento patrimonial determinado en desarrollo del trámite de la Denuncia No. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, practicada al Municipio de El Paujil, Caquetá, asciende a la suma de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$172.510.957) M/CTE.**

6. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Sea lo primero advertir que para declarar responsable a un implicado en un proceso de Responsabilidad Fiscal, las pruebas existentes en el expediente deben, primero, haber sido allegadas al plenario de manera legal, es decir, conforme al ordenamiento jurídico, segundo, deben conducir sin lugar a equívocos a la certeza del daño al erario y el grado de responsabilidad de los implicados, tercero, que dichos soportes probatorios deben ser analizados y apreciados por el investigador en conjunto, en otros términos de manera integral y, para ello debe el órgano fiscalizador aplicar las reglas de la sana crítica y la persuasión racional.

En el trámite procesal es necesario probar, es decir, aportar al proceso los motivos o razones, por los medios y procedimientos aceptados por la ley, para llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos y la responsabilidad de las personas.



Nit. 891.190.246-1

Esta garantía constitucional implica: el derecho a buscar la prueba, el derecho a postular la prueba, el derecho a que se le decrete la prueba, el derecho a que se le practique la prueba, el derecho a que se le niegue la prueba, el derecho a que se le valore la prueba. La cual se puede definir como las razones, argumentos o elementos de convicción que se sacan del medio probatorio, para llevar al convencimiento del Juez o Instructor, sobre el acaecimiento de los hechos que se debaten en el proceso.

La Contraloría es juez y parte en el proceso y al tener un interés, soporta la carga de la prueba. El artículo 187 del C.P.C. estipula que: "...las pruebas deberán apreciarse en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o la validez de ciertos actos".

En consecuencia, procederá este Despacho a pronunciarse sobre los argumentos planteados por la estudiante de Derecho Luz Marina Moreno Sarabia, defensora de oficio del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, en la cual impetra nulidad procesal:

A folio 689, reposa constancia secretarial de fecha 28 de junio de 2024, en la cual se manifiesta: "Que a última hora hábil de oficina del día 27 de junio de 2024, vencieron los términos con que disponía la estudiante de derecho **LUZ MARINA MORENO SANABRIA** Defensora de oficio del señor **RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT** para presentar Recurso de Reposición frente al Fallo Fiscal N° 004 del 20 de junio de 2024, presentación que hace en términos del mencionado recurso."



DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CONSTANCIA SECRETARIAL

Florencia, 28 de junio del 2024

Referencia: Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

Que a última hora hábil de oficina del día 27 de junio del 2024, vencieron los términos con que disponía la estudiante de derecho **LUZ MARINA MORENO SANABRIA** Defensora de oficio del señor **RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT** para presentar Recurso de Reposición frente al Fallo Fiscal N° 004 del 20 de junio del 2024, presentación que hace en términos, del mencionado recurso.

LIESEL JOULIETH CORREA FORERO
Secretaria



Nit. 891.190.246-1

Verificada la presentación del Recurso de reposición impetrado (folio 677 al 685), evidencia este Despacho que dentro de las pretensiones de la recurrente se remite a la presentación de nulidad procesal en esta instancia administrativa, ante la cual se resolverá de la siguiente manera:

Respecto de la nulidad presentada se desatará así:

El artículo 36 de la Ley 610 de 2000, expone las causales de nulidad del proceso fiscal y el artículo 109 de la ley 1474 de 2011 dispone que la solicitud de nulidad puede hacerse hasta antes de **"proferirse fallo definitivo"**, entonces considera esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal que el entendimiento que debe darse a la anterior frase, debe ser con una referencia al fallo señalado **en el artículo 53 de la misma ley**, pues a este se incorporan las decisiones de única, primera o segunda instancia. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Ahora, de conformidad con lo expuesto por el Viceprocurador General de la Nación en el fallo de reposición de única instancia proferido el 27 de febrero de 2004: "(...) La petición de nulidad podrá formularse hasta *"antes de proferirse el fallo definitivo, esto es, hasta antes del fallo de primera o única instancia (artículo 146 del CDU)..."* **Si así no se entendiera la norma entonces no existiría límite a la petición de nulidad**, pues operaría en cualquier momento procesal, esto es, después del fallo de primera instancia y antes de resolver la segunda o después del fallo de única y antes de la reposición; luego entonces, **en cualquier oportunidad procesal, pues proferidas esas decisiones pendientes se han agotado las instancias. De allí que, como en el presente caso, las peticiones de nulidad efectuadas antes del fallo de primera instancia y debidamente resueltas, como las que se hacen después del fallo objeto de esta reposición, son asuntos de los cuales no puede ocuparse nuevamente el despacho, toda vez que dichas peticiones son manifiestamente inconducentes y dilatorias en los términos de los artículos 142 numeral 2º. del C. de P.P., 38 numeral 2º. del C. de P.C. y 21 del CDU"**. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Entonces, citado lo anterior, es evidente que una Solicitud de Nulidad que se impetra después de proferido el Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, es completamente improcedente por extemporánea, puesto que el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011, prescribe que solo puede impetrarse hasta antes del fallo definitivo, entendido como el que pone fin al procedimiento y que es el de única instancia, ya que después de él sólo queda la interposición de recursos.

Es decir, una vez proferido el Fallo de Responsabilidad Fiscal, se pierde competencia por parte del funcionario competente, para modificar la decisión tomada definitivamente y se limita la decisión a los argumentos de reposición que presenten los presuntos responsables. Ello es tan cierto que, al no interponerse los recursos dentro del término legal establecido para ello, la decisión queda firme.



Nit. 891.190.246-1

Es claro entonces, que las nulidades a invocarse una vez proferido fallo en los procesos de responsabilidad fiscal no pueden ser resueltas, por ser extemporáneas, pues ya existió un fallo definitivo como lo es el de única instancia.

De conformidad con lo señalado en el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011 se infiere que los incidentes de nulidad presentados con posterioridad al fallo no son viables.

En igual sentido, la Contraloría General de la República, mediante Concepto E0038709 que cita de manera textual el concepto 80112- 1E96211 del 09 de septiembre de 2013, señaló:

"Es importante advertir que la nulidad es un mecanismo extremo al cual debe recurrir el funcionario competente, para subsanar irregularidades o vicios presentados en el proceso, cuya magnitud y trascendencia sean tales que afecten el proceso en su estructura o contrasten con las garantías fundamentales previstas en el Art. 29 de la Carta Política. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la que estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado, con su conducta, a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica. Los actos irregulares pueden convalidarse con el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial. Podrán proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitivo. Ahora bien, ¿el objetivo que persigue la nulidad es la de garantizar el debido proceso y enderezar la actuación procesal en derecho, subsanando las irregularidades y vicios.

Empero, la nulidad puede ser decretada de oficio o a petición de parte, el funcionario competente podrá declarar en cualquier estado del proceso la nulidad parcial o total de lo actuado, mediante providencia debidamente motivada, las pruebas decretadas y aportadas legalmente antes de la declaratoria de nulidad, conservan plenamente su validez de conformidad con el Código de Procedimiento Civil.

*El capítulo III de la Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, reglamenta las nulidades en estos procesos, en los siguientes términos: **"Artículo 36. Causales de nulidad.** Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar; la violación del derecho de defensa del implicado; o la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. La nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del proceso. **Artículo 37.** Saneamiento de nulidades. En cualquier etapa del proceso en que el funcionario advierta que existe alguna de las*



Nit. 891.190.246-1

causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su plena validez. Estas normas son aplicables a los procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten por el procedimiento ordinario y verbal. En cuanto al término para proponer las nulidades, la Ley 610 en su artículo 38 señala: **"Artículo 38. Término para proponer nulidades.** Podrán proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitivo. En la respectiva solicitud se precisará la causal invocada y se expondrán las razones que la sustenten. Sólo se podrá formular otra solicitud de nulidad por la misma causal por hechos posteriores o por causal diferente. Contra el auto que resuelva las nulidades procederán los recursos de reposición y apelación". (Negrillas fuera de texto).

Este artículo fue subrogado por el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011, en donde señala que **la solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse la decisión final**, (decisión de la primera instancia). Excepcionalmente y cuando los motivos que generen la nulidad sean posteriores a la decisión de primera instancia, será posible hacer esta solicitud pero teniendo en cuenta que la causa de la nulidad fue **posterior al fallo de responsabilidad fiscal**. La solicitud de nulidad se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su presentación; solamente es aplicable en los Procesos que se tramiten por el procedimiento ordinario. (Negrillas fuera de texto).

En conclusión, en materia de responsabilidad fiscal de acuerdo con la oportunidad que establece la ley 1474 de 2011, la nulidad por regla general debe proponerse con antelación a la providencia que determine si el procesado es o no responsable fiscalmente; empero, permite de manera excepcional el incidente bajo la óptica de causales que surjan con posterioridad a la decisión, acción que el recurrente no ha realizado.

En virtud de las anteriores disquisiciones, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, considera que la Solicitud de Nulidad impetrada por la estudiante de derecho Luz Marina Moreno Sanabria, en calidad de defensor de oficio del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, es improcedente toda vez que la Contraloría emitió Fallo No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, el cual fue notificado personalmente a la defensora de oficio el día 20 de junio de 2024 (folio 662 al 664), es decir, la defensora conocía que ya existía un fallo definitivo al momento en que radicó el incidente de nulidad el día 27 de junio de 2024, por lo que se considera que bajo los artículos ya citados queda más que justificada que la petición fue después a la decisión; adicionalmente, de la lectura de la nulidad no se observa la existencia de una causal de nulidad sobreviniente a la emisión de la decisión.

Ahora bien, este Despacho en aras de despejar las dudas de su proceder y pese a que esta solicitud de nulidad es extemporánea e improcedente se permite aclararle a la defensora de



Nit. 891.190.246-1

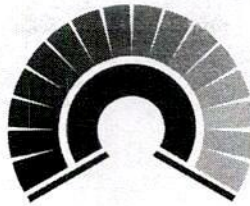
oficio del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, que por la causal 3° del artículo 36 de la ley 610 de 2000, es decir, **“la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”**, la cual está intrínsecamente relacionada, no le asiste postulación cuando solicita se declare la nulidad del Fallo Fiscal No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, que dispuso Fallar con Responsabilidad Fiscal en contra del investigado, cuando se ha comprobado que existe plena congruencia entre lo que inició como proceso de investigación y lo que finalmente se falla, basado en la prueba que se decretó sobre la solicitud de testimonio realizado por la parte procesa avocada, **conduce a la certeza sin lugar a equívocos** que efectivamente se presentó detrimento patrimonial en desarrollo de la ejecución de Contrato de Promesa de Compraventa No. 001 de 2013, y sobre lo cual se debe Fallar con Responsabilidad Fisca, toda vez que no han sido desvirtuado los argumentos de este Despacho.

Ahora bien, la defensora de oficio solicita expresamente se decrete la nulidad de todo lo actuado desde la emisión del Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 004 de 2024, por cuanto no se corresponde con la imputación efectuada por este Ente de Control en el proceso de la referencia, dando aplicación a la causal tercera de nulidad denominada “comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso” consagrada en el artículo 36 de la Ley 610 de 2000. Actuación que realizó este Despacho el día 20 de junio de 2024, a partir del auto No. 004 de la misma fecha,, **pretendiendo desconocer que ya se encuentra un fallo definitivo a la situación jurídica del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, el cual fue notificado personalmente del mismo tanto al sancionado como a su defensora de oficio y por lo cual, amerita el rechazo de plano del incidente por extemporáneo e improcedente de conformidad con las consideraciones expuestas.**

En ese orden de ideas, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, considera que la Solicitud de Nulidad radicada por la estudiante de derecho Luz Marina Moreno Sanabria, en primer lugar, **se presentó de forma extemporánea y por tanto es improcedente**, luego no puede después de haberse proferido el fallo fiscal pretender que se conceda la nulidad, y segundo, no se evidencia motivo de nulidad posterior al fallo fiscal; y por consiguiente, **no será concedida por este Despacho, y por tanto en esta instancia se confirmará el Fallo Fiscal No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario de única Instancia No. 1148.**

A folio 690 reposa constancia secretarial en la cual se manifiesta: “Que a última hora hábil de oficina del día 03 de julio de 2024, vencieron en silencio los términos con que disponía la compañía de seguros solidaria de Colombia, para interponer recurso de reposición contra el Fallo Fiscal N° 004 del 20 junio de 2024, notificado el día 25 de junio de 2024.”

247



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CONSTANCIA SECRETARIAL

Florencia, 04 de julio del 2024

Referencia: Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

Que a última hora hábil de oficina del día 03 de julio del 2024, vencieron en silencio los términos con que disponía la compañía de seguros solidaria de Colombia, para interponer recurso de reposición contra el Fallo Fiscal N° 004 del 20 junio del 2024, notificado el día 25 de junio del 2024.

Pasa al despacho para lo de su competencia.


LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO
Secretaria

De igual manera a folio 738, reposa constancia secretarial la cual manifiesta:

CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CONSTANCIA SECRETARIAL

Florencia, 05 de julio del 2024

Referencia: Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

Que el día 04 de julio del 2024 la Compañía de seguros solidaria de Colombia a través de su Defensor de Confianza el Doctor GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA presentó escrito invocando nulidad procesal por indebida notificación del Auto de Imputación Mixta N°001 del 26 de febrero del 2024, siendo las 14:25 del día 04 de julio del 2024.

Que el día 04 de julio del 2024 la compañía de seguros solidaria de Colombia a través de su Defensor de Confianza el Doctor GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA presentó recurso de reposición frente al fallo fiscal N° 004 del 20 de junio del 2024, siendo las 14:41 del 04 de julio del 2024.

Pasa al despacho para lo de su competencia.


LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO
Secretaria



Nit. 891.190.246-1

Frente a la petición de nulidad procesal este Despacho se pronunciará de la siguiente manera:

El artículo 36 de la Ley 610 de 2000, expone las causales de nulidad del proceso fiscal y el artículo 109 de la ley 1474 de 2011 dispone que la solicitud de nulidad puede hacerse hasta antes de **"proferirse fallo definitivo"**, entonces considera esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal que el entendimiento que debe darse a la anterior frase, debe ser con una referencia al fallo señalado **en el artículo 53 de la misma ley**, pues a este se incorporan las decisiones de única, primera o segunda instancia. (Subrayado y negrillas fuera de texto).

Ahora, de conformidad con lo expuesto por el Viceprocurador General de la Nación en el fallo de reposición de única instancia proferido el 27 de febrero de 2004: "(...) La petición de nulidad podrá formularse hasta *"antes de proferirse el fallo definitivo, esto es, hasta antes del fallo de primera o única instancia (artículo 146 del CDU) ... **Si así no se entendiera la norma entonces no existiría límite a la petición de nulidad**, pues operaría en cualquier momento procesal, esto es, después del fallo de primera instancia y antes de resolver la segunda o después del fallo de única y antes de la reposición; luego entonces, en cualquier oportunidad procesal, pues proferidas esas decisiones pendientes se han agotado las instancias. De allí que, como en el presente caso, las peticiones de nulidad efectuadas antes del fallo de primera instancia y debidamente resueltas, como las que se hacen después del fallo objeto de esta reposición, son asuntos de los cuales no puede ocuparse nuevamente el despacho, toda vez que dichas peticiones son manifiestamente inconducentes y dilatorias en los términos de los artículos 142 numeral 2º. del C. de P.P., 38 numeral 2º. del C. de P.C. y 21 del CDU". (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Entonces, citado lo anterior, es evidente que una Solicitud de Nulidad que se impetra después de proferido el Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, es completamente improcedente por extemporánea, puesto que el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011, prescribe que solo puede impetrarse hasta antes del fallo definitivo, entendido como el que pone fin al procedimiento y que es el de única instancia, ya que después de él sólo queda la interposición de recursos.

Es decir, una vez proferido el Fallo de Responsabilidad Fiscal, se pierde competencia por parte del funcionario competente, para modificar la decisión tomada definitivamente y se limita la decisión a los argumentos de reposición que presenten los presuntos responsables. Ello es tan cierto que, al no interponerse los recursos dentro del término legal establecido para ello, la decisión queda firme.

Es claro entonces, que las nulidades a invocarse una vez proferido fallo en los procesos de responsabilidad fiscal no pueden ser resueltas, **por ser extemporáneas, pues ya existió un fallo definitivo como lo es el de única instancia.**



Nit. 891.190.246-1

De conformidad con lo señalado en el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011 se infiere que los incidentes de nulidad presentados con posterioridad al fallo no son viables.

En igual sentido, la Contraloría General de la República, mediante Concepto E0038709 que cita de manera textual el concepto 80112- 1E96211 del 09 de septiembre de 2013, señaló:

"Es importante advertir que la nulidad es un mecanismo extremo al cual debe recurrir el funcionario competente, para subsanar irregularidades o vicios presentados en el proceso, cuya magnitud y trascendencia sean tales que afecten el proceso en su estructura o contrasten con las garantías fundamentales previstas en el Art. 29 de la Carta Política. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la que estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado, con su conducta, a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica. Los actos irregulares pueden convalidarse con el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial. Podrán proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitivo. Ahora bien, ¡el objetivo que persigue la nulidad es la de garantizar el debido proceso y enderezar la actuación procesal en derecho, subsanando las irregularidades y vicios.

Empero, la nulidad puede ser decretada de oficio o a petición de parte, el funcionario competente podrá declarar en cualquier estado del proceso la nulidad parcial o total de lo actuado, mediante providencia debidamente motivada, las pruebas decretadas y aportadas legalmente antes de la declaratoria de nulidad, conservan plenamente su validez de conformidad con el Código de Procedimiento Civil.

*El capítulo III de la Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, reglamenta las nulidades en estos procesos, en los siguientes términos: **"Artículo 36. Causales de nulidad.** Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar; la violación del derecho de defensa del implicado; o la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. La nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del proceso. **Artículo 37.** Saneamiento de nulidades. En cualquier etapa del proceso en que el funcionario advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su plena validez. Estas normas son*



Nit. 891.190.246-1

aplicables a los procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten por el procedimiento ordinario y verbal. En cuanto al término para proponer las nulidades, la Ley 610 en su artículo 38 señala: **"Artículo 38. Término para proponer nulidades.** Podrán proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitivo. En la respectiva solicitud se precisará la causal invocada y se expondrán las razones que la sustenten. Sólo se podrá formular otra solicitud de nulidad por la misma causal por hechos posteriores o por causal diferente. Contra el auto que resuelva las nulidades procederán los recursos de reposición y apelación". (Negrillas fuera de texto).

Este artículo fue subrogado por el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011, en donde señala que **la solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse la decisión final**, (decisión de la primera instancia). Excepcionalmente y cuando los motivos que generen la nulidad sean posteriores a la decisión de primera instancia, será posible hacer esta solicitud, pero teniendo en cuenta que la causa de la nulidad fue **posterior al fallo de responsabilidad fiscal**. La solicitud de nulidad se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su presentación; solamente es aplicable en los Procesos que se tramiten por el procedimiento ordinario. (Negrillas fuera de texto).

En conclusión, en materia de responsabilidad fiscal de acuerdo con la oportunidad que establece la ley 1474 de 2011, la nulidad por regla general debe proponerse con antelación a la providencia que determine si el procesado es o no responsable fiscalmente; empero, permite de manera excepcional el incidente bajo la óptica de causales que surjan con posterioridad a la decisión, acción que el recurrente no ha realizado.

En virtud de las anteriores disquisiciones, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, considera que la Solicitud de Nulidad impetrada por el defensor de confianza de la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia el doctor Gustavo Alberto Herrera Ávila, es improcedente toda vez que la Contraloría emitió Fallo No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, el cual fue notificado personalmente al defensor de confianza el día 25 de junio de 2024 (folio 686 al 688), es decir, el defensor conocía que ya existía un fallo definitivo al momento en que radicó el incidente de nulidad el día 04 de julio de 2024, por lo que se considera que bajo los artículos ya citados queda más que justificada que la petición fue después a la decisión; adicionalmente, de la lectura de la nulidad no se observa la existencia de una causal de nulidad sobreviniente a la emisión de la decisión.

Ahora bien, este Despacho en aras de despejar las dudas de su proceder y pese a que esta solicitud de nulidad es extemporánea e improcedente se permite aclararle al defensor de confianza de la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia en calidad de tercero civilmente responsable, que por la causal 3° del artículo 36 de la ley 610 de 2000, es decir, **"la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso"**, la cual está intrínsecamente relacionada, no le asiste postulación cuando solicita se declare la



Nit. 891.190.246-1

nulidad parcial dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148, respecto de la notificación del Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, proferido por este Despacho.

La nulidad presentada pretende desconocer la actuación que realizada por este Despacho el día 20 de junio de 2024, a partir del Fallo Fiscal No. No. 004 de la misma fecha, pretendiendo desconocer que ya se encuentra un fallo definitivo a la situación jurídica del señor de su prohijada la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, el cual fue notificado personalmente al representante de los intereses de la Compañía de Seguros el doctor Gustavo Alberto Herrera Ávila y por lo cual, amerita el rechazo de plano del incidente por extemporáneo e improcedente de conformidad con las consideraciones expuestas.

En ese orden de ideas, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, considera que la Solicitud de Nulidad radicada por el defensor de confianza de la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, en primer lugar, se presentó de forma extemporánea y por tanto es improcedente, luego no puede después de haberse proferido el fallo fiscal pretender que se conceda la nulidad, y por consiguiente, no será concedida por este Despacho, y por tanto en esta instancia se confirmará el Fallo Fiscal No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario de única Instancia No. 1148.

Frente al recurso de reposición impetrado por el doctor Gustavo Alberto Herrera Ávila, defensor de confianza de la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, no se pronunciará este Despacho, toda que el mismo se presentó de manera extemporánea de conformidad con la constancia secretarial obrante a folio 690, en la cual se manifiesta:



**DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CONSTANCIA SECRETARIAL**

Florencia, 04 de julio del 2024

Referencia: Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

Que a última hora hábil de oficina del día 03 de julio del 2024, vencieron en silencio los términos con que disponía la compañía de seguros solidaria de Colombia, para interponer recurso de reposición contra el Fallo Fiscal N° 004 del 20 junio del 2024, notificado el día 25 de junio del 2024.

Pasa al despacho para lo de su competencia.


LIESEL JOULITH CORREA FORERO
Secretaria



Nit. 891.190.246-1

En tal sentido la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR todas las pretensiones interpuestas en el recurso de reposición presentado por la defensora de oficio del investigado señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.691.533, en calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; en lo que corresponde decidir a este Despacho.

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de Nulidad propuesta por la estudiante de Derecho Luz Marina Moreno Sarabia, quien actúa como defensor de oficio del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR improcedente la solicitud de Nulidad propuesta el doctor Gustavo Alberto Herrera Ávila, quien actúa en representación de la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR extemporáneo el recurso de reposición impetrado por el doctor Gustavo Alberto Herrera Ávila, quien actúa en representación de la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO CUARTO: CONFIRMAR en todas sus partes el Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 004 de fecha 20 de junio de 2024, con fundamento en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia, fallo que fue determinado así:

ARTÍCULO PRIMERO: Fallar Con Responsabilidad Fiscal de conformidad con el Artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en la cuantía de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$172.510.957) M/CTE.**, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal de Única Instancia No. 1148, conforme se expresa en la parte motiva de la presente providencia, distribuido de la siguiente manera:

- En contra del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.691.533 en calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; en cuantía de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$172.510.957) M/CTE.**, sobre el valor total del daño.
- En contra del tercero civilmente responsable la compañía de seguros **SOLIDARIA DE COLOMBIA** en cuantía de **NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$90.000.000) M/CTE.**, sobre el valor total del daño patrimonial indexado que determinó el presente fallo,



Nit. 891.190.246-1

que afectará la póliza de Seguro Póliza Multirriesgoas No. 630-73-994000000032, sobre el valor total del daño.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE por estado en cartelera en lugar visible de esta Entidad y en página web institucional conforme lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011; y comuníquese así:

- 1) Al señor **Rodrigo Andrés Castro Betancourt**, a través de su correo electrónico rodrigoandrescastro@hotmail.com, y a través de su defensora de oficio la estudiante de Derecho Luz Marina Moreno Sanabria, al correo electrónico autorizado luzm.moreno@udla.edu.co (folio 470).
- 2) Al Tercero Civilmente Responsable la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, a través de su defensor de confianza el doctor Gustavo Alberto Herrera Ávila correo electrónico autorizado notificaciones@gha.com.co (folio 729).

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, teniendo en cuenta que el presente proceso es de única instancia de conformidad con el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez notificado el presente Auto, continúese con el trámite y procedimiento en el resuelve del Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 004 de fecha 20 de junio de 2024.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE TADEO OYOLA PRIETO
Director Técnico de Responsabilidad Fiscal

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Elaboró:	Edgar Medina Pérez	Profesional Universitario	05-07-24	
Revisó:	Jorge Tadeo Oyola Prieto	DTRF		
Aprobó:	Jorge Tadeo Oyola Prieto	DTRF		